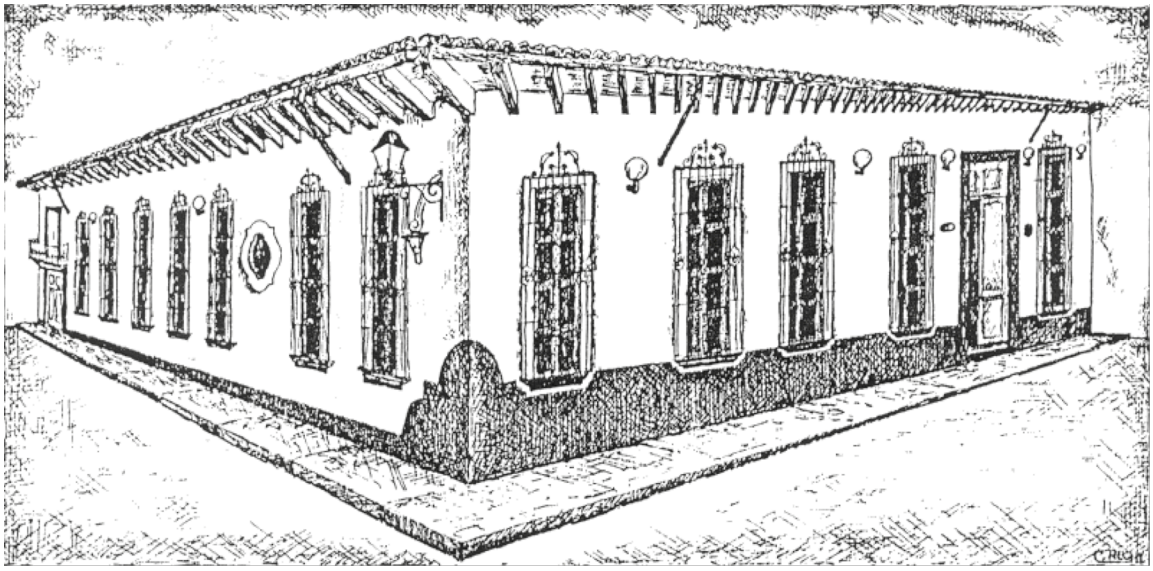
Cuadernos de Trabajo

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales
UNIVERSIDAD VERACRUZANA



36

Venezuela: crisis estatal y lucha de clases

Miguel Ruiz Acosta

Xalapa, Veracruz Abril de 2010

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICO-SOCIALES

Director: Martín Aguilar Sánchez

CUADERNOS DE TRABAJO

Editor:
Feliciano García Aguirre

Comité Editorial:
Joaquín R. González Martinez
Rosío Córdova Plaza
Pedro Jiménez Lara
David Skerritt Gardner

CUADERNO DE TRABAJO N° 36
© Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales
Universidad Veracruzana
Diego Leño 8, Centro
Xalapa, C.P. 91000, Veracruz

ISSN 1405-5600

Viñeta de la portada: Luis Rechy (*†)*
Cuidado de la edición: Lilia del Carmen Cárdenas Vázquez

Venezuela: crisis estatal y lucha de clases

Miguel Ruiz Acosta

Cuadernos de trabajo

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales

Universidad Veracruzana

Índice

Introducción

1. El objeto de la investigación y la estructura expositiva
2. El marco de referencia: algunas categorías clave

Capítulo 1. Auge y caída de un bloque histórico: 1958-1998

1.1 Nacimiento y evolución de un bloque histórico (1958-1980)

1.1.1 Los antecedentes

1.1.2 Los orígenes de la "democracia" de Punto Fijo

1.1.3 Consolidación de la hegemonía burguesa

1.2 La dinámica de la crisis (1980-1998)

1.2.1 La crisis del rentismo: medidas heterodoxas y la internacionalización de PDVSA

1.2.2 La dimensión política de la crisis orgánica: crisis de mediación y representación

1.2.3 El Caracazo: ciclo de protesta y agudización de la crisis

1.2.4 La apertura petrolera: el tiro de gracia al modelo rentista

Capítulo 2. Crisis orgánica y lucha de clases: 1998-2004

2.1 Movimiento bolivariano "por arriba" y "por abajo" (1998-2001)

2.1.1 Elecciones presidenciales de 1998

2.1.2 Asamblea Constituyente y nueva Constitución

2.1.3 Las elecciones del 2000

2.1.4 Organización de las clases subalternas (I): de la dispersión a la organización

2.1.5 El problema de la soberanía: petróleo y leyes habilitantes

2.2 Insurrección de las clases dominantes y respuesta del bloque popular (2002-2004)

2.2.1 Insurrección de las clases dominantes. Acto primero: golpe de Estado

2.2.2 Insurrección de las clases dominantes. Acto segundo: el paro petrolero-empresarial

2.2.3 Organización de las clases subalternas (II): entre la autonomía y la subordinación

2.2.4 Las Misiones sociales (I): su nacimiento

2.2.5 Las clases dominantes. Acto tercero: de cacerolas, guarimbas y referendos

Capítulo 3. Los perfiles de un nuevo orden estatal

3.1 La reconstrucción de las bases materiales de la Nación

3.1.1 Reconstruyendo las bases materiales de la Nación (I): la "Nueva PDVSA"

3.1.2 Reconstruyendo las bases materiales de la Nación (II): ¿Un nuevo modelo de acumulación?

3.1.3Reconstruyendo las bases materiales de la Nación (III): la Reforma Agraria

3.2 Redefinición de las relaciones Estado-clases sociales

3.2.1 Debilidad orgánica del bloque popular: las elecciones regionales de 2004

3.2.2 Las Misiones sociales (II): su desarrollo

3.2.3 Reconstitución de las bases simbólicas del Estado-Nación: la ideología bolivariana

3.2.4 Un salto adelante…¿Y dos atrás?

A manera de conclusión

Bibliografía

Un determinado momento histórico-social no es nunca homogéneo, por el contrario, es rico en contradicciones. Éste adquiere "personalidad", es un "momento" del desarrollo, por el hecho de que cierta actividad fundamental de la vida predomina en él sobre las otras, representa una "punta" histórica: pero eso presupone una jerarquía, un contraste, una lucha. Debería representar el momento dado, quién representa esta actividad predominante, esta "punta" histórica.

Antonio Gramsci

Por eso, es que voy a valerme del pensamiento, de algunas de las ideas de ese gran pensador revolucionario italiano, Antonio Gramsci, para hacer una reflexión sobre el momento que estamos viviendo. Una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morir y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer

Hugo Chávez

Introducción[1]

1. El objeto de la investigación y la estructura expositiva

A una década del comienzo del milenio, la tendencia predominante en la forma en que solemos estudiar procesos sociales continúa siendo fragmentaria. Al ser esta forma de aproximación la que posee la hegemonía al interior de los centros de producción y divulgación del pensamiento pretendidamente científico (universidades, centros de investigación, etcétera), el pensamiento crítico se ha visto relegado a un segundo plano.

No obstante, pervive una tradición de investigación cuya apuesta principal es la de reconstruir las complejas dinámicas del devenir social desde un punto de vista que articula sus diferentes aspectos o dimensiones. Nos referimos a la tradición marxista, en el sentido que la entiende el historiador inglés E.P. Thompson: como una *tradición abierta, exploratoria, autocrítica*.[2]

Es desde ese paradigma que nos aproximamos a uno de los procesos sociales latinoamericanos contemporáneos que más controversia ha generado entre propios y extraños: la emergencia de una fuerza social que, bajo la bandera del bolivarianismo, está siendo protagonista de transformaciones de la formación social venezolana. En particular, queremos plantear la tesis de que la emergencia de dicha fuerza es producto de la forma particular del devenir de la crisis prolongada del Estado venezolano; proceso que implicó, al menos, la crisis de dos dimensiones fundamentales de dicha formación social: por un lado, la de su patrón de reproducción de capital centrado en la captación y distribución de la renta petrolera y, por otro, el quiebre del entramado político-jurídico-cultural que se conoció como la "democracia de Punto Fijo". Como se advierte, la preocupación se centra en la articulación compleja y contradictoria de dos aspectos de la vida social que el marxismo clásico denominó con las metáforas de *estructura* y *superestructura*.

---

[1] La presente es una versión ligeramente modificada de la tesis que el autor presentó a la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, para optar por el título de Magíster en Estudios Latinoamericanos.

[2] Edward Palmer Thompson, *Miseria de la Teoría*, Barcelona, Crítica, 1981.

La tesis parte de la premisa de que para poder comprender a cabalidad la naturaleza de dicha crisis estatal –crisis orgánica o crisis de hegemonía, en el sentido que le dio Gramsci– es necesario remontarnos, por lo menos, al periodo de constitución de un *bloque histórico* o sistema *hegemónico* que articuló el patrón rentista y la democracia *puntofijista*. Inaugurado formalmente en 1958, ese bloque se fue consolidando a lo largo de la década de los sesenta y setenta. Sin embargo, por su propia dinámica y por los cambios en la forma en que se articulaba con el mercado mundial, el aspecto económico-estructural del bloque comenzó a entrar en crisis durante la segunda mitad de la década de los setenta. Poco a poco, y sobre todo después de las revueltas sociales de 1989, la crisis económica se fue tornando crisis orgánica; no sólo el patrón rentista se había agotado sino el conjunto del sistema político-cultural: los venezolanos se fueron alejando cada vez más de los espacios tradicionales de mediación social (viejos partidos, sindicatos, etc.), y comenzaron a expresar su descontento de múltiples formas: fundando nuevos partidos, manifestándose en las calles e, incluso, tramando insurrecciones para derrocar a los gobiernos en turno. Es decir, la lucha de clases saltó a un primer plano como no lo había hecho desde hace cuarenta años.[3]

Expositivamente el libro está organizado en tres capítulos. En el primero, se aborda la emergencia, el desarrollo y la crisis del bloque histórico post-1958. El segundo comienza con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de la República en 1998 y continúa hasta 2004. En ese breve periodo de tiempo se condensó la lucha de clases en torno a dos polos sociales: el polo bolivariano o popular, y el polo opositor. En este capítulo se describe tanto el proceso de constitución orgánica de cada uno de los bloques mencionados, así como los principales momentos de su confrontación. Finalmente, en el tercer capítulo se analizan dos de las principales dimensiones (materiales y simbólicas) del proyecto nacional encabezado por

[3] Entendiendo lucha de clases en un sentido amplio, no restringida al ámbito de la producción sino extendida a otras esferas de la vida social, en particular a la arena del Estado: "El conflicto de clases por lo general se convierte en una guerra declarada sólo cuando se exterioriza, en particular porque el brazo coercitivo del capital está fuera de los límites de la unidad productiva. Esto significa que cuando surgen confrontaciones violentas por lo general no son directamente entre el capital y la mano de obra. No es el capital en sí, sino el estado, el que se hace cargo del conflicto de clases cuando intermitentemente rebasa los muros y adopta una forma más violenta". Ellen Meiksins Wood, *Democracia contra capitalismo*, México, Siglo XXI-UNAM, 2000, p. 55.

Chávez, que comenzó a delinearse con mayor claridad a partir de 2004, y que está suponiendo una redefinición profunda de la relación del Estado con las clases sociales venezolanas.

Los lectores familiarizados con la tradición marxista y con los postulados de Gramsci, sobre el Estado y su crisis, podrán comenzar la lectura del capítulo 1 sin mayores preámbulos; para aquello que deseen aproximarse o recordarlos, recomendamos el siguiente…

2. Marco de referencia: algunas categorías clave

En primer lugar es necesario exponer, con la mayor claridad posible, qué se entiende por Estado y, naturalmente, cuál es la relación de éste con la *sociedad burguesa* y con el tipo particular de *política* que le es propia.

Como este no es el espacio para explayarse sobre la noción de la política en el marxismo,[4] baste señalar que tiene su origen en la comprensión de que las relaciones *fundamentales* de la dominación en las sociedades burguesas se ubican no en la esfera de la política y lo estatal, sino en la de las relaciones de propiedad y de producción; es decir, en el terreno de la economía. Allí es donde tiene su *origen* la relación básica de dominación moderna: la que ejerce el *capital* sobre el *trabajo*, la cual se manifiesta en la existencia de una sociedad de dos clases *fundamentales*: la de los productores directos (las y los trabajadores) y la de los apropiadores del trabajo *ajeno* (la burguesía).

Pero, para desgracia del capital, esa dominación, por sí misma, no le garantiza que su mando sobre el trabajo se haga estable a lo largo del tiempo. No, esa relación necesita ser completada por otro tipo de *proceso* social diferente al de las "simples" relaciones de dominio-subordinación entre sí mismo y el trabajo; es precisamente *ese proceso al que se llama Estado*. Pero ¿cuál es la naturaleza de ese proceso estatal? ¿Qué es exactamente el Estado? En primer lugar y como ya se podrá advertir, el pensamiento marxista toma distancia de aquellos enfoques que ven al Estado como una *cosa* o conjunto de *cosas*. Por el contrario, el acento está

[4] Como bien señala Mészáros, la concepción original de Marx sobre la *forma* política propia del capitalismo se encuentra dispersa a lo largo de *toda* su obra: desde los manuscritos de juventud, hasta los de su madurez; no obstante su dispersión temporal, esa concepción de Marx forma un todo orgánico cuyos, componentes esenciales son presentados en la monumental obra de István Mészáros, *Más allá del Capital*, Caracas, Vadell Hermanos Editores, 2001, p. 533 y ss.

puesto en la dimensión *relacional* de su existencia; además, de relaciones que no son estáticas, sino que se modifican a lo largo del tiempo: *relaciones en proceso*.

La necesidad lógica e histórica de la aparición de vínculos de tipo estatal no es, por supuesto, exclusiva del capitalismo, pero sí adquiere características propias bajo este régimen de metabolismo social. La principal de ellas es presentarse a sí mismo como el espacio de reconstitución de una sociedad desgarrada en clases, cuyo desgarramiento se funda ya no en la *dependencia directa* entre las personas (como en regímenes metabólicos precedentes), sino en la *libertad formal* de las mismas. Esa realidad inaugurada por el régimen del capital se traduce en la separación *radical* entre el productor y su producto, entre la economía y la política, etc. Justamente por eso es que el capital necesita recomponer permanentemente su dominación directa en una esfera en dónde todas las personas *aparezcan* como iguales, aunque esa igualdad sólo sea *formal* y no real, *sustantiva*.

Es así como el proceso Estado se presenta como una *necesidad* del capital; como aquella *comunidad imaginaria* de la que hablaba Marx,[5] en donde los vínculos de dominación originales son permanentemente completados… pero con la participación política de los dominados o subalternos, y es justamente esa participación política de los subalternos la que diferencia al Estado capitalista de los tipos de estados que le precedieron. En síntesis, como apunta Ávalos,

> El proceso Estado no es inmediatamente relación de dominación, sino precisamente proceso de superación aparente de la dominación. Por medio del proceso Estado las relaciones de dominación se transmutan en relaciones de aparente reciprocidad, constructoras de espacios de armonía incluyente y de homogeneidad equitativa. Y esto hace que el Estado sea el que cierre el círculo de la dominación […] Podemos decir, entonces, que el proceso estatal es la reconstitución cotidiana y permanente, subjetiva y objetiva, de la unidad comunitaria de los seres humanos que está realmente desgarrada por relaciones de dominación (G. Ávalos, 2001: 267).

Al ser los subalternos partícipes (en mayor o menor medida, pero partícipes al fin) del proceso cotidiano de reconstitución de ese orden, surge necesariamente la pregunta de *cómo* es posible

[5] A decir de Ávalos "…cuando la reproducción de la vida del todo social descansa sobre el trabajo no de todos sino sólo de algunos, resulta obvio que la producción de las condiciones vitales será desigual. La comunidad política surgida sobre esa base será, en realidad, una comunidad ilusoria. Es ilusoria porque su base será la apropiación por unos, del trabajo (que quiere decir vida) de los demás". Gerardo Ávalos, *Leviatán y Behemoth: figuras de la idea de* Estado, México, UAM-X, 2001, p. 271.

que esto suceda. O, en otras palabras, *cuál es la clave* de su participación en el proceso estatal. En este sentido, el marxismo ha desarrollado dos grandes hipótesis de acuerdo al desarrollo histórico de los propios estados capitalistas. La primera, formulada por el propio Marx, es que la función de ese orden estatal era básica y fundamentalmente represiva, lo cual era del todo cierto en su tiempo;[6] es la concepción del Estado gendarme o *Estado vigilante* nocturno, como diría mucho más tarde Gramsci.

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las clases subalternas fueron conquistando con sus luchas (y con no pocas penas y sangre) mayores espacios en la vida estatal (reconocimiento de derechos, configuraciones políticas más incluyentes, etc.). Con ello, muy lentamente las funciones estatales ya no podían limitarse a las de policía: la fuerza debía, sin desaparecer del todo, dar mayores espacios para el debate y la inclusión de ciertas demandas de los subalternos. Esa mutación de los estados no fue menor, significó profundos cambios tanto en la forma de hacer política como en la correlación de fuerzas entre las clases. Poco a poco las funciones de los estados (sobre todo en los países centrales, pero también en cierta medida en los de la periferia) se fueron ampliando hacia otras esferas que trascendían la pura fuerza, como la construcción de un conjunto de instituciones abocadas a la salud, la educación, la infraestructura, etc. Esta nueva realidad dio paso a la segunda hipótesis histórica sobre el papel del estado capitalista. Si bien es cierto que Engels hacia el final de su vida ya había captado esas transformaciones moleculares del Estado, no fue sino a Gramsci a quien le tocó formular con más precisión teórica ese proceso.

A partir de la atenta observación de la sociedad de su época, Gramsci logró captar algo que era cada vez más evidente: los estados desarrollaban otro tipo de *fuerza* además de la sancionada en el derecho y ejercida por las bayonetas; una fuerza de una cualidad distinta a la simplemente *coercitiva*: el *consenso*. Ese nuevo elemento tenía la función básica de hacer

[6] Por ejemplo, en su análisis de la Comuna de París de 1871 Marx afirmaba "El poder estatal centralizado, con sus órganos omnipresentes: el ejército permanente, la policía, la burocracia, el clero y la magistratura […] procede de los tiempos de la monarquía absoluta y sirvió a la naciente sociedad burguesa como un arma poderosa en sus luchas contra el feudalismo […] Después de cada revolución, que marca un paso adelante en la lucha de clases, se acusa con rasgos cada vez más destacados el carácter puramente represivo del poder del Estado". Carlos Marx, "La guerra civil en Francia", en Carlos Marx y Federico Engels, *Obras* escogidas, vol. II, Moscú, Editorial Progreso, 1976, pp. 230-231.

partícipes "voluntariamente" a los subalternos en el continuo proceso de dominación llamado Estado. Otro de los grandes aportes de Gramsci a la *teoría marxista de la política* fue haber aclarado que esa función de consenso no se ejercía sólo desde los diferentes espacios del aparato estatal ("sociedad política" en palabras del propio Gramsci), sino que era operada cada vez más por un conjunto de instituciones "vulgarmente llamadas privadas" o *sociedad civil* (iglesias, escuelas, medios de comunicación, etc.). Es por eso que los intérpretes de Gramsci suelen hablar de una concepción *ampliada* de Estado. Gramsci creía que no se podía comprender la dinámica estatal atendiendo a uno sólo de los polos. Por el contrario, sólo la articulación de ambos (fuerza y consenso) podía dar cierta estabilidad al orden estatal pues, como había mostrado la historia reciente, los estados apoyados exclusivamente (o casi) en la fuerza, tendían a ser muy inestables por las constantes rebeliones de los subalternos, quienes no se sentían partícipes de esa "comunidad" estatal.

El sentimiento de exclusión hundía sus raíces en varios sustratos: carencia de derechos políticos y ausencia de condiciones materiales mínimas para una vida digna. Sólo en la medida en que los procesos de acumulación y las luchas de los trabajadores por mejores condiciones de vida y mayor participación en la esfera política se desarrollaron, los diferentes ordenamientos estatales se fueron estabilizando, siempre relativamente, en permanente tensión. Entonces, la tarea para que las clases dominantes continuaran manteniendo el *status quo* se volvió más compleja, pues no nada más debían ceder algunos espacios *políticos* anteriormente vedados a los grupos subalternos (producto de la ampliación del sufragio y los cargos de elección popular) sino también ceder, *hasta cierto punto,* en el terreno de la acumulación; tuvieron que moderar (siempre contra su voluntad) su voraz instinto de acumulación pues, de no hacerlo, la capacidad de insubordinación de los trabajadores crecería, tanto en los espacios políticos conquistados como en los centros de producción, en las calles, etcétera.

Si bien es cierto que este proceso descrito se dio de forma muy desigual a lo ancho del mundo (casi siempre con más celeridad en los países centrales, por su capacidad de "exportar" las contradicciones de la acumulación hacia el exterior, hacia las periferias), también es cierto que iba ganando terreno en aquellos países periféricos con un acelerado desarrollo industrial y una clase obrera en expansión. De esta manera, la propia expansión y desarrollo del capital iba

transformando también las formas de existencia del Estado. Ahora, la tarea de éste ya no podría limitarse a la del gendarme represivo, sino que tendría que ser completada o "cubierta" por las tareas de organizar el consenso. Gramsci llamó a la combinación de ambas *hegemonía*.

Por tanto, los llamados *estados democráticos modernos* adquirían cierto espesor, cierta densidad de organizaciones y relaciones sociales antes inexistentes y, con ello, se transformaba también la forma "clásica" de la estrategia de lucha de los subalternos que Gramsci identificaba con la guerra frontal o de movimientos; ahora. de lo que se trababa era de dar la batalla por la hegemonía en cada una de esas "trincheras" del proceso estatal. El revolucionario italiano era perfectamente consciente que esa hegemonía de las clases dominantes, para que fuera verdaderamente tal y se pudiera mantener por un tiempo más o menos prolongado, debía abarcar todos los aspectos de la vida social; debía ser al mismo tiempo económica, política, cultural, etcétera.

> El hecho de la hegemonía presupone indudablemente que se tomen en cuenta los intereses y las tendencias de los grupos sobre los cuales la hegemonía será ejercida, que se forme un cierto equilibrio de compromiso, esto es, que el grupo dirigente haga sacrificios de orden económico-corporativo, pero también es indudable que tales sacrificios y tal compromiso no pueden afectar a lo esencial, porque si la hegemonía es ético-política, no puede dejar de ser también económica, no puede dejar de tener sus fundamento en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo decisivo de la actividad económica.[7]

Decía Gramsci que esa hegemonía presupone que se tomen en cuenta los intereses de los grupos subalternos. Lo que no se debe olvidar es que dichos intereses son de orden muy variado, y no se limitan a las cuestiones de orden material (económico-corporativo), sino que también incluyen necesidades de otro tipo: simbólicas, culturales, recreativas, etc. Es por ello que la hegemonía no puede ser producto sino de la compleja articulación entre lo "estructural" y lo "superestructural"; es decir, entre una forma particular de organizar la acumulación en el terreno de las relaciones de producción y las fuerzas productivas y su organización jurídico-político-cultural. Justamente, cuando un conjunto de fuerzas sociales son capaces de organizar todas esas dimensiones en función de su dominación hegemónica (es decir, con el consentimiento más o menos activo de los subalternos) es que podemos hablar de un bloque histórico como articulación orgánica entre la economía, la política, la cultura, el derecho, etc.

[7] Antonio Gramsci, *Cuadernos de la cárcel* (edición crítica del Instituto Gramsci), vol. V, México, ERA-BUAP, p. 42.

Por el contrario, cuando ni el modelo de acumulación ni las superestructuras que les son propias logran garantizar niveles mínimos de inclusión de los grupos subalternos, sobrevienen las crisis orgánicas, crisis de hegemonía o crisis estatales, las cuales suelen prolongarse por décadas:

> Los fenómenos orgánicos dan lugar a la crítica histórico-social, que afecta a las grandes agrupaciones, más allá de las personas inmediatamente responsables y más allá del personal dirigente. Al estudiar un periodo histórico se revela la gran importancia de esta distinción [entre lo orgánico y lo ocasional o coyuntural]. Tiene lugar una crisis, que en ocasiones se prolonga por decenas de años. Esta duración excepcional significa que en la estructura se han revelado (han llegado a su madurez) contradicciones incurables y que las fuerzas políticas operantes positivamente para la conservación y defensa de la estructura misma se esfuerzan todavía por sanar dentro de ciertos límites y por superarse. Estos esfuerzos incesantes y perseverantes […] forman el terreno de lo 'ocasional' sobre el cual se organizan las fuerzas antagónicas que tienden a demostrar […] que existen ya las condiciones necesarias y suficientes para que determinadas tareas puedan y por lo tanto deban ser resueltas históricamente (A. Gramsci, 1999, vol. V: 33).

Las crisis de hegemonía significan que las clases dominantes pierden su capacidad de dirigir al resto de la sociedad, básicamente mediante los mecanismos de consenso y participación activa de las masas, por lo que el elemento de la represión se hace cada vez más presente:

> Si la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea, ya no es "dirigente", sino sólo "dominante", detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual antes creían, etc. La crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo, y en ese interregno ocurren los más diversos fenómenos morbosos.[8]

Este tipo de crisis no siempre se resuelven por la vía revolucionaria progresiva; es decir, por la construcción de una nueva hegemonía mediante la cual alguno de los sectores de las clases subalternas logre dirigir un nuevo bloque histórico. En algunas ocasiones se terminan imponiendo salidas de tipo represivo las cuales sólo prolongan la crisis orgánica o, en otras, las resoluciones son de tipo reformista, que no hacen sino reestructurar las formas de dominación dentro de la misma estructura y restablecen la hegemonía, con lo cual los resultados son nuevos equilibrios políticos inestables.

[8] Antonio Gramsci, *Antología* (selección, traducción y notas de Manuel Sacristán), México, Siglo XXI, 1970, p. 33.

Un aspecto central en los procesos de construcción de nuevas hegemonías es el de la organización e institucionalización:

> La hegemonía implica necesariamente una dimensión organizacional: no hay producción de hegemonía sin desarrollo de instituciones o aparatos, sin una práctica estructurada materialmente, de la lucha ideológica, cultural y política. En el marxismo de Gramsci […] la teoría de la hegemonía es parte fundante de una teoría de la organización".[9]

En este mismo sentido, Portantiero destaca que el concepto de hegemonía incluye la constitución de las clases en voluntades políticas, a través de planos articulados de acción institucional:

> Así, lo político, como producción de hegemonía, no aparece como el 'corolario' de un proceso social, sino como la modalidad del proceso mismo capturado en toda su complejidad, porque la distinción entre orden económico y orden político no posee carácter orgánico (como lo cree el liberalismo y su versión invertida, el marxismo vulgar) sino que sólo es una herramienta analítica […] El análisis de clase de la hegemonía se transforma en análisis político de su producción cuando coloca su atención en la relación con las instituciones (1985: 282 y ss.).

Esta última idea es la que precisamente sirvió como guía a lo largo de la investigación. Así, el presente trabajo puede leerse como la exposición general de la producción y la crisis de una forma hegemónica de ejercer la dominación, misma que implicó la construcción, el desarrollo y el colapso de instituciones políticas que encarnaron una modalidad específica de relación entre las clases en una periodo histórico más o menos bien definido: el de los vulgarmente llamados "populismos" latinoamericanos.

Sin embargo, creemos que dicho concepto ha funcionado más como una camisa de fuerza que como una verdadera categoría de análisis que de cuenta de las complejidades del periodo referido. Por ello hemos recurrido a otro referente teórico, desarrollado por algunos marxistas latinoamericanos, que nos parece más adecuado para nuestro propósito: el de lo nacional-popular. Entre las principales contribuciones en este sentido destaca la de Juan Carlos Portantiero (1986), quien, retomando una de las líneas del pensamiento de Gramsci –la necesidad de todos los movimientos de reforma social de desarrollar una voluntad colectiva nacional-popular– reflexionó sobre las complejas relaciones ente lo estatal, lo nacional, lo

[9] Juan Carlos Portantiero, "Notas sobre crisis y producción de acción hegemónica", en Julio Labastida (coord.), *Hegemonía y alternativas políticas en América* Latina, México, Siglo XXI, 1985, p. 282.

popular y la lucha de clases en América Latina.[10] Así, Portantiero propone la existencia de dos principios de agregación en torno a los cuáles ha girado la lucha de clases en América Latina: lo "nacional-estatal" y lo "nacional-popular". El primero de los polos enfatiza el principio de lo estatal; es decir, de la comunidad imaginaria que se presenta a sí misma como la superación de la dominación de clases: el Estado como orden, que define los límites de lo nacional y ejerce la soberanía desde el poder constituido. Al respecto, Portantiero precisa:

> Dentro de esta concepción los conflictos no son anulados, pero sí fragmentados por una lógica corporativa. La escisión entre sociedad civil y Estado, entre economía y política, forma de la dominación bajo el capitalismo, se consolida a través de esta imagen nacional coagulada en el Estado, en la que este último polo opera la reconciliación entre los distintos intereses privados.[11]

Pero –continúa– si en ese permanente proceso, el Estado-Nación

> se muestra incapaz de seguir corporativizando lo político, manteniéndolo como choques de intereses en el interior de un orden hegemónico dotado de legitimidad en el que esa fragmentación es recompuesta, estamos en presencia de un proceso de desagregación de lo "nacional-popular" frente a lo "nacional-estatal" (1986: 123).

Es decir, dicha desagregación sobreviene cuando los subalternos comienzan a reclamar para sí las representaciones de lo nacional, normalmente enajenadas en el Estado, como lo ejemplifica el caso venezolano que analizaremos a continuación.

[10] Otro de los pensadores latinoamericanos más destacados que se apoyaron sus interpretaciones en la noción de los *nacional-popular* fue el boliviano René Zavaleta Mercado quien veía la formación de lo *nacional-popular* como "la conexión entre lo que Weber llamó democratización social y la forma estatal". René Zavaleta, *Lo nacional-popular en Bolivia*, La Paz, Plural Editores, 2008, p. 9.

[11] Juan Carlos Portantiero, "Lo Nacional-popular y la alternativa democrática en América Latina", en *Los abogados y la democracia en América* Latina, Quito, ILSA, 1986, p. 122.

CAPÍTULO 1. Auge y caída de un bloque histórico: 1958-1998

1.1 Nacimiento y evolución de un bloque histórico

1.1.1Los antecedentes

Desde la emancipación política de España a comienzos del siglo XIX, en Venezuela comenzó la larga lucha de las clases dominantes venezolanas para ir afianzando un orden estatal que les permitiera garantizar los diversos procesos de acumulación ya en marcha, para lo cual debían afrontar una serie de obstáculos: "Los primeros 70 años, aproximadamente, de vida política independiente estuvieron signados por la regionalización del poder, el caudillismo cívico-militar y la subsiguiente debilidad del Estado central como sistema institucionalizado de dominación de cobertura nacional".[12] O, para ponerlo en términos de Carrera Damas, esa fragmentación era la más clara manifestación de la debilidad del *proyecto nacional* de las clases dominantes.[13]

Varios autores coinciden en que no fue sino hasta el advenimiento de la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935) cuando comenzaron a sentarse las bases materiales de un Estado capitalista, propiamente moderno y eficiente en sus tareas de garantizar el orden para la acumulación. Sontag señala tres logros principales del gomecismo: a) eliminación del caudillismo y constitución de un verdadero Estado central; b) establecimiento de un ejército nacional; c) construcción de una burocracia estatal como aparato administrativo.[14]

Durante este mismo período, la nación venezolana dejó de ser una formación socioeconómica basada fundamentalmente en la agricultura para convertirse rápidamente en una *nación petrolera*. Este proceso ha sido descrito por numerosos analistas; una de las

---

[12] Heinz Sonntag, "La democracia en Venezuela: una visión prospectiva", en González Casanova (coord.) *La* democracia en América Latina. Actualidades y perspectivas, México, D.F., La Jornada-CIICH-UNAM, 1995, p. 206.

[13] Germán Carrera Damas, *Venezuela: proyecto nacional y poder social*, Barcelona, Crítica, 1986.

[14] Heinz Sonntag, "Venezuela: el desarrollo del Estado capitalista y de su concepción teórica", en González Casanova (coord.), *El Estado en América Latina. Teoría y práctica*, México, D.F., Siglo XXI-Universidad de las Naciones Unidas, 1998, p. 407.

interpretaciones más sugerentes es la de Fernando Coronil para quien dicho proceso de identificación de la nación venezolana con esa mercancía *sui generis* que es el petróleo, se produjo durante la década de 1930.[15] Para dicho autor, desde ese momento el petróleo se volvió el punto de referencia obligatorio de la política y la economía venezolanas. Los diferentes proyectos de nación enarbolados por los grupos políticos giraron en torno a quiénes y cómo se debería dar el usufructo del preciado hidrocarburo: "El petróleo estaba en el centro de estas visiones. El negocio del petróleo se transformó en un negocio del Estado, y la política petrolera se convirtió en el negocio de la política".[16] En este mismo sentido, Lacabana sostiene que "El petróleo desarticuló las relaciones de poder existente; los sectores tradicionales ligados a la agricultura fueron cediendo paso a los sectores capitalistas, y el Estado adquirió una posición hegemónica en tanto dueño del recurso natural y captador de la renta internacional" (M. Lacabana, 2006: 219).

Por su parte, Sonntag afirma que el trasfondo de la modernización del Estado que inició con Gómez y continuó con sus sucesores inmediatos (López Contreras, 1936-1941 y Medina Angarita, 1941-1945) fue la transmutación de la estructura de clases, "básicamente el surgimiento de sectores medios con pretensiones de una efectiva representación política y la paulatina modificación de las clases dominantes, amén de la incipiente aparición de sectores proletarios y su sindicalización" (H. Sonntag, 1998: 407).[17]

---

[15] "El hecho notable de que esta manera más bien común de identificar a una nación neocolonial por su producto fundamental de exportación parezca completamente natural, no hace más que subrayar la necesidad de entender por qué ciertas naciones han llegado a vincularse tanto con ciertas mercancías que éstas han llegado a identificarlas". Fernando Coronil, *El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela*, Caracas, Nueva

Sociedad. 2002, p.77.

[16] Miguel Lacabana, "Petróleo y hegemonía en Venezuela. La construcción de un proyecto nacional

democrático-popular en el siglo XXI", en Arceo, Enrique y Eduardo Basualdo (Comp.) *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales*, Buenos Aires, CLACSO, 2006, p. 96.

[17] El papel clave que desempeñaron los trabajadores venezolanos en la consolidación del Estado y en los diferentes momentos de su relativa democratización, es detalladamente analizado por el clásico estudio de Charles Bergquist, *Los trabajadores en la historia latinoamericana*. *Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y Colombia*, Bogotá, Siglo XXI, 1988, p. 235 y ss. Para este autor la lucha de clases que se libró durante las décadas posteriores a los treinta, son un elemento explicativo fundamental de la posterior instauración de la democracia puntofijista de 1958.

La consolidación del Estado en tanto proceso estable de dominación aún no se hallaba realizada hacia mediados de los cuarenta. Prueba de ello fue la rebelión de un grupo de jóvenes oficiales del ejército y del partido Acción Democrática (AD)[18] quienes, en octubre de 1945, derrocaron al presidente Medina Angarita, con lo cual se inauguró lo que a la postre se conocería como el *trieno* (1945-1948). En estos momentos las clases dominantes se encontraban en un proceso de redefinición de su proyecto, pero no consideraban aún que la democracia representativa fuera el sistema político más idóneo para mantener su hegemonía sobre el resto de las clases. Las contradicciones inherentes al proyecto de los golpistas llevaron a una parte de ellos a deponer al presidente Rómulo Gallegos (AD), que había sido elegido en las primeras elecciones generales del país en 1947 y reinstalaron una dictadura bajo diferentes modalidades, misma que duraría una década.

Durante este periodo dictatorial, representado por la figura del general Marcos Pérez Jiménez, se consolidaron algunos rasgos del Estado venezolano, siendo el principal el incremento de su participación en el espacio económico en tanto propietario de capital.[19] Por su parte, Lacabana nos recuerda que en este periodo también se vivió un proceso de fortalecimiento y diversificación del capital local, además de la transformación de la estructura de la población por la creciente migración rural-urbana. La especulación de tierras urbanas, así como la necesidad de otorgar servicios a los nuevos barrios y urbanizaciones, llevó al fortalecimiento de una fracción de la burguesía ligada a las actividades de construcción y de especulación urbana (M. Lacabana, 2006: 321).

Si bien una parte de la burguesía consolidaba su poder al amparo del proyecto estatal de obras públicas, otra parte de la clase dominante tuvo un fuerte conflicto con el gobierno en turno por su decisión de reservar para el Estado algunas industrias estratégicas como la

[18] Partido de corte socialdemócrata fundado en 1941 y articulado, en un primer momento, en torno a la figura del político y escritor Rómulo Gallegos. Como señala Roberts, en sus orígenes, AD "como la mayoría de los partidos populistas, movilizó una militancia social heterogénea, pero su compromiso con la reforma agraria, los derechos laborales y las organizaciones de origen popular, generó un fuere apoyo entre los trabajadores del campo y la ciudad". Kenneth Roberts, "La descomposición del sistema de partidos en Venezuela vista desde un análisis comparativo", en Revista *Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 7, No. 2 (mayo-agosto), 2001, p. 77.

[19] Por ejemplo, Sonntag señala que el Estado se hizo dueño de bancos, fábricas, comercios, empresas de comunicación social, de transporte, etc. (1998: 408).

siderúrgica y la petroquímica. Para Sonntag, dicho conflicto "contribuyó a fomentar en las clases dominantes la conciencia de que un cambio de régimen político hacia formas democrático-representativas del Estado no les era necesariamente desfavorable" (H. Sonntag, 1998: 408-409). Para ello, comenzaron a contactar con los líderes (en el exilio) de AD y de otros partidos políticos, cuyos programas de democratización y modernización del Estado coincidían cada vez más con las necesidades de la burguesía. Pero no sólo una parte de las clases dominantes se planteó la meta de transitar a un sistema de democracia representativa; también las clases subalternas, muy castigadas por la represión, se sumaron a esa demanda.

Esa conjunción de factores derivó en el derrocamiento de la dictadura como resultado de un amplio movimiento de masas, fomentado por algunos partidos políticos, por un lado y, por el otro, por el resquebrajamiento del apoyo militar al dictador Pérez Jiménez. Así, el 23 de enero de 1958 una junta cívico-militar tomaba el control del gobierno. Sin embargo, éste sería sólo el primer paso de un largo proceso de reorganización de la forma de ejercer la dominación bajo nuevas premisas. A partir de ese año de 1958 comenzaría a desarrollarse una nueva institucionalidad estatal más acorde con las tareas que la burguesía se había impuesto, pero siempre bajo la presión de las clases subalternas. Sobre los escombros del Estado *gendarme* de Pérez Jiménez, poco a poco se iría desplegando un nuevo orden estatal que si bien era formalmente democrático, no excluiría el uso de la fuerza y la represión, sobre todo durante los primeros años de su existencia.

1.1.2 Los orígenes de la "democracia" de Punto Fijo

Una vez derrotada la dictadura venezolana del general Marcos Pérez Jiménez se instaló una Junta Provisional de Gobierno el 23 de enero de 1958. Con este movimiento las clases dominantes apostaban a "establecer las bases sociales y políticas sobre las que pudiera descansar la democracia representativa como forma de dominación y de legitimación del Estado capitalista" (H. Sonntag, 1998: 411). Para ello, era necesaria la renovación del proyecto democratizador-modernizador original del partido socialdemócrata Acción Democrática qen por lo menos cuatro aspectos: a) incorporación plena de la burguesía al mismo; b) búsqueda de una forma de convivencia con las compañías trasnacionales petroleras;

c) implementación de una política económica que cubriera las necesidades (aunque fuera de manera parcial) de grupos y clases no necesariamente coincidentes, cuyo eje sería en un primer momento la industrialización sustitutiva de importaciones y c) asegurar el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas. Siguiendo a este autor, la prioridad de la cúpula de AD fue "la transformación del proyecto en función de un amplio pacto entre grupos, sectores y clases" (H. Sonntag, 1998: 412). El objetivo a largo plazo sería el establecimiento de lo que el autor llama –siguiendo a Portantiero– un *Estado de compromiso* o, como sugiere Lacabana, un *pacto policlasista*.

Pero tal pacto tuvo desde sus orígenes dos características que le imprimirían un fuerte sesgo excluyente: por un lado, su nacimiento fue producto de un acuerdo "desde arriba", cupular;[20] por otro, excluía la participación de los grupos organizados de izquierda como el Partido Comunista Venezolano (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), este último una escisión por la izquierda de AD. Ambos aspectos se conjugaron desde un primer momento. Baste recordar que aún antes de la firma de los acuerdos de Punto Fijo de 1958, los dos principales partidos venezolanos (AD y COPEI)[21] firmaron el Pacto de Nueva York (1957) en donde se estableció la exclusión del PCV. Además, como señala Maza Zavala, también era prioritario hacer a un lado al ala izquierda de AD y a toda su disidencia interna, lo cual se cumplió aproximadamente en un periodo de 10 años.[22]

Sin embargo, de mayor significación aún que el pacto explícito entre los partidos mencionados, fue el pacto tácito entre éstos y la burguesía venezolana. Al respecto, Maza sostiene:

> La burguesía, como tal, colaboró tácticamente, en los últimos momentos, en el derrocamiento de la dictadura, y estableció con impresionante decisión y precisión sus objetivos y metas en la

[20] Por esta característica, Cockroft apunta que algunos de los críticos del naciente sistema político, prefirieron caracterizarlo como "pactocracia". James Cockroft, *América Latina y Estados Unidos. Historia y política país por país*, México, D.F., Siglo XXI, 2001 p. 454 y ss.

[21] El Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) se fundó en 1946, un año después de AD; su principal organizador fue Rafael Caldera, de inspiración socialcristiana y quien a la postre sería Presidente de Venezuela en dos ocasiones.

[22] Domingo Maza Zavala, "Historia de medio siglo en Venezuela: 1926-1975", en AA.VV. *América Latina: historia de medio siglo*, Vol. 1-América del Sur, México, D.F., Siglo XXI-Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1977, p. 532.

> etapa de transición que se inició en 1958. Sus personeros participaron en el gobierno provisorio, en proporción determinante no tanto por el número sino por las posiciones y la entidad de los participantes, y desde allí impusieron, en esencia, los intereses dominantes de clase (D. Maza, 1977: 552).

Para este mismo autor, por primera vez en la historia venezolana, la burguesía se consolidó en el poder con un verdadero sentido político de clase. En este mismo orden, Lacabana apunta que "La burguesía venezolana encontró en esos partidos [AD y COPEI] las organizaciones mediadoras más importantes, que al asumir la responsabilidad de Estado le aseguraron la legitimidad y hegemonía del dominio burgués" (M. Lacabana, 2006: 323). Esto sólo podía lograrse dado que ambos partidos con los años lograrían una amplia base social, lo que permitió, además de sentar las bases para un modelo de acumulación, asegurar el control político de buena parte de la población.

No obstante las pretensiones inclusivas, durante los primeros años de la "democracia" *puntofijista* fueron proscritos algunos partidos de izquierda y perseguidos sus militantes.[23] Además, al interior del ejército se gestaron intentonas de derrocar por vía militar al primer gobierno emanado del pacto; al sistema democrático-representativo le tomaría un buen tiempo consolidarse y cerrar las puertas a los militares inconformes. Una parte de la izquierda también optó por la vía armada, sobre todo, después de la victoria del Movimiento Cubano de Liberación en 1959. A los gobiernos del pacto les llevó una década reducir a su mínima expresión a los movimientos armados de izquierda.

Si bien es cierto que gobiernos posteriores a los de Betancourt, como el de Raúl Leoni (1964-1969), tomaron una mayor distancia de los intereses inmediatos de las clases dominantes y recogieron en su proyecto algunas reivindicaciones obreras y campesinas, no menos cierto es que echaron mano de la represión contra algunos de los principales movimientos sociales, como el de los estudiantes. Su policía secreta cometió varios asesinatos y comenzó a operar una estrategia de desapariciones de líderes políticos y sociales. Como recuerda Maza, "después de 1958 el respeto a los derechos humanos, consagrados expresamente en la Constitución nacional [de 1961], ha sido quebrantado con dolorosa

[23] Como señala Cockroft, el gobierno de Betancourt respondió a las diferentes protestas sociales "encarcelando congresistas, suspendiendo los periódicos de oposición y desatando a los escuadrones terroristas contra los grupos disidentes de estudiantes, obreros y campesinos" (J. Cockroft, 2001: 451).

frecuencia" (D. Maza, 1977: 547). De esta manera, la "democracia" venezolana nacía como producto de un pacto de los de arriba que, para consolidarse, tendría que combatir a sangre y fuego a una parte importante de la población; exclusión política, persecución, represión y muerte se convertirían en los pilares ocultos del sistema de dominación.

1.1.3 Consolidación de la hegemonía burguesa

Para que la burguesía consolidase su hegemonía no podía apoyarse exclusivamente en la represión, sino que tenía que poner en marcha un modelo de acumulación y un orden estatal que, a la vez que satisficiera sus necesidades de expansión, incorporara política y económicamente (aún en forma parcial) al resto de las clases sociales. En el caso del modelo de acumulación, lo que se promovió en un primer momento fue la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), la cual tuvo vigencia hasta mediados de los setenta. La ISI era un proyecto que si bien había comenzado a echar raíces durante la dictadura de Pérez Jiménez, lo había hecho de forma poco coherente y, sobre todo, bajo el criterio arbitrario del dictador y su camarilla, con lo cual se excluía de algunos de sus beneficios a sectores importantes de las clases dominantes.[24]

La ISI requería del concurso de un amplio abanico de fuerzas sociales, "con participación implícita de Fedecámaras (organismo coordinador de los empresarios), Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV, organismo coordinador de los sindicatos obreros y campesinos) y partidos del establecimiento, e implementado por la burocracia técnico-administrativa, las fuerzas armadas y las de represión política" (D. Maza, 1977: 533); es decir, de la consolidación de un orden estatal que la teoría política liberal denomina el *Estado corporativo*.

[24] Bajo la dictadura, nos recuerda Coronil, "los hombres de negocios del país aumentaron sus inversiones en áreas tradicionales –banca, construcción, comercio- y también diversificaron sus actividades al invertir en nuevos sectores: agricultura comercial e industria. Pero esta expansión, que era producto del auge petrolero, se vio limitada por las políticas de Pérez Jiménez, que intentaban de modo simultáneo fomentar el crecimiento económico e impedir el desarrollo de un sector privado independiente; esto es, alentar el espíritu de empresa y al mismo tiempo contenerlo dentro de límites asfixiantes y a menudo arbitrarios…" (Coronil, 2002: 210-211).

Paralelamente a la lucha que las élites libraron contra los grupos de izquierda al interior de sus propios partidos y de los sindicatos, comenzó un proceso de incorporación de las cúpulas sindicales a los diferentes espacios del aparato estatal, de los cuales habían estado excluidas durante la dictadura de Pérez Jiménez. Dada la naturaleza básicamente corporativa tanto de AD como de COPEI desde su inicio, el naciente sistema político de *Punto Fijo* supuso la participación directa de numerosos representantes de importantes sectores de la sociedad civil (sindicatos, asociaciones estudiantiles, campesinos, empresarios, etc.) en los espacios formales de poder (Congreso, aparato burocrático, etc.). A decir de Sonntag, la inclusión de tales cúpulas en el sistema político, "mitigó durante mucho tiempo y con bastante efectividad la capacidad de rebelión de amplios sectores populares, involucrándoles, de hecho, a través de sus líderes elegidos, en el pacto" (H. Sonntag, 1998: 415).

La inclusión política no garantizaba, por sí misma, la estabilidad del orden estatal; era necesaria la incorporación de las demandas materiales de los subalternos. Como señala Sonntag, "En la medida en que el pacto venía ampliándose, perfeccionándose y arraigándose, el modelo de desarrollo implícito en su constitución generó las políticas económicas y sociales acordes con su esencia" (H, Sonntag, 1998: 415). Este mismo autor indica tres características principales del orden estatal que se fueron desarrollando a partir de 1958:

a) Institucionalización de la planificación estatal; intervención permanente del Estado en el desarrollo social y la esfera económica; maduración del carácter capitalista del Estado;

b) Consolidación de un *Estado de compromiso nacional-popular* mediante la modernización y diversificación de la sociedad: "los grupos hegemónicos logran comprometer al conjunto de sectores, grupos y clases sociales invocando la 'nación' como actor de los procesos sociohistóricos de cambio…" (H. Sonntag, 1998: 416); y presentan al Estado como un ente por encima de las contradicciones de clase; internalización de esa ideología por la mayoría de los ciudadanos;

c) Desarrollo de un Estado productor y distribuidor de la renta petrolera.

Para comprender la naturaleza del proceso estatal posterior a los cincuenta, es necesario detenerse en este último punto. Los autores que mejor han analizado la importancia del petróleo en el metabolismo global de la sociedad venezolana son Asdrúbal Baptista y Bernard

Mommer. La contribución del primero se centra en la caracterización de lo que llama el *capitalismo rentístico* venezolano. Los principales componentes del mismo son el tamaño del empleo público, el patrón de acumulación y la sobrevaluación del tipo de cambio.[25]

Al ser el Estado el propietario del recurso petrolero y receptor de la renta, goza de márgenes de acción muy amplios; uno de ellos es la capacidad de ofrecer empleos directos sin generar presiones inflacionarias. Realizando una comparación con otros países de similar desarrollo económico pero sin ingresos rentísticos, Baptista propone la categoría de "empleo normal" para designar el volumen de empleos públicos que corresponderían en condiciones no rentísticas a la economía venezolana. Históricamente, se aprecia que el empleo efectivo (real) del sector público ha sido excedentario respecto al "normal" en un promedio de 56% entre 1950 y 2002, lo cual sólo se explica por los ingresos rentísticos provenientes del petróleo.

Respecto al patrón de acumulación de capital, Baptista señala que a diferencia de las economías no rentísticas en donde las tasas de producción y consumo están estrechamente asociadas, en Venezuela las tasas de consumo han sido significativamente mayores a las del crecimiento del Producto Interno Bruto no rentístico (PIBnr). Entre los treinta y los setenta, la tasa anual de crecimiento promedio fue de 4%, mientras que la del PIBnr de 3,1%. Otro de los componentes del patrón de acumulación es la proporción entre el capital público y el privado. En las economías no rentísticas el capital privado suele ser significativamente mayor que el público. En Venezuela tal proporción ha tenido dos grandes etapas: a comienzos de los veinte la relación entre uno y otro era paritaria; hasta mediados de los treinta la balanza se inclinó a favor del capital privado que llegó a tener más de 70% en la participación, su máximo durante todo el siglo XX. De allí en adelante, el porcentaje del capital privado en la economía comenzó una larga caída, inversamente proporcional al incremento del capital público. A inicio de los sesenta se comenzó a abrir la brecha entre uno y otro, hasta llegar al presente, cuando la proporción de los años treinta se ha invertido a favor del capital público (70%) respecto al privado (30%).

El tipo particular de modelo de acumulación rentista señalado arriba también supuso la protección estatal y la permanente transferencia de parte de la renta hacia algunos sectores de

[25] Asdrúbal Baptista, "El capitalismo rentístico. Elementos cuantitativos de la economía venezolana", en *Cuadernos del CENDES*, Año 22, No. 60, Caracas, septiembre-diciembre, 2005.

la burguesía, con la finalidad de garantizarles mejores condiciones para la acumulación, mediante la

> […] transferencia de fondos públicos, protección arancelaria, subsidios, baja tributación, que le permitían posiciones oligopólicas y altas ganancias. Su capacidad para apropiar la renta petrolera a través de la acción del Estado y para asociarse con el capital extranjero le permitió controlar la dinámica económica a través de una posición dominante en distintos sectores económicos que la situó como un sector cuasi-monopólico en el aparato productivo interno (M. Lacabana, 2006: 324).

Este mismo autor sostiene que la expansión del mercado interno, el cambio tecnológico y las altas tasas de ganancia, basadas en las políticas de protección y subvención del Estado durante los sesenta, contribuyeron a la prolongación de la ISI y al desarrollo de un nuevo modelo de acumulación apoyado en las industrias básicas y destinado a diversificar las exportaciones.

Sin embargo, la ISI irá entrando en crisis hacia fines de los sesenta con lo cual se daría un reacomodo de las fracciones de la burguesía del proyecto estatal en su conjunto: "A partir de 1974 se consolida el nuevo modelo de acumulación: el Estado abandona parcialmente su papel de proveedor de subsidios –aun cuando seguirá financiando la actividad productiva privada– para transformarse en Estado productor y rector" (M. Lacabana, 2006: 326). Como señalan Baptista y Mommer, el incremento inesperado de la renta, producto de la crisis petrolera de 1973, permitiría sostener ese modelo por algunos años más, pero sólo mientras permanecieron altos los precios del petróleo.[26]

A partir de 1974 se dio una articulación más orgánica entre los actores del pacto tácito (partidos y burguesías). Como se indicaba, el aumento de la renta petrolera le brindó al Estado un poder económico y político que nunca antes había tenido: permitió un tipo de distribución de la renta que favoreció no sólo a la burguesía sino que amplió las capas medias y enriqueció a burocracias estatales, partidistas y sindicales, muchas de las cuales pasaron a engrosar las filas de la burguesía venezolana. En este sentido, Lacabana apunta que "los sectores subordinados también lograron su incorporación al sistema político y al Estado como parte de la construcción de la hegemonía por los sectores dominantes en un ambiente social donde

[26] Asdrúbal Baptista y Bernard Mommer, "Renta petrolera y distribución factorial del ingreso", en Nissen, Hans-Peter y Bernard Mommer (coord.) *¿Adiós a la bonanza? Crisis de la distribución del ingreso en Venezuela*, Caracas, ILDIS-Cendes-Nueva Sociedad, 1989.

predominaba un imaginario policlasista" (M. Lacabana, 2006: 326). Es decir, el modelo de acumulación rentista permitió la consolidación de un *bloque histórico* fundado en

> […] la cooperación de las fuerzas laborales, la Iglesia y las FFAA con el régimen democrático y, en última instancia, estimuló una convergencia programática entre los dos partidos principales. Acción Democrática y Copei estuvieron de acuerdo en un modelo de desarrollo estatista protector de los derechos de propiedad, y no promotor de reformas radicales, mientras permitía el pago de ayuda monetaria a los principales grupos organizados de la sociedad venezolana.[27]

De esta manera, durante los setenta uno de los mayores conflictos sociales (más allá de la convergencia programática entre los partidos) se dio en el seno de la burguesía, para definir cuál de sus fracciones afianzaba su hegemonía política al interior del Estado. Durante este periodo se fue consolidando una fracción denominada *burguesía emergente*, caracterizada por su control del aparato financiero y su vinculación con el aparato estatal. Este sector, más que de nuevos capitalistas se componía por grupos económicos que ya existían en los años anteriores, pero que tenían un papel subordinado en el bloque de poder. Por otro lado, la *burguesía emergente* poseía fuertes vínculos comerciales, financieros y tecnológicos con las empresas trasnacionales. Esta fracción es la que impulsaría desde 1974 una reorientación del modelo de acumulación hacia el mercado mundial: "La fracción emergente redefine su posición dentro del Estado para ser el nexo con el capital extranjero […] lo compromete directamente en la producción y logra el control político, la hegemonía política dentro de la burguesía" (M. Lacabana, 2006: 328).

Es durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), cuando estos grupos orientaron al Estado a un proceso de inversión descontrolada para financiar un modelo basado en el desarrollo de las industrias básicas, del cual eran directamente beneficiarios. Para implementar dicho modelo, se requería de un nuevo tipo de configuración estatal, en particular de su estructura administrativa. En este sentido se implementó el Plan Tinoco (creación de institutos autónomos fuera del control del Estado central), "para evitar las mediaciones burocráticas y partidistas e instalar nuevos mecanismos de ejercicio de la dominación por la fracción emergente de la burguesía" (M. Lacabana, 2006: 328). Otro hecho que marcaría

[27] Kenneth Roberts, "Polarización social y resurgimiento del populismo en Venezuela", en Ellner, Steve y Daniel Hellinger (eds.), *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, Caracas, Consejo de Investigación de la UDO / Nueva Sociedad, 2003, p. 78.

significativamente el ulterior desarrollo del *bloque histórico* fue la "nacionalización" del petróleo.

Dicho proceso de "nacionalización" (1975-1976) fue el resultado de una política sostenida de maximización del ingreso fiscal recaudado por las exportaciones petroleras: "En los dos años previos a la nacionalización, por cada dólar de exportación petrolera, el gobierno recaudaba 80 céntimos en rentas, regalías e impuestos".[28] Ya desde 1970 el Estado venezolano comenzó a exigir impuestos a las exportaciones a discreción. Sin embargo, en esos mismos años setenta las tres principales compañías extranjeras (Exxon, Shell y Mobil) empezaron a nombrar a venezolanos en altos cargos ejecutivos de sus empresas, muchos de los cuales pasarían a encargarse de la administración de la nueva compañía nacionalizada: Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), cuyo decreto de creación siguió de inmediato a la ley de nacionalización a mediados de 1975. Además, el gobierno de Pérez se encargó de introducir en la *Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos*, el artículo 5º, que permitía a PDVSA asociarse con inversionistas extranjeros en "empresas mixtas", siempre que las necesidades tecnológicas así lo requiriesen. Es decir, dejaba abiertas las puertas a las compañías privadas para seguir controlando una parte de la industria, como se menciona hacia el final del capítulo.

El financiamiento del modelo de acumulación reestructurado no se fundó solamente de los crecientes ingresos petroleros sino que recurrió cada vez más al endeudamiento externo, lo que años más tarde se revertiría como crisis fiscal y cambiaria. El endeudamiento fue masivo tanto en el sector público como en el privado. Al calor de los ingresos extraordinarios post-73, las empresas públicas (creadas principalmente durante los sesenta), comenzaron a invertir desmesuradamente al margen del presupuesto del gobierno central: "Con tal propósito recurrieron al mecanismo de los empréstitos externos, lo que significó en la práctica una hipoteca sobre la renta petrolera futura" (A. Baptista y B. Mommer, 1989: 21). Por otro lado, los recursos de los que dispusieron los empresarios privados, también producto de la renta,[29]

[28] Bernard Mommer, "Petróleo Subversivo", en http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/article/524/1.PDF, 1.08.03.

[29] Baptista y Mommer señalan que "una fracción significativa de la inversión privada se origina asimismo en la renta petrolera" (1989: 21), lo que suele pasar desapercibido por buena parte de la literatura económica.

comenzaron a sobrepasar su capacidad de absorción de capital, por lo que ya desde los setenta comienza una recurrente fuga de capitales que hacia 1994 se calculaba entre 60 y 90 mil millones de dólares; es decir, el equivalente a dos o tres veces el monto de la deuda externa (F. Coronil, 2002: 423). Con todo, el PIBnr siguió creciendo hasta 1978, año en que se estancó, aunque el ingreso nacional continuó creciendo hasta 1981, gracias a al renta petrolera, pero cada vez más debido al proceso de endeudamiento que no tardaría en estallar.

1.2 La dinámica de la crisis orgánica: 1980-1998

1.2.1 Medidas heterodoxas y la internacionalización de PDVSA

No será sino durante la administración de Luis Herrera Campíns (1979-1984), cuando el modelo de acumulación rentista entró en franca crisis y se comenzaron a aplicar las primeras medidas de corte neoliberal. Una de las primeras manifestaciones de la crisis del modelo fue el estancamiento de la actividad económica:

> En 1983, la combinación de este estancamiento con los retardos del gobierno de Herrera Campíns para refinanciar la deuda externa, junto con la situación desatada en los mercados financieros internacionales por la declaración de moratoria del gobierno mexicano, profundizaron una salida masiva de capitales del país. Ello desembocó en la decisión gubernamental de devaluar el bolívar por primera vez en más de veinte años e ir a un sistema de cambio preferencial.[30]

Justamente un año después de esta primera devaluación y ya en funciones el presidente Jaime Lusinchi de AD, el nuevo gobierno anunció un paquete económico que buscaba crear las condiciones favorables para obtener una refinanciamiento de la deuda externa. Dichas medidas han sido calificadas como un "paquete heterodoxo", pues combinaban algunas disposiciones de corte neoliberal, con otras de tipo neokeynesiano:

> a) nueva devaluación del bolívar y establecimiento de un sistema cambiario con cuatro tipos de cambio diferenciales; b) medidas compensatorias no salariales para aminorar el impacto del ajuste en la remuneración de los trabajadores en sustitución de los tradicionales aumentos generales de sueldos/salarios que anteriormente decretaban los gobiernos (en esta materia se anunciaron un bono de transporte para los asalariados que devengaban menos de Bs. 3.000 al

[30] López Maya, Margarita y Luis Lander "Ajustes, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela: 1984-1998", en Sader, Emir (coord.) *El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas*, Bs. As., CLACSO, 2001, p. 423.

> mes por un período de dos años, y el establecimiento de comedores industriales); c) continuación y profundización del sistema administrado de precios que venía desenvolviéndose en el gobierno anterior, y que en la práctica significaría en los meses siguientes una liberalización de precios de bienes y servicios; d) aumentos de la gasolina y otros derivados de hidrocarburos; e) voluntad de no aumentar la burocracia y reducir los gastos de funcionamiento del Estado (M. López Maya y L. Lander, 2001:235).

Sin embargo, estas medidas estabilizadoras se verían amenazadas muy pronto por un brusco descenso de los precios mundiales del petróleo durante 1986 (a menos de 10 dólares el barril). En diciembre de ese año, el gobierno de Lusinchi se vio obligado a decretar otra devaluación para poder equilibrar la balanza de pagos. A partir de ese momento, por razones de estabilidad política y en contradicción con algunas de las medidas del paquete de 1984, el gobierno aumentó el gasto público para asegurar el triunfo electoral de su partido en las elecciones de 1989: "Esto trajo como consecuencia una merma excesiva de las reservas internacionales, la cual, en combinación con otros desequilibrios económicos, llevó al Presidente a declarar una moratoria del pago de la deuda en enero de 1989, un mes antes de finalizar ese período gubernamental" (M. López Maya y L. Lander, 2001: 237).

Estas decisiones del gobierno habían tenido como objetivo no sólo la estabilización relativa de la economía y la continuidad política de AD, sino favorecer a ciertos sectores aliados de la burguesía. Tal como apunta Lacabana, "el otorgamiento de divisas con tasas preferenciales para el pago de la deuda externa privada darán lugar a nuevas transferencias de ingresos y a una fuerte corrupción, donde participan funcionarios públicos y empresarios en detrimento de las políticas sociales y los ingresos del trabajo, conformando una nueva relación Estado-sectores empresariales" (M. Lacabana, 2006: 330). En ese mismo sentido, otros analistas sostienen que

> […] alrededor de la tasa de cambio y de la libre convertibilidad que se estructuró, durante ese período, el bloque social dominante: una burguesía que controla los circuitos de importación y de circulación de capital dinero, un conjunto de empresas transnacionales líderes en mercados industriales fuertemente oligopolizados, organizados como terminales de ensamblaje de bienes nacionales de consumo y una burguesía asentada sobre actividades 'naturalmente' protegidas, que combinan la industria de la construcción con la apropiación de renta urbana, una de las formas de transformación interna de la renta petrolera obtenida a escala internacional (Porta et al., 1983: 153, citados en M. Lacabana, 2006: 330).

El significado profundo que sobre el conjunto de las relaciones Estado-clases sociales tuvieron estas transformaciones fue captado sintéticamente por Mommer cuando describía en 1987 el nuevo orden de cosas:

> El capitalismo rentístico venezolano llegó así a su fin y a la fase de transición hacia un capitalismo normal, en medio de una política económica caótica [...] La burguesía venezolana, en medio del auge distributivo, no sólo había logrado apropiarse una parte sustancial de la renta actual, sino además de la renta futura, hipotecada con la deuda pública. Con ello se invirtió por completo la situación hasta entonces tradicional en la Venezuela petrolera, de un Estado rico frente a una burguesía relativamente pobre, hoy una burguesía inmensamente enriquecida se enfrenta a un Estado con apuros económicos e impone así, por primera vez, su dominio directo. La deuda externa se revela así como el mecanismo que permitió la expropiación del Estado rentista (citado en M. Lacabana, 2006: 330-331).

Paralelamente a estas reformas económicas, la tecnocracia de PDVSA a la que se le había otorgado un amplio margen de acción comenzó a tomar las primeras acciones que, en los hechos, revertían algunas de las conquistas de la nacionalización de 1975, en particular la política de maximización fiscal de renta. La llamada política de "internacionalización" fue ideada por los gerentes de PDVSA a mediados de los ochenta para poder trasladar ganancias al extranjero, fuera del control del gobierno, mediante los *precios de transferencia* (es decir, los precios cargados en las ventas a sus propias filiales en el exterior). PDVSA vendió petróleo a sus filiales europeas a unos precios de transferencia con descuentos importantes, trasladando de este modo una porción de sus ganancias fuera del alcance del gobierno. Un poco después, la compañía se enfocó en el mercado estadounidense con la creación de una filial llamada CITGO: su inversión en Estados Unidos consistió en la compra de ocho refinerías, instalación de más de 14 mil gasolineras y la suscripción de contratos de suministro a largo plazo, garantizando grandes descuentos a sus nuevos afiliados, con lo cual siguió incrementándose el volumen de ganancias trasladadas al exterior. Se calcula que los descuentos para los socios estadounidenses eran del orden de entre 2 y 4 dólares por barril. Es decir, un subsidio directo a la economía norteamericana. Según cálculos retomados por Mommer, durante la segunda mitad de 1990, PDVSA traspasó mediante ésos y otros mecanismos un promedio de 500 millones de dólares anuales en ganancias, desde sus cuentas domésticas a sus filiales extranjeras.

En términos políticos, el efecto más duradero fue la pérdida de monitoreo y control de los niveles de producción de crudo y de gas por parte del Ministerio de Energía, con lo cual se

permitió a PDVSA minimizar el pago de regalías al Estado venezolano. Es por esto que al interior de los círculos energéticos del país se comenzó a describir a PDVSA como *un Estado dentro del Estado*; es decir, una compañía que si bien formalmente era nacional, en realidad respondía a los intereses de los propios gerentes que actuaban como dueños de ella y no rendían cuentas sino a sí mismos.

En este contexto de crisis del modelo rentista, autonomización de las decisiones sobre la política petrolera del resto de las políticas estatales y, en síntesis, de una profunda redefinición de las relaciones entre el Estado y las clases sociales, Carlos Andrés Pérez asumió por segunda ocasión la presidencia de la República en febrero de 1989. No bien comenzaba su administración, cuando anunció el segundo paquete de tipo neoliberal, pero éste, a diferencia del anterior, se ajustaba a la ortodoxia y se supeditaba a las condiciones impuestas por la firma de una Carta de Intención con el FMI el 28 de febrero de 1989:

> Los contenidos principales de estas políticas fueron: a) restricción del gasto fiscal; b) restricción de los niveles salariales; c) unificación del régimen cambiario con paridad unitaria y flotante; d) tasas de interés flexibles y aumento inmediato de los niveles de las tasas de interés reguladas, eliminación de los créditos a tasas preferenciales para la agricultura, establecimiento de las tasas de interés por el mercado tan pronto como fuera posible; e) reducción de los controles de precios; f) postergación de programas de inversión de baja prioridad; g) reducción de los subsidios; h) introducción de un impuesto sobre la venta; i) ajuste de las tarifas de los bienes y servicios provistos por empresas estatales, incluyendo los precios de los productos petroleros en el mercado interno; j) reforma en el régimen comercial, incluyendo la eliminación de la mayor parte de las excepciones en las tarifas y liberalización de las importaciones; k) levantamiento de las restricciones de las transacciones internacionales, incluyendo la inversión extranjera y la repatriación de dividendos (M. López Maya y L. Lander, 2001: 237).

A estas medidas neoliberales hay que agregar el hecho de que la mayoría de los altos funcionario del gobierno de Pérez no provenía de las filas de su partido, por lo que enfrentó la oposición de buena parte de éste y del resto de los partidos: "Carlos Andrés Pérez, una vez electo abusó de la autonomía que tradicionalmente habían concedido los partidos políticos venezolanos a su liderazgo al nombrar para su gabinete económico a un equipo de tecnócratas radicalmente neoliberales".[31]

[31] Pablo Andrade (ed.), Constitucionalismo autoritario: los regímenes contemporáneos en la Región Andina, Quito, UASB-Corporación Editora Nacional, 2005, p. 77.

Por otro lado, los mecanismos tradicionales para la concertación entre capital y trabajo, representados en las centrales Fedecámaras y CTV, respectivamente, tampoco lograron funcionar, pues unas y otra sentían lesionados sus intereses por parte de la nueva política económica del gobierno. Sin embargo, este paquete fue derrotado por las revueltas de febrero de 1989, como veremos más adelante. Pero antes de recordemos cómo la crisis del modelo rentista y los primeros ensayos de ajuste económico neoliberal también se tradujeron en una crisis en los ámbitos superestructurales del *bloque histórico*.

1.2.2 La dimensión política de la crisis orgánica: crisis de mediación y representación

Otra de las dimensiones de la crisis, asociada al cambio en el patrón de acumulación y a la modificación de la estructura de clases, fue la creciente erosión de los mecanismos de resolución de conflictos y mediación de intereses entre el Estado y las clases subalternas:

> En primer lugar, se debilitaron los lazos corporativistas como resultado de las prolongadas dificultades económicas y de cambios en el mercado laboral. Tanto el movimiento obrero como el campesino, históricamente aliados de AD, fueron triturados en el proceso. La agricultura fue incapaz de mantenerse económicamente competitiva a consecuencia de una sobrevaluación de la moneda que respondía al papel clave del petróleo en la economía (K. Roberts, 2001: 193).

El mismo autor, retomando datos de la Organización Internacional del Trabajo, sostiene que la membresía de los sindicatos cayó en casi un tercio entre 1988 y 1995, y el porcentaje de la fuerza laboral afiliada a los sindicatos se redujo en casi la mitad, de 26,4% a 13,5%. Como se decía arriba, la contra cara de la desindustrialización y el aumento del desempleo formal fue el incremento del empleo precario por cuenta propia. Por la naturaleza de la informalidad (dispersa y fragmentaria), a la CTV le era imposible organizar y dar cohesión política a esa enorme masa de trabajadores cuentapropistas.

Como apuntan K. Roberts (2001) y S. Ellner,[32] las políticas socioeconómicas aplicadas por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, descritas en el acápite anterior, coadyuvaron

[32] Steve Ellner, "El sindicalismo frente al desafío del chavismo", en Ellner, Steve y Daniel Hellinger (eds.), *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, Caracas, Consejo de Investigación de la UDO / Nueva Sociedad, 2003[a]; Steve Ellner, "Tendencias recientes en el movimiento laboral venezolano: autonomía vs control político", en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 9, No. 3, septiembre-diciembre, 2003b.

a la crisis de representación de la CTV y la pusieron en el dilema entre su lealtad política al partido y al propio presidente y el imperativo de preservar su legitimidad en las bases sindicales:

> Cuando el programa de choque de Pérez causó los saqueos [ver infra] masivos en Caracas, la CTV respondió declarando una huelga nacional, pero ésta inmediatamente se convirtió en una acción menos combativa, para mantener los lazos con el partido de gobierno […] El movimiento laboral, en particular, tenía una organización muy rígida y estaba políticamente demasiado comprometido para actuar como agente principal de la representación popular en esta sociedad civil más escindida, autónoma y fragmentada (K. Roberts, 2003: 83).

No obstante, al interior de la CTV se vivieron contradicciones importantes entre la cúpula defensora de las reformas de corte neoliberal y aquellos que se resistían a someterse al nuevo modelo de dominación, como el caso del poderoso Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica (Sutiss) de la empresa privatizada Sidor, en la región de Guayana, en el estado de Bolívar.[33] Esa ruptura se expresó en dos dimensiones: en la creciente autonomía que fue adquiriendo el sindicato respecto a la cúpula de la CTV y en el terreno político-electoral, pues los trabajadores del acero comenzaron a militar en un partido de izquierda, Causa Radical (Causa R) y a dar la batalla también en ese frente. A lo largo de la década la fuerza del sindicato autónomo así como la del partido obrero se fue expandiendo hacia otros grupos subalternos; en esa región que históricamente había sido *adeca,* Causa R logró ganar algunas alcaldías y, en 1989, la gobernación del estado de Bolívar, lo cual había sido posible por una reforma político-electoral implementada en la segunda mitad de los ochenta, como veremos a continuación.

Los primeros intentos sistemáticos de reformar el sistema político por parte de los propios actores del bloque en el poder se esbozaron durante el periodo de Jaime Lusinchi, en especial en 1984, con la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre). Como recuerda Kornblith, "La Copre fue encargada de elaborar un proyecto de Reforma Integral del Estado de largo alcance, así como de proponer acciones concretas e

[33] Ellner (2003a, 2003b) refiere que una de las acciones que más le restarían legitimidad a la cúpula cetevista fue su apoyo las reformas de la legislación sobre seguridad social y prestaciones de fines de los noventa, en franca alianza con la organización patronal Fedecámaras y la clase política tradicional, lo cual contribuyó a desacreditar el sistema tripartito de toma de decisiones que funcionaba desde los setenta.

inmediatas encaminadas a facilitar tales reformas integrales".[34] Sin embargo, la Comisión no logró impulsar ninguna reforma significativa; las primeras reformas de peso habrían de esperar hasta el año de 1989. Algunos meses después del Caracazo, desde las elites políticas se planteó la necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional, para lo cual se puso en marcha una Comisión Bicameral Especial de Revisión de la Constitución. Dicha Comisión operaría durante tres años: desde mediados de 1989 hasta mediados de 1992, cuando fue suspendida.

Más allá de la reforma constitucional, lo que sí prosperó fue una reforma electoral descentralizadora en diciembre de 1989, la cual transformaría significativamente las estructuras locales de poder político y la dinámica interna de los propios partidos:

> El descontento social y político y la crisis de credibilidad hacia los dirigentes políticos tradicionales había llegado a tal extremo que parecía que no les quedaba más remedio para el liderazgo tradicional que cambiar la estructura del Estado y sus instituciones de manera radical. Este sacrificio del sistema político y partidista venezolano fue la reforma descentralizadora en diciembre 1989.[35]

Dicha reforma consistió en la promulgación de un conjunto de leyes sobre *descentralización*. Una de las primeras consecuencias de la reforma fue la emergencia de nuevos partidos políticos y la consolidación de otros muy jóvenes, quienes lanzaron candidatos a las primeras elecciones para gobernadores, alcaldes y concejales municipales, como La Causa Radical (La Causa R), el Movimiento al Socialismo (MAS), Patria Para Todos (PPT), etc. Por primera vez desde 1958, las gobernaciones de los veinte Estados se repartieron, además de los partidos tradicionales, entre el MAS, La Causa Radical y otros pequeños partidos que acompañaron a los primeros en coaliciones, aunque la dupla AD/COPEI siguió dominando la mayoría.

Sin embargo, como recuerdan R. Lalander y F. García (2005), además de la descentralización electoral, entre 1989 y 1992 no fue aprobada ninguna transferencia de responsabilidades a los estados, a pesar de las demandas de algunos gobernadores, incluyendo

[34] Kornblith, Miriam, *Venezuela en los noventa. La crisis de la democracia*, Caracas, UCV-Ediciones IESA, 1998, p. 42.

[35] Rickard Lalander y Francisco García Samaniego, "Chavismo y oposición en Venezuela: Exploraciones críticas sobre democracia, descentralización y populismo", en http://www.ciudadpolitica.com/modules/news/article.php?storyid=569, 1.08.05.

algunos de AD y COPEI. Estos mismos autores comentan que la descentralización, por más limitada que haya sido, no sólo modificó el mapa electoral venezolano, sino también las relaciones de poder al interior de los partidos, permitiendo mayores luchas en su interior y dando mayor poder y autonomía a los gobernadores electos, independientemente del partido al que pertenecieran.

No obstante que las reformas electorales abrieron el espacio político a nuevas fuerzas sociales, por sí mismas no lograron reestablecer la confianza de la mayoría de los venezolanos en su sistema de representación, como los reformadores lo pretendían. Tal vez el mayor indicador de esto fue la más alta tasa de abstención que hasta el momento había registrado la historia contemporánea: 54% en las elecciones regionales de 1989. Al respecto, López Maya apunta: "Tanto el voto de oposición como la abstención electoral […] actuaron como mecanismo de desahogo del descontento político y del malestar social reinante, enviando un mensaje claro, pero no escuchado entonces por los actores hegemónicos".[36] Por el contrario, no sólo se pararon las demandas de profundizar el sistema de descentralización y democratización del sistema político, sino que se tomaron medidas de política económica cada vez más agresivas contra la mayoría de la población.

1.2.3 El Caracazo: ciclo de protesta y agudización de la crisis

No es el hambre, la carencia material, el interés económico o la proyección de sociedades futuras la clave explicativa de la rebelión, insubordinación, resistencia, organización y actividad política de los dominados. En los resortes profundos que impulsan a los dominados a salir del ámbito de la vida privada, a romper el tiempo de lo cotidiano y a intervenir en el escenario de la política se encuentra siempre un fundamento moral: valoraciones acerca de lo justo y de lo injusto, de lo que debe y lo que no debe ser, reglas y principios morales

Rhina Roux

[36] Margarita López Maya, *Del viernes negro al referendo revocatorio*, Caracas, Alfadil Ediciones, 2005, p. 119.

Margarita López Maya ha señalado dos episodios críticos previos a la primera gran revuelta popular que inauguraría el ciclo de protestas en febrero de 1989. El primero se desarrolló en marzo de 1987 por el asesinato premeditado de un estudiante de la Universidad de los Andes (ULA) de Mérida a manos de un abogado por un asunto doméstico. Este hecho desató una ola de disturbios estudiantiles: "La represión que el gobierno aplicó para controlar la protesta fue violenta, produciendo nuevas protestas estudiantiles en una espiral que pareció inextinguible".[37] El segundo episodio sucedió año y medio después, a finales de octubre de 1988, unos meses antes de las elecciones nacionales: un comando del Ejército asesinó a un grupo de pescadores en el Estado de Apure; la masacre desató numerosas movilizaciones que terminaron en disturbios y saqueos; la tragedia también motivó la creación de un movimiento por la defensa de los derechos humanos que tomó forma en el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA).

Los dos acontecimientos descritos revelaron la dimensión moral de la crisis: "la justicia no se estaba administrando para los sectores subordinados, y más allá de este hecho, el poder se estaba ejerciendo de manera arbitraria y sin frenos contra los más humildes, violando cláusulas vitales de la relación entre un Estado que se decía democrático y los sectores populares" (M. López Maya, 1999: 219).

Pero ninguna de estas dos protestas alcanzaría la magnitud ni la trascendencia de las revueltas que siguieron al 27 de febrero de 1989 y que se llegarían a conocer como *El Caracazo* o *El Sacudón*. A partir de ese momento, se abrió una espiral de protestas que, con altas y bajas, continuó hasta los primeros años del gobierno de Hugo Chávez; es decir, más de 10 años después. El 27 de febrero entraron en vigor algunas disposiciones en materia económica: 10% de incremento al precio de la gasolina y 30% de aumento a las tarifas del transporte colectivo. Ambas medidas afectaban de manera directa a todos los venezolanos, lo que desató una ola de protestas, concentraciones, cierre de vías, saqueos, etc. El gobierno nacional no hizo nada para controlar la situación; por otro lado, los partidos y sindicatos no se

[37] Margarita López Maya, Margarita "La protesta popular venezolana entre 1989 y 1993 (en el umbral del neoliberalismo)", en Margarita López Maya (ed.) Lucha popular, democracia, neoliberalismo. Protesta popular en América Latina en los años de ajuste, Caracas, Nueva Sociedad, 1999, p. 217.

hicieron presentes en ningún acto de protesta. La revuelta se generalizó a todas las ciudades importantes del país.[38]

Al día siguiente de iniciadas las protestas, el presidente Pérez decretó el estado de excepción para los próximos días. Con el anuncio se desató la represión por parte de las policías y el ejército. Según diversas fuentes citadas por López Maya, el número de muertos ascendió a más de 400 hacia el día 4 de marzo. La mayoría de ellos eran habitantes de los barrios suburbanos; el *Estado gendarme* volvía a hacer acto de presencia: "El Gobierno se opuso a los intentitos de algunas organizaciones de derechos humanos de investigar lo ocurrido, no dio pasos legales contra los responsables de la violencia indiscriminada y excesiva y no asumió ninguna responsabilidad con los familiares de los muertos y heridos" (F. Coronil, 2002: 417). Los parientes de las víctimas formaron una organización: el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), que se dedicó a denunciar la impunidad de los responsables de la masacre.

Una vez "pacificadas" las protestas, el gobierno de Pérez aceleró la apertura financiera y puso en marcha las reformas de ajuste estructural que incluían un paquete de privatizaciones. Además, se comenzó a experimentar un proceso de reprimarización económica, pues buena parte de la nueva inversión extranjera se dirigió a los sectores petrolero y minero. Por otro lado, la industria fue expuesta a la competencia externa, en un marco sumamente adverso. A partir de 1992, el proceso de desindustrialización se agudizó. Estas medidas le devolvieron a la burguesía comercial importadora y al sector bancario un papel estratégico al interior de la clase dominante y en el proceso de acumulación. Al desaparecer los incentivos financieros para la inversión productiva, muchos de los recursos se transfirieron hacia la especulación financiera. Con ello, la economía en su conjunto vivió un proceso de extranjerización que se completó con la venta de los bancos estatales y privados a capital extranjero después de una crisis bancaria en 1993-1994. Como señala Coronil:

> Estos acontecimientos marcaron una crisis del proyecto populista que había definido la relación entre pueblo y Estado desde 1936. Con el giro hacia políticas de libre mercado y el desmantelamiento del desarrollismo populista, el discurso dominante comenzó a presentar al

[38] Margarita López Maya, *Protesta y cultura en Venezuela. Los marcos de acción colectiva en 1999*, Bs. As., CLACSO, 2002, p. 17.

> pueblo no ya como el virtuoso cimiento de la democracia, sino como una masa humana turbulenta y parásita a la que el estado tenía que disciplinar y el mercado tornar productiva (F. Coronil, 2002: 418).

Las medidas del gobierno de Pérez agudizaron aún más la polarización social que había llevado al estallido del 1989. Con ello se desató un ciclo de protestas descrito puntualmente por López Maya en diferentes trabajos (1999, 2002, 2005). La mayoría de éstas tuvieron un horizonte *económico-corporativo* inmediato: los principales grupos que protestaron fueron los trabajadores de la salud, la educación, la justicia y el transporte, los petroleros, etc., quienes se manifestaron principalmente por las precarias condiciones laborales y por aumentos salariales: "Durante este periodo, ante cada paro el gobierno hacía promesas que después respondía sólo parcialmente, produciendo nuevos reclamos y paros" (M. López Maya, 1999: 225). También comenzaban a hacerse cotidianas la toma de tierras, de calles, autopistas y establecimientos públicos o privados, así como saqueos y huelgas de hambre. Una excepción a los reclamos gremiales fue la organización de algunos paros cívicos, con motivos políticos más amplios.

Dos fueron los principales motivos de las protestas al comienzo de los noventa: 1) contra las medidas económicas en general y algunas en particular como la privatización de servicios y 2) contra políticas muy concretas como el aumento del precio de la gasolina, los abusos en las tarifas de transporte y la represión policial al movimiento estudiantil.

El descontento generalizado provocado tanto por la impunidad del gobierno de Pérez, así como por el deterioro de los niveles de vida de las mayorías, encontró un apoyo inesperado entre algunos mandos medios y la baja tropa de las Fuerzas Armadas:

> En un proceso paralelo a la estratificación de los partidos políticos, los oficiales medios consideraban politizados a los altos oficiales y cómplices de un Estado corrupto que había obligado a las Fuerzas Armadas a reprimir las protestas públicas.
>
> Del mismo modo como había dado por sentada la pasividad de los sectores populares, el Gobierno asumió que la lealtad militar sería eterna, ya que había sido incorporada con éxito al sistema paternalista controlado por los partidos democráticos (F. Coronil, 2002: 419)

Sin embargo, ya desde hacía una década, un grupo de jóvenes militares descontentos con el rumbo de las élites políticas habían comenzado a conspirar en las sombras.[39] Su conspiración

[39] Hacia 1982 un grupo de jóvenes oficiales del ejército educados en la doctrina político-militar bolivariana, así como admiradores de las gestas de Ezequiel Zamora, Simón Bolívar y Simón Rodríguez decidieron formar al interior de las fuerzas armadas un pequeño grupo: el Ejército

estalló a principios de 1992. El primer intento golpista fue encabezado por el entonces teniente coronel Hugo Chávezquien, al frente de un grupo de coroneles, mayores, capitanes y tenientes intentó derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez en la noche del 3 de febrero de 1992. Como es ampliamente conocido, la rebelión no prosperó y varios de sus líderes fueron capturados y llevados a prisión. La segunda intentona la protagonizaron el general Francisco Visconti y los contralmirantes Hernán Grüber Odreman y Luis Cabrera Aguirre. Al igual que la primera, esta sublevación también fue controlada militarmente y algunos de sus participantes huyeron al Perú. Si bien ninguna de las dos tuvo éxito inmediato, ambos golpes (en especial el primero) lograron "desatar un indetenible derrumbe del piso político del gobierno y propiciaron la emergencia de actores y acciones que impulsarían cambios drásticos en el sistema político venezolano" (M. López Maya, 2005: 110).

Fracasados los intentos golpistas de 1992, las protestas populares se intensificaron y se expandieron por todo el país. Poco a poco las demandas gremiales iban confluyendo en una exigencia de tipo político: la renuncia del presidente, la restitución de las garantías, la realización de un referéndum y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. A comienzos de 1993 comenzó a expandirse entre grupos organizados de la sociedad civil (académicos, periodistas, etc.) una demanda que expresaba por sí misma la dimensión profunda del malestar con el sistema: la renuncia del presidente; es decir, la encarnación máxima del poder del Estado. Durante la primera mitad del 1993 un grupo de intelectuales y periodistas dieron a conocer diversos actos de corrupción del presidente Pérez, lo cual, junto a las masivas protestas populares en su contra, condujo a que la Corte y el Congreso decidieran removerlo de su cargo el 20 de mayo, y comenzarle un proceso bajo los cargos de malversación y peculado. Le sucedió en el cargo fue el senador Ramón J. Velásquez, quien tuvo el cometido

---

Bolivariano Revolucionario (EBR), mismo que pronto cambiaría de nombre a Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR-200). Si bien es cierto que por casi diez años el MBR fue una organización dirigida básicamente por militares nacionalistas, ya desde los inicios sus fundadores le intentaron imprimir un carácter dual: cívico-militar. Al principio, el grupo de civiles que se sumó se limitaba a los círculos de familiares y de amigos de los miembros fundadores, algunos de los cuales pertenecían a la izquierda insurreccional. Tanto Chávez como el resto de los oficiales fundadores habían sido educados en la doctrina bolivariana, no sólo al interior de los cuarteles, sino que algunos de ellos habían tenido la oportunidad de realizar estudios universitarios en historia, ciencia política, etc. Al respecto consúltese López Maya (2005: 165 y ss.).

de velar por las próximas elecciones presidenciales y legislativas, con lo cual los niveles de tensión social disminuyeron significativamente.

En un contexto de descrédito total de los partidos políticos tradicionales, el ex presidente Rafael Caldera decidió romper con su partido histórico, COPEI, para lanzar su candidatura a la presidencia con una plataforma de 16 partidos pequeños (los más grandes eran el MAS y Convergencia)[40] que criticaban las reformas neoliberales impuestas por Pérez. En las elecciones celebradas en diciembre de ese año, Caldera resultó ganador; los grandes perdedores, por su parte, fueron los partidos del Pacto de Punto Fijo, los cuales no lograron juntar entre ambos más de 47% de los votos. Otro de los indicadores que expresan la dimensión institucional de la crisis fue la tasa de abstención que alcanzó el nivel récord para elecciones presidenciales: 44%.

Caldera heredó una crisis bancaria que estalló tres semanas antes de su toma de posesión. Esta crisis se había venido incubando en los años anteriores y era producto en buena medida de la desregulación financiera impulsada por los gobiernos que le precedieron. Como apunta Coronil:

> El sistema bancario se había convertido en terreno de especulaciones financieras y competencia oligopólica, como resultado de la inexistencia de leyes efectivas y agencias reguladoras para esa actividad […] Los bancos atraían el dinero público mediante la oferta de tasas de interés ilusoriamente elevadas, y se lo daban en préstamo sin mayores requisitos a sus directivos y asociados, quienes ponían en marcha proyectos especulativos (F. Coronil, 2002: 421-422).

En este contexto de corrupción generalizada, en enero de 1994 el gobierno interino de Velásquez decidió rescatar de la quiebra al Banco Latino a un costo de 1,800 millones de dólares. En ese banco no sólo estaban los ahorros de más de un millón de venezolanos, sino también fondos del Estado. Aunado a la crisis bancaria, el gobierno de Velásquez también resolvió aumentar el IVA, con lo que se desató una ola especulativa, por un lado, y una ola de protestas, por el otro. Esa herencia tuvo que ser asumida por el gobierno de Caldera.

[40] Ya Gramsci advertía en sus apuntes: "La crisis se presenta prácticamente en la siempre creciente dificultad de formar los gobiernos: tiene su origen inmediato en la multiplicación de los partidos parlamentarios, y en las crisis internas permanentes de cada uno de estos partidos" (A. Gramsci, 1999, vol. V: 82).

Al poco tiempo de haber asumido su mandato, Caldera suspendió las garantías constitucionales y restableció controles de cambio sobre la moneda. Aunque carente de recursos financieros para implementar sus planes de gobierno, Caldera había logrado, al menos, posponer el pago de la deuda a los acreedores extranjeros. Sin embargo, para 1996 anunció un nuevo plan económico denominado *Agenda Venezuela*:

> Al igual que el de Pérez, éste puede caracterizarse como de naturaleza ortodoxa. La Agenda Venezuela buscó superar, como lo hizo el paquete de Pérez en su momento, una crisis coyuntural, en este caso bancario-financiera, y comenzar a echar las bases de una economía abierta de mercado. Si bien las políticas sociales contenidas en la Agenda se presentan de manera más elaborada y cuidada que en el Gran Viraje de Pérez, dándoseles más relevancia que en él, la implementación de ambos significó para el país la aplicación previa de un programa de ajuste macroeconómico bastante similar. Las medidas tomadas a partir del mes de abril de 1996 fueron: a) aumento del precio de la gasolina y demás derivados de los hidrocarburos en el mercado interno; b) liberación de las tarifas de los servicios públicos; c) liberación plena del sistema de control de cambios, con la consiguiente devaluación del bolívar; d) incremento de las tasas de interés; e) aumento del porcentaje a pagar por el impuesto a las ventas; f) plan de privatización de empresas públicas; g) liberación de todos los controles de precios, quedando sólo controlados los precios de cinco artículos esenciales de la dieta del venezolano; i) creación de un fondo para la protección del sistema bancario; j) inicio de la discusión para la reforma del sistema de prestaciones sociales; k) programas sociales focalizados para proteger a los sectores más vulnerables de la población (M. López Maya y L. Lander, 2001: 239)

Como señala Andrade, el éxito inicial de esas medidas de "estabilización", parcialmente compensadas por ajustes salariales, fue muy breve: "En 1997 una oleada de huelgas de trabajadores públicos y demostraciones callejeras, así como la continua declinación de los ingresos petroleros del Estado, forzaron al gobierno a abandonar su política económica" (P. Andrade, 2005: 80). Por otro lado, no sólo el Ejecutivo se vio cuestionado por sus decisiones antipopulares; el Poder Judicial también se encontraba en una profunda crisis de corrupción y credibilidad. Finalmente, no estaría completo el cuadro de la crisis sin hacer referencia a la llamada Apertura Petrolera, política que si bien había comenzado a operar durante el gobierno de Pérez, se profundizó bajo el segundo mandato de Caldera.

1.2.4 La Apertura petrolera: el tiro de gracia al modelo rentista

A partir de 1989 se inician distintas acciones que bajo ese nombre incluyeron tres esquemas: convenios operativos, convenios de ganancias compartidas y asociaciones estratégicas, estas

últimas orientadas a la explotación y mejoramiento de los crudos de la Faja del Orinoco: "Este proceso representó una reforma de facto, toda vez que no se modificó ninguna norma, sino que se apeló a una muy laxa interpretación del artículo 5° de la Loreich. Así se otorgaron más de 30 convenios operativos, ocho convenios de ganancias compartidas y cuatro asociaciones estratégicas".[41]

La Apertura constituyó un proceso de profundización del proyecto de los gerentes de PDVSA y trajo como resultado el retorno de compañías extranjeras al negocio de los hidrocarburos. Este fenómeno no puede ser entendido sino en el contexto más amplio del proyecto neoliberal. En esos años, los gerentes de la compañía comenzaron a vender el discurso de la competitividad al gobierno, sosteniendo que las regalías y los impuestos tenían que reducirse para atraer a los inversionistas extranjeros. El primer paso fue la apertura de la inversión privada en los campos marginales productores de crudos convencionales. A este mecanismo se llamó *Contratos de Servicios Operativos*, los que llegaron a producir hasta 2001 alrededor de 500 mil b/d. Es importante señalar que PDVSA se encargó que la producción bajo este tipo de contratos no se sujetara a las cuotas establecidas por la OPEP, con lo cual se abrió la posibilidad para que las compañías extranjeras explotaran los recursos a su antojo, sin ningún tipo de control sobre los volúmenes de producción; además, se establecieron tasas impositivas muy bajas:

> […] la política de Apertura planteó para el sector petrolero la transferencia del sector público al privado de actividades, tanto conexas como medulares, de la industria petrolera nacionalizada en 1976 […] Acompañaron asimismo a esta política una nueva visión de la relación del Estado venezolano con la OPEP, y su ingerencia en el mercado mundial de hidrocarburos. Durante el gobierno de Caldera se sostuvo que los precios internacionales del petróleo debían ser fijados por leyes del mercado sin interferencia ni de gobiernos de países productores ni de los consumidores. También se procedió a una expansión de la producción, superando holgadamente las cuotas acordadas con la OPEP (M. López Maya y L. Lander, 2001: 240).

Esta estrategia se corresponde, según Mommer, con los objetivos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) que fue fundada por los países consumidores a principios de los setenta, precisamente con la finalidad de hacer frente a la OPEP (B. Mommer, 2003: 7). Finalmente, PDVSA también comenzó a exigir menores niveles impositivos para sí misma, lo cual fue

[41] Rodríguez, Alí, "La Reforma petrolera venezolana de 2001", en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Caracas, Vol. 8, No. 2 (mayo-agosto), 2005, p. 190.

logrado en 1993. Paralelamente, el poder discrecional del gobierno sobre el impuesto a las importaciones que había sido creado en 1970, para permitir la recaudación de ganancias extraordinarias en momentos de altos precios, fue suprimido progresivamente hasta desaparecer por completo en 1996. Estas medidas se tradujeron en la caída continúa en los ingresos fiscales petroleros. Como recuerda Mommer, por cada dólar de ingreso bruto, PDVSA pagó al gobierno 71 céntimos en rentas, regalías e impuestos en 1981, pero sólo 39 céntimos en 2000. El siguiente párrafo de Mommer expresa sintéticamente cómo era la relación entre PDVSA y el Estado venezolano durante esta época:

> El control fiscal se relajó cada vez más a lo largo de los años y el control accionario de la compañía por su único accionista –el Estado– en realidad nunca funcionó. El Ministerio por sí mismo no ejerce poder alguno sobre la compañía porque el Presidente nombra a todos sus directores. Ellos son, desde este punto de vista, pares del Ministro. El único accionista verdadero es el Presidente, quien virtualmente no tiene apoyo institucional o estructural alguno para ejercer eficazmente esta función (B. Mommer, 2003: 15).

Como advierte este mismo autor, los gerentes de PDVSA diseñaron estos cambios en el sistema fiscal venezolano siguiendo el ejemplo del Mar del Norte Británico, la región productora de petróleo más liberal del mundo, en términos de permitir el libre acceso del capital a los recursos naturales. Se podría decir que la otrora política fiscal de maximización del pasado fue sustituida por una política de *minimización* de recaudación. De hecho, para 1989, según la propia concepción y lenguaje de los gerentes de PDVSA, ésta ya no pretendía más de ser una compañía petrolera nacional, sino una *corporación energética global.*[42] Tal como sostiene el ex economista en Jefe de PDVSA durante ese periodo: "En 1989, PDVSA se había consolidado como estructura corporativa más allá del archipiélago de compañías privadas que le dieron origen, de las cuales heredó las estructuras de gobierno y gerenciales y los sistemas operativos y de control interno".[43]

[42] Para un estudio detallado de la concepción de PDVSA como un negocio o corporación energética global véase el sugerente estudio de Carlos Luis Villalobos, "El petróleo como negocio", en Mato, Daniel (coord.), *Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización*, Caracas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, 2005, en donde se analiza el discurso de los gerentes de la compañía, quienes diseñaron e implementaron la apertura.

[43] Ramón Espinasa, "Las contradicciones de Pdvsa: más petróleo a Estados Unidos y menos a América Latina" en *Revista Nueva Sociedad*, No. 204, Caracas, julio-agosto, 2006, p. 53.

CAPÍTULO 2. Crisis orgánica y lucha de clases: 1998-2006

Examiné todas estas cosas, y cómo los hombres luchan y pierden la batalla, y aquello por lo que lucharon tiene lugar pese a su derrota, y cuando llega resulta ser distinto a lo que ellos se proponían, y otros hombres tienen que luchar por lo que ellos se proponían bajo otro nombre.

William Morris

2.1 Movimiento bolivariano por "arriba" y por "abajo" (1998-2001)

Como se venía argumentando en el capítulo anterior, en el marco de la crisis orgánica que ya hacia los noventas era evidente, fueron emergiendo partidos y movimientos de *vocación popular* (M. López Maya, 2005) que se iban planteando no sólo reformas "desde arriba", sino la creación de un nuevo orden estatal sobre bases sustancialmente diferentes a las del sistema hegemónico en crisis. De entre ese puñado de organizaciones (Causa R, MAS, etc.), aquélla que lograría convocar en torno suyo las voluntades dispersas de las clases subalternas (y de una fracción de las clases dirigentes, en un primer momento) fue el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, transformado al calor de la coyuntura electoral en el Movimiento Quinta República (MVR).

El nacimiento del MVR fue acompañado de la incorporación de destacados militantes de la vieja izquierda, con lo cual se reafirmaba su vocación popular. El objetivo principal en el corto plazo de los bolivarianos era la promulgación de una nueva Constitución y la construcción de un *poder social*, entendido como todas las fuerzas contenidas ya actuantes en la sociedad, las cuales serían transformadas a través de la Constitución en poder Estatal.

Por otro lado, la coyuntura también produjo nuevos partidos de las clases subalternas, como el Partido Patria Para Todos (PPT, escisión de Causa R). Para ese momento, "la alternativa de una reforma del sistema político y del Estado de abajo hacia arriba empezó a ganar legitimidad pública, lo que fue ampliamente capitalizado por sectores de izquierda y la sociedad civil para avanzar la tesis de una Asamblea Constituyente que como expresión de la sociedad debía dar al traste con el antiguo régimen y fundar uno nuevo" (P. Andrade, 2005: 79). El acercamiento entre el MVR y el PPT se formalizó a comienzos de 1998, cuando éste

último decidió brindarle su apoyo al candidato y líder político-moral del MVR: Hugo Chávez Frías. A lo largo de ese año, otros partidos también se sumaron al frente electoral que tomaría el nombre de Polo Patriótico.[44]

2.1.1 Elecciones presidenciales de 1998

En esa coyuntura, no sólo los partidos y movimientos de las clases subalternas se organizaron en torno a una candidatura única; los partidos que representaban a los intereses de las clases dominantes también hicieron lo propio, pero no con tanta anticipación como los primeros. Durante casi toda la campaña, los partidos históricos (AD/COPEI) marcharon por separado; por otro lado, un nuevo partido de las clases dominantes había nacido, Proyecto Venezuela, y lanzaba al ex gobernador de Carabobo Henrique Salas Römer a la presidencia. Hasta finales de noviembre y una vez pasadas las elecciones legislativas y regionales (senadores, diputados y gobernadores), en las que AD y COPEI consiguieron la mayoría de representantes, pero con un avance significativo de los candidatos del Polo Patriótico chavista,[45] los partidos del Punto Fijo mantenían a sus propios candidatos presidenciales. Sin embargo, un par de semanas antes de que se realizaran las elecciones, el Comité Ejecutivo Nacional de AD decidió pedir la renuncia a su candidato para darle su apoyo a Salas Römer, quien era el que parecía tener mayores posibilidades de ganarle a Chávez. Lo mismo hizo COPEI, quien también quitó a su candidata de la carrera y declinó por el partido Proyecto Venezuela.

No obstante el apoyo de AD y COPEI a Salas Römer, ello no fue suficiente para vencer al candidato del Polo Patriótico, quien se convertiría en Presidente como resultado de las elecciones del 6 de diciembre de 1998 con más de 56% de los votos, frente a 40% del empresario ganadero. A juicio de López Maya, además del hastío de la mayoría de la población con su situación económica y con el sistema político, otros de los factores que

[44] Como decía Gramsci, "El hecho de que las tropas de muchos partidos pasen a colocarse bajo la bandera de un partido único que mejor represente y resuma las necesidades de toda la clase es un fenómeno orgánico y normal […] representa la fusión de todo un grupo social bajo una dirección única considerada la única capaz de resolver un problema dominante existencial (A. Gramsci, 1999, Vol. V: 52-53).

[45] El Polo Patriótico ganó 8 gobernaciones, 18 senadurías y 75 diputaciones, lo cual representaba un tercio del Senado y un poco más de la Cámara de Diputados.

coadyuvaron a Chávez para atraer la simpatía de los venezolanos fue que su discurso fue el único que le dio prioridad a las clases empobrecidas y excluidas, y valoró a sus integrantes como sujetos del sistema político democrático, además de construir "un nuevo discurso político en el cual símbolos e imágenes, elaborados a partir de referencias históricas y culturales reinterpretadas, juegan un papel de primer orden. En todo acto político del Presidente, desde los más relevantes hasta lo más nimios, es posible encontrar el uso de símbolos para desarrollar y fortalecer su posición" (M. López Maya, 2005: 235).

2.1.2 Asamblea Constituyente y nueva Constitución

Tal como se había comprometido con sus seguidores, el primer acto de Chávez como presidente fue la convocatoria a un referéndum para decidir si se llamaba a una Asamblea Constituyente; el resultado del mismo fue mayoritariamente a favor de la Asamblea. El presidente Chávez encabezó una coalición electoral que obtuvo 125 de los 131 miembros a la Asamblea, la cual fue formalmente abierta el 3 de agosto de 1999. El 5 de agosto el presidente presentó un primer borrador de Constitución. Pero el proceso de redacción de este nuevo documento no estuvo limitado al espacio de la Asamblea: fue abierto a la participación ciudadana mediante la realización de talleres, seminarios, mesas redondas, comisiones, etc. A través de estos espacios, distintas organizaciones de la sociedad civil elaboraron una serie de propuestas, muchas de las cuales serían recogidas por las comisiones temáticas de la Asamblea Nacional.

Durante este proceso se tendieron puentes de diálogo y deliberación entre las organizaciones de dichas redes temáticas. García-Guadilla ha sistematizado la participación de dichas organizaciones como Foro por la Vida y Alianza Social por la Justicia en la redacción de la Constitución.[46] Para esta autora, una de las claves que explica el éxito en la incorporación de dichas propuestas fue que en su mayoría concordaban con el proyecto del presidente Chávez, lo cual no significó que el texto constitucional quedara libre de tensiones, como veremos más adelante. Una vez que estuvo listo el borrador final de la Constitución,

[46] María Pilar García Guadilla, "Sociedad civil: institucionalización, fragmentación, autonomía", en Ellner, Steve y Daniel Hellinger (eds.), *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, Caracas, Consejo de Investigación de la UDO / Nueva Sociedad, 2003.

también fue sometido a referendo popular, para lo cual fueron distribuidos millones de copias de la propuesta de Carta Magna entre los ciudadanos. En diciembre de 1999 se llevó a cabo el referéndum, obteniendo la aprobación de la nueva Constitución con 88% de los votos, aunque sólo 38% de los electores potenciales participaron en el proceso.

La Constitución de la rebautizada República Bolivariana de Venezuela (CRBV) se convertiría así en la expresión y fundamento jurídico de un nuevo orden institucional en gestación, más acorde con la nueva correlación de fuerzas sociales: en ésta, las clases subalternas adquirían mayor protagonismo en la esfera pública, logrando transformar algunas de sus demandas históricas (reforma agraria, ampliación de derechos sociales, etc.) en artículos constitucionales. Como bien señala Antonio de Cabo de la Vega, si es verdad que la Constitución de 1999 introduce algunos elementos novedosos como la división en cinco poderes, y no en los tres clásicos, "su originalidad radica en ser la culminación de un camino progresivo que podemos llamar nuevo constitucionalismo latinoamericano".[47] Sus referentes más inmediatos serían la Constitución Brasileña y la Constitución Colombiana.; tanto éstas, como la Bolivariana se caracterizarían

> […] por la actualización del discurso federalista y descentralizador, la adopción de un modelo de democracia participativa, la constitucionalización de las modernas tendencias del derecho internacional de los derechos humanos, el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de las naciones latinoamericanas, la transformación del tradicional paradigma difuso de control constitucional latinoamericano en un modelo mixto más cercano al arquetipo europeo de inspiración Kelseniana, el fortalecimiento del papel de la rama judicial dentro de la arquitectura constitucional y, finalmente, la constitucionalización del programa político de la integración política y económica de toda América Latina (Montaña citado en A. De Cabo de la Vega, 2006: 34).

El elemento principal que diferencia a esta Constitución respecto a la anterior (1961) y a la mayoría de los marcos constitucionales de los países democrático-liberales, es su aspiración de construir una sociedad no sólo formalmente democrática sino *protagónica:*

> La participación protagónica, está orientada a ocupar y consolidar espacios legítimos y formales de intercambio, comunicación y expresión de la ciudadanía con los órganos del Poder Público, para gobernar y compartir responsabilidades, en la gestión pública local. De esta

[47] De Cabo de la Vega, Antonio, "Las transformaciones institucionales", en Juan Torres López (coord.), *Venezuela a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana*, Barcelona, Icaria, 2006, pp. 33-34.

> manera se plantea una redistribución del poder como propiedad colectiva, que pertenece a todos y a todas que se ejerce a través de las diferentes instancias y mecanismos institucionales y comunitarios.[48]

Tal pretensión de protagonismo atraviesa prácticamente todo al articulado constitucional.[49] Para adecuar la organización del los poderes públicos a esta meta de protagonismo popular, la Constitución también sancionó una novedosa división de poderes inspirada en un proyecto de Bolívar: a los consabidos poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, agregó los poderes Ciudadano y Electoral.

Respecto al primero, el presidente de la Comisión del Poder Ejecutivo durante la Asamblea de 1999, Ricardo Combellas, ha señalado algunas novedades respecto de la Constitución de 1961; además de la creación de la Vicepresidencia, dicho autor identificó cinco nuevas atribuciones del Presidente de la República: en primer lugar, su atribución exclusiva de promover los oficiales de la Fuerza Armada Nacional a partir del grado de coronel o capitán de navío; en segundo lugar, la ampliación de las facultades legislativas del presidente, gracias a la habilitación mediante ley de la Asamblea Nacional; tercera, la nueva facultad para fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros; en cuarto lugar, la iniciativa de convocatoria de referendos en los casos previstos en la Constitución; finalmente, la atribución consistente en la facultad de disolución de la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en la Constitución.[50] Por otro lado, este mismo autor llama la atención sobre el hecho de que en el nuevo marco constitucional del federalismo descentralizado

> […] desaparece en la [Constitución] la condición de los Gobernadores de los Estados como agentes del Ejecutivo Nacional, en virtud de lo cual no están obligados a recibir instrucciones

[48] Minep, *Democracia participativa y protagónica*, Caracas, Minep-Ince, 2005, p. 23.

[49] En especial, la participación protagónica de los ciudadanos en la vida pública quedó expresada en los artículos 5, 62, 70, 182 y 184 de la Constitución.

[50] Es decir, cuando suceda la remoción del Vicepresidente Ejecutivo por parte de la Asamblea Nacional, en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional.

> del Presidente y los Ministros, ciñéndose sus responsabilidades a lo que le paute expresamente la Constitución, las leyes nacionales, la Constitución estadal y las leyes estadales.[51]

Como conclusión –remata Combellas– es plausible afirmar que el tradicional presidencialismo venezolano ha sido reforzado por la nueva Constitución.

En el caso del Legislativo los cambios fueron mayores: se pasa de un Congreso bicameral a uno unicameral que se denomina Asamblea Nacional. El nuevo poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General de República. Finalmente, el poder Electoral está dirigido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) e integrado por la Junta Electoral Nacional, la Comisión del Registro Civil y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Sus competencias son muy amplias: se encarga de organizar elecciones de los cargos de representación popular, los referendos, los revocatorios, las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y partidos políticos, así como de regular e investigar la financiación de estos últimos.

Más allá de la nueva división de poderes consagrada, para autores como Cabo de la Vega existe una contradicción guardada en el seno de la Constitución: tanto la Carta fundamental, como hasta cierto punto el proyecto bolivariano, parecen tener "dos corazones":

> […] un corazón madisoniano institucional, basado en una compleja arquitectura de poderes, de frenos y contrapesos, de innovadoras formas de actuación pública y de interconexiones entre los órganos del poder, y un corazón democrático radical –acaso roussoniano– que se expresa en el predominio de la democracia participativa sobre cualquier otra forma de organización social […] se apuntan ya dos lógicas de funcionamiento que, en algún momento, entrarán en un conflicto que habrá de ser resuelto en uno u otro sentido (A. De Cabo de la Vega, 2006: 40).

Como el propio autor señala, la contradicción entre esas dos vías de desarrollo se expresarían más adelante en el funcionamiento de las llamadas *Misiones*. Por lo pronto, valga recalcar que la Constitución Bolivariana de 1999, a la vez que expresión de una nueva correlación de fuerzas *políticas* entre las clases dominantes y las clases subalternas, también se convertía en la expresión más acabada de un proyecto social del naciente bloque popular aglutinado en torno a la figura del presidente Chávez.

[51] Ricardo Combellas, *El poder ejecutivo en la Constitución de 1999*, en www.ugma.edu.ve/Acerca%20de%20UGMA/Publicaciones/Documentos/UGMA%20juridica/RUGN1/ELPODEREJECUTIVO.doc, Caracas, s/f, p. 14.

2.1.3 Las elecciones del 2000

Las revoluciones son desplazamientos violentos en las relaciones de fuerzas entre las clases -dominantes y subalternos- en una sociedad determinada. Esos desplazamientos ponen en crisis la forma política de la dominación existente. Esta crisis puede expresarse también en el terreno electoral.

Adolfo Gilly

Los comicios de julio de 2000 fueron conocidos popularmente como las *megaelecciones*, ya que en una misma jornada se eligieron presidente, gobernadores, diputados a la nueva Asamblea Nacional, así como a los consejos legislativos estatales y alcaldes para los 335 municipios del país. En diciembre de ese mismo año también se eligieron concejales municipales, miembros a las juntas parroquiales y se realizó un referendo nacional.

Ambos comicios refrendaron la voluntad de la mayoría de los electores de ir desplazando a la vieja clase política del aparato estatal; también manifestaron el avance de las fuerzas cercanas al chavismo. Lo más significativo de estos procesos fue la ausencia de una oposición orgánica al Polo Patriótico de Chávez, pues las diversas fracciones de las clases dominantes y de la sociedad política tradicional (AD, COPEI), además de enfrentar una grave crisis de legitimidad, no lograban rearticularse políticamente en torno a un proyecto, más allá de un vago discurso anti-chavista. Esa debilidad de sus opositores políticos permitió que Chávez triunfara holgadamente con casi 60% de los votos, mientras que su más cercano seguidor, el independiente Francisco Arias Cárdenas, obtuvo 37,5% de los sufragios. Como es sabido, Arias Cárdenas fue partícipe, junto con Chávez, de la rebelión militar de febrero de 1992 y, posteriormente, gobernador del estado de Zulia, apoyado por el propio Chávez, de quien se distanció pocos meses antes de las elecciones de 2000.

Por otro lado, las elecciones a gobernadores fueron la mayor muestra del avance electoral del polo chavista, aunque, "las organizaciones que en 1998 habían apoyado a Chávez no se presentaron con igual cohesión. El MVR en varios estados optó por presentar candidatos propios rompiendo de hecho la alianza" (López Maya, 2005: 244). Con todo, los partidos afines al chavismo obtuvieron 17 gobernaciones, así como la Alcaldía Metropolitana de Caracas. La contraparte del crecimiento chavista fue la casi desaparición de AD y COPEI del

mapa electoral: AD obtuvo sólo 2 gubernaturas, mientras COPEI sólo una.[52] En el caso de la Asamblea Nacional el chavismo también obtuvo una victoria cómoda. Las fuerzas cercanas a Chávez lograron colocar 105 de los 165 diputados del nuevo parlamento unicameral, lo que representó 64% del total (en 1998 habían logrado 36%). Similar avance del chavismo se registró en los casos de los parlamentos estatales, y con un poco de menor fuerza, en las alcaldías y los consejos municipales. También en esa misma elección de diciembre de 2000 se votó un referéndum sobre si la dirigencia de las federaciones sindicales y de la CTV debían o no retirarse por un tiempo de su puesto, para dar paso a elecciones sindicales bajo la organización del CNE, tal como lo disponía la Constitución de 1999. El referendo también arrojó resultados favorables a la posición gubernamental, que sostenía la tesis de la remoción de los dirigentes, como se advertirá más adelante:

> Esta intensa actividad electoral [1998-2000] permitió el desplazamiento de una elite política dominante en el país desde 1958 y su sustitución por nuevos actores políticos emergentes. Con mucho, la figura más descollante de este proceso fue el actual presidente de la república, Hugo Chávez Frías, cuyo carisma y popularidad explican en gran medida las victorias obtenidas (M. López Maya, 2005: 232).

Sin embargo, el carisma del presidente no puede ser considerado como el factor determinante del proceso en marcha. Para que un proyecto político se vuelva hegemónico tiene que propiciar transformaciones en el terreno de la economía; medidas para incluir las demandas de los subalternos en ese ámbito. Si bien es cierto que la política económica de los primeros años del gobierno chavista no se apartó en lo sustantivo del modelo neoliberal heredado,[53] a partir del 2001 se experimentó un incipiente cambio de rumbo:

> Se ha abierto una etapa de transición nacional, preparatoria de una transformación bien definida […] sin adoptar una vía socialista se procura identificar al sistema económico como uno de mercado, con acentuada tonalidad social participativa y equitativa, notable intervención del Estado en la economía mediante políticas públicas reguladoras, promotoras y estimuladoras de la actividad económica, con propósito de una redistribución progresiva del ingreso, combate a la pobreza y marginalidad, preferencia a la pequeña y mediana empresas (inclusive

[52] Proyecto Venezuela de los Salas-Römer retuvo Carabobo y Convergencia repitió en Yaracuy.

[53] Norbis Mujica y Sorayda Rincón, "Caracterización de la política social y la política económica del actual gobierno venezolano: 1999-2004", en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 12, no. 1 (enero-abril), Caracas, UCV, 2006; Leonardo Vera, Liderazgo político, renta y política económica: La gestión económica en la era de Chávez, UCV-Latin American Center, Oxford University, 2005.

> microempresas) y anuncio de una reforma agraria que no afecte a la propiedad en función productiva […]
>
> No se puede calificar a este proceso como una revolución en lo económico, aunque sí como una reforma progresiva avanzada. La privatización de empresas del Estado se ha detenido, la actividad petrolera se reafirma bajo el control del Estado.[54]

El proceso de transformación social se concentraba hasta esos momentos en la dimensión de lo político, sin tocar mayormente las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Veamos, entonces, cuáles fueron algunas de las transformaciones *moleculares* de esa dimensión política. Comencemos por lo que sucedía "abajo"; fuera de los reflectores de los medios y, salvo contadas excepciones, de la atención de la mayoría de los académicos.

2.1.4 Organización de las clases subalternas (I): de la dispersión a la organización

> *A medida que algunos de los principales actores de la historia se alejan de nuestra atención —los políticos, los pensadores, los empresarios, los generales—, avanza un inmenso reparto de personajes secundarios, de quienes habíamos supuesto que eran meros acompañantes del proceso.*
>
> **E.P. Thompson**

Gramsci advertía ya en 1934 que "La historia de los grupos sociales subalternos es necesariamente disgregada y episódica" (A. Gramsci, 2000: 178). Lo descrito por Gramsci es particularmente cierto para la historia venezolana de finales del siglo XX. Esto se explica en buena medida por los efectos disolventes sobre el tejido social producidos tanto por la crisis del modelo de acumulación rentista como por la ofensiva neoliberal de los ochenta y noventa. Estos procesos orgánicos se tradujeron en una creciente heterogeneidad de las clases subalternas en el terreno de la estructura socioeconómica. No obstante, los efectos de la crisis sobre los grupos subalternos no fueron de igual tipo e intensidad para cada uno de ellos. Sin lugar a dudas, los que más vieron disminuidas sus capacidades organizativas fueron aquellos sectores expulsados (o nunca incorporados) del sector formal.

[54] Domingo Maza Zavala, *Venezuela: economía, tiempo y nación*, Caracas, Vadell Hermanos Editores, 2007, p. 248.

Cuando Chávez es llevado por primera vez a la presidencia de la República en 1998, no lo fue por el respaldo de un bloque orgánico de las clases subalternas; por el contrario, quienes mayoritariamente le dieron su voto fueron las grandes masas excluidas por la crisis del modelo, pero con niveles orgánicos muy primitivos, en el mejor de los casos; en el peor, prácticamente inexistentes. Esta característica, llamada por algunos como el pecado original de la Revolución Bolivariana,[55] es lo que explica que durante estos primeros años el proceso haya tomado tintes de lo que Gramsci denominaba *cesarismo progresivo*; es decir, que las principales iniciativas políticas del proceso revolucionario no han venido desde las organizaciones de las muy dispersas clases subalternas sino, fundamentalmente, del liderazgo de una persona o un pequeño grupo; en este caso, Chávez y la dirección del MVR.[56] Sin embargo, el proceso social *bolivariano* no se puede reducir sólo a las iniciativas "desde arriba". Por el contrario, el ascenso político-electoral del chavismo también sirvió como oportunidad para que algunos sectores de los grupos subalternos tomaran iniciativas organizativas propias en sus ámbitos de acción (el barrio, el sindicato, etc.).

Luchas al interior de la CTV. Si bien es cierto que la ofensiva neoliberal implicó la expulsión de buena parte de los trabajadores del llamado sector formal hacia el desempleo o hacia la economía informal, además del brusco descenso de la tasa de sindicalización, no se puede negar que los trabajadores que permanecieron sindicalizados también se convirtieron en sujetos activos del proceso político desatado por la crisis orgánica, como el caso de los obreros del acero de la región de Guyana que se mencionaba en el primer capítulo.

La creciente pérdida de legitimidad de la cúpula de la CTV por su viraje neoliberal fue agravada por el ascenso político Hugo Chávez, quien desde comienzos de su campaña supo enarbolar inteligentemente las banderas tanto de la autonomía sindical como del anti-neoliberalismo. De hecho, como recuerda Ellner, una vez electo presidente se negó a crear las

[55] Roland Denis, "Movimientos sociales, gobierno y burocracia en el proceso bolivariano: La revolución desde la izquierda", en http://lahaine.org/index.php?blog=3&p=14978, Caracas, 2006.

[56] En palabras de Gramsci: "Es progresista el cesarismo cuando su intervención ayuda a la fuerza progresista a triunfar aunque sea con ciertos compromisos y atemperamientos limitativos de la victoria; es regresivo cuando su intervención ayuda a triunfar a la fuerza regresiva" (A. Gramsci, 1999, vol.V: 65).

Comisiones Tripartitas rechazando, además, la tradicional "política de consenso" entre clases, "con el argumento de que equivalía a un sistema de toma de decisiones por las elites" (S. Ellner, 2003b: 153). Por el contrario, el presidente planteó otra forma de relación con los trabajadores: las "mesas de diálogo" para incorporar a las bases sindicales a un proceso abierto de discusión sobre políticas y legislación laborales.

Esta coyuntura política fue aprovechada por las corrientes disidentes al interior de los sindicatos pertenecientes a la CTV que se aglutinaron en un nuevo frente político: la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FTB). Como señala el mismo Ellner, esta nueva fuerza no estuvo exenta de tensiones a su interior y, desde su nacimiento en 1998 y durante los siguientes tres años, se comenzaron a dibujar dos grandes polos: uno moderado y otro radical. Sin entrar en detalles, baste señalar que los radicales eran partidarios de acumular fuerzas para, apoyados por el gobierno de Chávez, poder desarticular a la CTV y procesar judicialmente a sus líderes corruptos, con el fin de abrir paso a la creación de una nueva central obrera. Los moderados, por el contrario, se proponían dar la batalla al interior de la CTV y ganar esa trinchera por dentro.

Otro de los acontecimientos que marcaría la posterior evolución de las relaciones entre el chavismo y la clase trabajadora sindicalizada, sería el referendo de diciembre 2000, orientado a consultar si las dirigencias laborales debían abandonar temporalmente sus cargos para la realización de elecciones organizadas por el Poder Electoral sancionado por la nueva Constitución. Como se adelantó arriba, la posición de los trabajadores bolivarianos salió triunfante del referendo, por lo que se programaron elecciones sindicales para octubre del siguiente año. En aras de mantener su autonomía frente al Ejecutivo, los chavistas eligieron como su candidato a la presidencia de la CTV a uno de los líderes del Patria Para Todos, "partido que había tenido relaciones conflictivas con el presidente Chávez, en lugar de optar por Nicolás Maduro del MVR" (S. Ellner, 2003b: 168). Por su parte, la cúpula *cetevista* lanzó al frente a Carlos Ortega, furibundo antichavista quien sería uno de los protagonistas del golpe de Estado que no tardaría en llegar. Las elecciones de octubre fueron escenario de violentas confrontaciones entre las diferentes tendencias; también hubo acusaciones de fraude y demás irregularidades, así como de una abstención de entre 50 y 70%. Finalmente, el CNE reconoció la validez de las elecciones; los chavistas hicieron lo propio, pero denunciando que los

resultados a favor de Ortega estaban "inflados". Más allá de los resultados oficiales, estaban sentadas las bases para que poco tiempo después se produjera, finalmente el cisma de la CTV.

Comités de Tierras Urbanas. El antecedente inmediato de los Comités de Tierras Urbanas (CTU), creados después de la Ley de Tierras de 2001, fue la Asamblea de Barrios de Caracas. Ésta había sido fundada en 1991 como un espacio que reunía a dirigentes de más de doscientos barrios de esa ciudad. Al interior de la Asamblea se discutieron e hicieron propuestas en torno a temas como la regularización de la tenencia de la tierra suburbana, la rehabilitación física de los barrios, la cogestión del servicio del agua, la demanda de autogobierno local, etcétera.

Para uno de los protagonistas de las luchas urbanas de los ochenta y fundador de la Asamblea de Barrios, ésta se constituyó en un espacio de reconocimiento y articulación de las luchas como respuesta a la falta de inversión del Estado en viviendas populares, el empobrecimiento de la población urbana, el colapso y privatización de servicios básicos, el debilitamiento de espacios políticos de mediación y redistribución, etc. El ciclo de protestas urbano-populares, desatado por dichas transformaciones, fue el que dio origen a muchas de las organizaciones en que se habría de apoyar el nuevo marco institucional posterior a 1999. Por ejemplo, en febrero del 2002, Chávez firmó el decreto 1666 que dio inicio a un proceso de regularización de la tenencia de la tierra en barrios y urbanizaciones, además de promover la rehabilitación integral de los asentamientos y someter a discusión un proyecto de ley que fortalecería legalmente dicho proceso. Ese decreto creó los Comités de Tierras Urbanas (CTU), como los sujetos que impulsarían tanto la regularización de la tierra como la consulta legislativa.

Cada Comité se integró por no más de doscientas familias que delinearon una polígono urbano-social; es decir, *su* territorio. Al hacerlo de esta manera, la titulación de tierras se convirtió no sólo en un asunto legal, sino básicamente social e identitario. Además, destaca la legitimidad de los Comités, pues fueron elegidos en asamblea con participación mayoritaria de los vecinos. Otra de las características del proceso fue la autonomía de los CTU, los cuales, si bien nacieron como producto de una disposición legal, en realidad no se creaban *ex nihilo*, sino apoyados en las organizaciones autónomas previamente existentes. La última

característica es que desde el principio, tanto el gobierno como los propios pobladores le imprimieron una dimensión política al proceso, trascendiendo la demanda reivindicativa por la titulación.[57]

En el campo también se organizan. Si bien la lucha de los campesinos venezolanos por la tierra no es nueva, el ascenso del movimiento chavista propició que las diferentes organizaciones regionales (dispersas y débiles hasta ese entonces), lograron converger en el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ), uno de los principales promotores de la reforma agraria. Desde su constitución el Frente ha venido organizado diversas actividades como tomas de tierras y congresos campesinos para poner sobre la mesa nacional su agenda de reivindicaciones. A pesar de que el Frente ha expresado su apoyo al presidente Chávez, eso no le ha impedido cuestionar algunos aspectos conservadores de la Ley de Tierras y, sobre todo, a la burocracia encargada de coordinar la Reforma Agraria y a la frecuente complicidad entre algunos mandos de las fuerzas del orden y de jefes políticos regionales con los ganaderos latifundistas, lo que ha llevado al asesinato de más de 230 líderes campesinos desde que comenzó la Reforma Agraria. Lamentablemente, la mayoría de esos asesinaos ha quedado impune.

Círculos bolivarianos. Convocados en junio de 2001 por el presidente Chávez, los Círculos Bolivarianos son pequeños grupos (no más de una docena de personas) que fueron llamados a cumplir una tarea que parecía imposible, dada la propia dispersión de las clases populares como la trabazón del aparato de Estado heredado: discutir los problemas de su comunidad (salud, seguridad, educación, transporte, etc.) y canalizarlos a través del organismo competente para darles solución. La idea de Chávezera que los Círculos se convirtieran en una especie de gestores sociales para la realización de trámites ante las diferentes instancias del

[57] "Luchas que antes parecían reducirse a la esfera meramente reivindicativa (tradicionalmente vista con desprecio por los activistas 'políticos') ahora adoptan prontamente contenidos y modos de expresión políticos". Andrés Antillano, "Lucha por el reconocimiento y la inclusión en los barrios populares: la experiencia de los Comités de Tierras Urbanas", en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales,* Caracas, Vol. 11, no. 3, sep-dic, 2005, p. 212.

aparato estatal (alcaldías, consejos legislativos, gobernaciones, etc.). Si bien esta iniciativa "desde arriba" que convocaba a los subalternos a organizarse no tuvo mucho éxito en su misión original, fue una de las semillas que alimentó la movilización popular espontánea de abril de 2002, durante un fallido golpe de Estado de las clases dominantes, como se citará más adelante.

En síntesis, lo que ponen de manifiesto estos ejemplos es que durante los años posteriores a 1998, diferentes formas organizativas de las clases subalternas fueron emergiendo o consolidándose en cada una de sus trincheras pero, a diferencia de su pasado inmediato, lo hicieron proyectando sus luchas más allá de lo estrictamente gremial, modificando, de hecho, la correlación de *fuerzas políticas* existente entre las clases sociales. Gramsci consideraba que ese momento de la correlación de fuerzas podía ser estudiado y distinguido en res momentos, correspondientes a los diversos grados de la conciencia política colectiva.[58] Por lo expuesto, pareciera ser que esos primeros años del chavismo (1998-2001) permitieron a muchos de esos grupos ir transitando a momentos más elevados de organicidad y de conciencia política; es decir, pasar del momento económico-corporativo de las luchas gremiales inmediatas al desarrollo de una identidad política más amplia, que suponía la articulación de esas luchas con un movimiento de mayores alcances y ya se planteaba el tema de la reforma de lo estatal y de la participación activa de los subalternos en el proceso de constitución del nuevo orden institucional.

2.1.5 El problema de la soberanía: petróleo y leyes habilitantes

Una vez refrendado el apoyo mayoritario de las y los venezolanos al gobierno chavista en las elecciones de 2000, la dirigencia bolivariana se dio a la tarea de consolidar su proyecto

[58] El primero es el momento económico-corporativo: necesidad de organización del grupo profesional al que se pertenece. El segundo es aquél en el que se alcanza la conciencia de la solidaridad de intereses entre todos los miembros de un grupo social, pero todavía en el campo económico. En este momento se plantea el problema del Estado, pero sólo en tanto búsqueda de alcanzar igualdad jurídico-política con los grupos dominantes: derecho a participar en la legislación, la administración; a lo mucho de reformarlas, pero dentro de los marcos existentes. El tercer momento es aquél en el que se alcanza conciencia de que los intereses propios superan el círculo económico-corporativo y pueden y deben convertirse en intereses de otros grupos subordinados (A. Gramsci, 1999, vol. V: 36).

expresado en las *Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007*.

Allí, el Ejecutivo propuso la construcción de cinco equilibrios básicos: económico, político, social, territorial e internacional. Sin entrar en detalles, se destaca que los dos principales ejes que atraviesan el documento son la reivindicación del Estado como protagonista del "desarrollo social", así como la constitución de la administración pública como un *agente proactivo de la participación ciudadana*. Respecto al papel del Estado en la promoción del desarrollo, el documento apunta que las orientaciones de la Constitución

> […] incluyen un mandato para que el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, provea los mecanismos e instrumentos de acción para que la dinámica del país conduzca al logro de los fines esenciales.
>
> El modelo planteado está vinculado con un sistema productivo diversificado, competitivo, abierto hacia los mercados internacionales, basado en la iniciativa privada y con presencia del Estado en industrias estratégicas, pero con apertura a la inversión privada en el desarrollo aguas abajo del tejido industrial.[59]

Por el otro lado, respecto al asunto de la participación de la ciudadanía se asienta:

> El principio de participación, que atraviesa todo nuestra carta magna, significa, además de ampliar y complementar la democracia participativa, logra que exista, entre elección y elección de los representantes, un mayor control de parte de la sociedad sobre los asuntos que los afectan directamente y dotar al Estado de mecanismos de ajuste y retroalimentación constante […] El principio de corresponsabilidad es complementario al de participación, los ciudadanos deben contribuir y formar parte de la solución de los asuntos que los afectan directamente (H. Chávez, 2001: 19).

Si bien estas aspiraciones podrían ser consideradas como parte de un proyecto político moderado, que busca la conciliación de clases y la mayor participación de "los ciudadanos" (categoría que por definición abstrae la determinación de clase de los mismos) en la vida estatal, poco tiempo después de promulgado dicho *Plan de Desarrollo*, el Ejecutivo emprendió dos iniciativas que iban un poco más allá de la simple conciliación y que, dado su contenido nacional-popular y de afectación a los intereses de clase, le costarían un golpe de Estado. Nos referimos a los intentos por recuperar la soberanía estatal sobre PDVSA y a la promulgación de un conjunto de leyes habilitantes hacia finales de 2001.

[59] Hugo Chávez, *Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2001-2007*, Caracas, 2001, p. 13-14.

Como se recordará, una de las primeras acciones del presidente Chávez en materia de política energética internacional fue asumir un rol protagónico en el relanzamiento de la OPEP durante 1999-2000, lo que produjo como uno de sus primeros resultados el incremento del precio mundial del petróleo, que pasó de 7 dólares el barril en 1998, a 28 dólares en 2000, aún antes de la guerra estadounidense contra Iraq. En lo interno, lo más relevante fue el nombramiento de Alí Rodríguez Araque como Ministro de Energía y Minas (MEM) en 1999, un claro opositor a la "apertura petrolera". Desde allí, Rodríguez comenzó a implementar una política encaminada a retomar el control de la política petrolera que, hasta ese momento, no era decidida por el Estado sino por la tecnoburocracia de PDVSA. Ese intento de hacer valer su poder soberano fue respaldado por una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) que, además de elevar las regalías petroleras, reservaba al Estado la mayoría accionaria en cualquier asociación para la exploración y producción de hidrocarburos líquidos.

Aún cuando la nueva LOH era bastante moderada en sus alcances, como señala Mommer (2003), incomodó profundamente a la casta tecnocrática de PDVSA. En febrero de 2002 Chávez se vio obligado a destituir al gerente de la compañía (que él mismo había nombrado en 2000) por su oposición al nuevo rumbo de la política estatal. El nombramiento del nuevo gerente respondía a la necesidad de garantizar que PDVSA se sujetara a la política petrolera diseñada e implementada por el Ministerio, y no al revés, como venía sucediendo. La batalla por el control de PDVSA era estratégica, al menos por dos razones: por un lado, la tecnocracia de la empresa representaba la última fracción del bloque histórico en disolución con poder político directo; es decir, controlando uno de los pilares centrales del aparato de Estado; por otro, sólo una recuperación completa de la autoridad Estatal sobre PDVSA le permitiría a la dirección política bolivariana hacerse del control del recurso material clave (la renta) para echar a andar su proyecto

Paralelamente a estos intentos de hacer valer la soberanía estatal, el presidente Chávez solicitó a la Asamblea que le fueran otorgados poderes legislativos contemplados en la Constitución para promulgar un conjunto de leyes por vía "habilitante"; es decir, por decreto presidencial. De las 49 leyes promulgadas, las que más inquietaron a las clases dominantes fueron la mencionada sobre los hidrocarburos y la Ley de Tierras. Fue justamente su

promulgación la que desató un ciclo insurreccional orquestado por las clases dominantes, como se verá a continuación.

2.2 Insurrección de las clases dominantes y respuesta del bloque popular (2002-2004)

Los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los grupos dominantes, aun cuando se rebelan y sublevan: sólo la victoria 'permanente' rompe, y no inmediatamente, la subordinación. En realidad, aun cuando parecen triunfantes, los grupos subalternos sólo están en estado de defensa activa…

Antonio Gramsci

2.2.1 Insurrección de las clases dominantes. Acto primero: golpe de Estado

Desde fines de 2001, se abrió en Venezuela una ola de protestas de la oposición política que aglutinaba viejos y nuevos partidos, pero que era encabezada por líderes empresariales y sindicales beneficiarios del modelo de acumulación neoliberal en crisis. Al ver amenazados sus privilegios y ante la pérdida de su fuerza política interna, estos grupos comenzaron a buscar apoyo fuera del país; poco a poco se fueron acercando a los altos círculos de poder de los Estados Unidos para diseñar una estrategia político-militar que les permitiera recuperar los espacios perdidos.[60] De esta manera, las clases dominantes abrían un ciclo insurreccional que los llevaría a dar un golpe de Estado, implementar un paro empresarial acompañado del sabotaje a PDVSA y algunas otras acciones al margen de la legalidad que no sólo violentaron las instituciones democráticas, sino que causaron graves daños a la economía venezolana en su conjunto.

Los opositores al proyecto bolivariano se fueron aglutinando en torno a un frente insurreccional. El empresariado venezolano participó en él a través de Fedecámaras; también convergieron la gerencia tecnocrática de PDVSA, así como la cúpula de la cada vez más

[60] Desde septiembre de 2001, algunos de los futuros empresarios golpistas miembros del Consejo de Empresarios Venezuela-Estados Unidos (CEVEU) comenzaron a frecuentar a los círculos de poder político en Washington, como fue el caso de Pedro Carmona, quien se autoproclamó presidente de Venezuela durante el golpe de Abril de 2002. Eva Golinger, *El Código Chávez. Descifrando la intervención de Estados Unidos en Venezuela*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2005, p. 55 y ss.

debilitada CTV, además de organizaciones de clases medias que se autoidentificaban como "La Sociedad Civil". Sin embargo, a lo largo del ciclo insurrecional (2001-2004) "los medios privados de comunicación, como sector empresarial particular, que actuó con altos niveles de cohesión entres sí, ejerció una influencia determinante sobre las decisiones y acciones de este polo" (M. López Maya, 2005: 260).[61]

El proceso insurreccional de las clases dominantes sería incomprensible sin la participación activa (financiamiento, asesoría técnica, política y logística) de un conjunto de dependencias de los Estados Unidos en el golpe y las acciones de los años posteriores. Como Golinger demuestra fehacientemente con una abundante documentación, el gobierno norteamericano estuvo involucrado en el golpe a través de agencias como el Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, el Fondo Nacional para la Democracia (NED), así como por organizaciones "privadas" dependientes de los partidos Demócrata y Republicano y de una filial de la *American Federation of Labor* (AFL-CIO). Después del golpe de Estado de 2002, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) también se incorporaría a las actividades de financiación de organizaciones "civiles" que protagonizaron actos tanto legales como subversivos contra el Estado de Derecho.

Durante los primeros meses de 2002 y con la avenencia del gobierno norteamericano, los distintos sectores de la oposición comenzaron a movilizarse con una finalidad única: la renuncia de Chávez. Las protestas se potenciaron después de la decisión del gobierno, en febrero, de designar a una nueva directiva de PDVSA. Ya en abril la cúpula de la CTV llamó a sumarse al paro que habían iniciado algunos empleados de la compañía petrolera; tanto Fedecámaras como el Episcopado de la Iglesia, y el resto de las organizaciones de oposición se sumaron a la "huelga general" que duraría tres días. Sin embargo, el investigador del movimiento obrero venezolano Steve Ellner (2003b) ha documentado la escasa participación

[61] En Venezuela cinco redes privadas controlaban en ese momento más de 90% del mercado televisivo; tras la llegada de Chávez a la Presidencia, esos cinco canales televisivos (Venevisión, Radio Caracas Televisión, Globovisión, Televen y CMT) además de nueve de los diez periódicos más importantes, "asumieron la función de los partidos políticos tradicionales que habían perdido, Acción Democrática (AD) y COPEI. Las investigaciones, las entrevistas, los reportajes y los comentarios de esos medios masivos de comunicación han buscado el mismo objetivo durante los últimos cinco años: socavar la legitimidad del gobierno y dañar gravemente el apoyo popular al presidente" (E. Golinger, 2005: 117).

de los trabajadores organizados en el paro; como apunta este autor, los sectores industriales de la región de Guyana, los empleados públicos y los trabajadores de transportes no respondieron a la convocatoria de la huelga. De igual forma, los trabajadores siderúrgicos rompieron con el partido Causa R (el cual, dando un viraje de 180º respecto a su historia reciente se sumó al paro). Incluso, la Federación de Trabajadores Petroleros (Fedepetrol) de liderazgo no chavista convocó a sus afiliados a trabajar. El 11 de abril los dirigentes de la oposición llamaron a una movilización que se dirigiría a Miraflores (el recinto presidencial) con el objetivo de "sacar a Chávez", tal como lo declaró explícitamente el dirigente de la CTV.

Si bien la mayoría de los opositores que marcharon ese día lo hicieron con la convicción de que se trataba de una movilización pacífica, los organizadores (empresarios, líderes sindicales y detrás de ellos y en las sombras un grupo de generales de las Fuerzas Armadas) tenían montado un plan para desviar la marcha de su curso original, con el fin de provocar el enfrentamiento entre opositores y chavistas; con la manipulación mediática de los hechos, culparon al gobierno de Chávez de reprimir a los manifestantes. Esto último sería la coartada perfecta para justificar el golpe de Estado que ya tenían preparado.[62]

Como es ampliamente conocido, los golpistas lograron tomar por un par de días el Palacio de Miraflores; nombrar un presidente espurio; disolver todos los poderes del Estado; encarcelar al presidente Chávez, así como usar a la Policía Metropolitana (controlada por el alcalde de Caracas, también opositor) para reprimir a los chavistas que se manifestaban por el retorno del presidente. Sin embargo, las torpezas en la organización logística del golpe, pero sobre todo la participación de militares leales al presidente y la movilización más o menos espontánea de masas de venezolanos de las clases populares (aunque con la concurrencia de algunas de las organizaciones *bolivarianas* como los Círculos), hicieron fracasar el golpe:[63]

[62] Hasta el momento, la investigación más detallada en torno al golpe y a la subversión de la oposición, así como la intervención del gobierno norteamericano en los hechos es el libro de Golinger (2005). Para el papel que han jugado los medios de comunicación privados en la estrategia consúltese Luis Britto, *Venezuela: investigación de unos medios por encima de toda sospecha*, Caracas, MINCI, 2006. También se recomienda un par de excelentes documentales: *La revolución no será transmitida* (Bartly y O'Brian, 2003) y *Puente Llaguno. Las claves de una masacre* (Palacios, 2004).

[63] Al respecto, unos cronistas del golpe recuerdan que "Mientras muchos de los líderes de los partidos políticos vinculados a Chávez se 'enconcharon' durante las primeras horas del golpe, los hombres, mujeres, niños y jóvenes de los sectores más humildes fueron creando una marea humana de rechazo al golpe, al mismo tiempo y en un ejercicio fáctico de democracia directa lograron la restitución del orden

Chávez fue rescatado de su cautiverio, Miraflores recuperado y los poderes del Estado restituidos. Sin embargo, los golpistas fueron dejados en libertad; algunos de ellos huyeron del país; otros se quedaron en Venezuela y seguirían conspirando, convirtiéndose en los protagonistas del golpe petrolero-empresarial de finales de ese mismo año y comienzos del siguiente.

2.2.2 Insurrección de las clases dominantes. Acto segundo: el paro petrolero-empresarial

Una vez fracasados los expedientes de la rebelión militar, así como el saboteo a las finanzas públicas mediante el llamado a la desobediencia tributaria y la fuga de capitales, la oposición se concentraría en una nueva estrategia de tipo insurreccional: la Coordinadora Democrática comenzó a organizar una huelga nacional en varios frentes: energético, petroquímico, transportista y de distribución de alimentos. Esta acción que duró 62 días sería conocida posteriormente como "golpe o sabotaje petrolero" pues la paralización de las actividades de PDVSA fue el centro de la estrategia.

Los gerentes de PDVSA congelaron las operaciones en pozos, plantas petroquímicas, refinerías y plataformas en todo el país. Pero el paro fue más allá y en algunos casos se convirtió en abierto sabotaje a la industria en su conjunto: destruyeron hornos de refinación, abandonaron tanques de asfalto en solidificación y pipas con químicos en coagulación.[64] La afectación fue de tal magnitud que Venezuela tuvo que comprar petróleo en el mercado internacional para poder cubrir sus compromisos con clientes extranjeros. La producción bajó de alrededor de 3 millones de barriles diarios (b/d) a menos de 25 mil b/d. El cálculo de

constitucional". Luis Bonilla y Haiman El Troudi, *Historia de la Revolución Bolivariana. Pequeña crónica 1948-2004*, Caracas, MINCI, 2004, pp. 217-218).

[64] Otra de las claves del sabotaje fue la participación de INTESA, una compañía mixta creada en 1996 entre PDVSA y la empresa estadounidense SAIC. INTESA era la responsable de todos los sistemas de información de PDVSA; los encargados de la misma no sólo dejaron de trabajar como parte de la huelga, sino que boicotearon los sistemas de información de la compañía petrolera para que nadie más pudiera ponerla en operación.

pérdidas hacia el final de la huelga se estimó en más de 17 mil 400 millones de dólares, lo que incluía el daño permanente a maquinaria y tecnología de procesamiento.[65]

Otra de las líneas de la estrategia de la insurrección de la burguesía fue el paro empresarial que se articulaba con el petrolero. Uno de los mayores oligarcas venezolanos, Gustavo Cisneros, dueño del mayor conglomerado de medios de comunicación así como de empresas de producción y distribución agroalimentaria, contribuyó al paro no sólo prestando sus medios: "Ordenó la clausura de sus compañías de distribución de bebidas y productos alimentarios para que no hubiera disponibilidad en los mercados. Al aumentar la escasez, los vecinos se desesperarían y se verían obligados a sumarse al llamamiento para deponer a Chávez" (E. Golinger, 2005: 119). Los efectos más inmediatos del paro-sabotaje fueron la escasez de alimentos y de combustible para la mayoría de los ciudadanos del país. Además, se desplomó el nivel de crédito de Venezuela y quebraron miles de pequeños negocios. Aunque el panorama económico era bastante adverso,

> Chávez y su alianza política, soportada por los sectores populares movilizados, la Fuerza Armada que cerró filas con el gobierno, y empleados de la compañía que permanecieron en sus puestos de trabajo, así como jubilados que se integraron a las labores de rescate, sobrevivieron. El gobierno lentamente retomó el control sobre la empresa estatal, reactivando las diferentes operaciones y profundizando el proceso de reestructuración de la misma, que había intentado con escaso éxito desde el inicio de su gestión (M. López Maya, 2005: 274).

Aprovechando la coyuntura, el Ejecutivo decidió que había llegado el momento para echar de PDVSA a buena parte de la casta tecnocrática de gerentes e ingenieros que se oponían a la nueva política energética, lo cual costó el puesto a 18,000 empleados que habían apoyado el boicot. Con el fracaso del golpe, el gobierno de Chávez tuvo la gran oportunidad para reestructurar y tomar el control de la compañía cuya forma de operación cuestionaba la soberanía estatal sobre el petróleo. No obstante, esa derrota tampoco no detuvo la iniciativa de las clases dominantes:

> Al concluir la huelga petrolera con una aplastante victoria popular no sirvió para que los sectores económicos, políticos y culturales golpistas cesaran en su esfuerzo de destrucción nacional. Inmediatamente comenzaron la compra intensiva de dólares para minar las reservas nacionales y para mermar la capacidad de negociación, refinanciamiento y solvencia comercial

[65] Rafael Ramírez, *Plena soberanía petrolera: una política popular, nacional y revolucionaria*, Caracas, MINEP (Serie Discursos), 2005.

> de la nación. Acción que fue atacada de manera oportuna con la designación de una junta gubernamental de cambio de divisas y el establecimiento de una junta de control cambiario (L. Bonilla y H. El Troudi, 2004: 227).

Es preciso dejar por un momento a las clases dominantes y sus estrategias insurreccionales; y mirar ahora hacia abajo lo que se estaba cocinando en la Venezuela profunda.

2.2.3 Organización de las clases subalternas (II): entre la autonomía y la subordinación

Como se apuntó en el primer apartado sobre la organización de las clases subalternas, después de las conflictivas elecciones sindicales de la CTV en octubre de 2001, a una parte de la disidencia sindical se le fue haciendo cada vez más evidente que sería muy difícil arrebatarle la dirección a Carlos Ortega y su camarilla. Los acontecimientos políticos que se desencadenaron inmediatamente después de esa elección vendrían a fortalecer la posición de aquellos sindicalistas que pugnaban por la desvinculación total con la CTV para formar una nueva central. El hecho decisivo fue la participación directa de Ortega en el golpe de abril de 2002 y en el paro empresarial de finales del siguiente año. Además, algunos de los defensores de permanecer en la CTV cambiaron súbitamente de bando político durante el golpe de Estado, como fue el caso de Luis Miquelena. Por último, "el desastre electoral de la CTV en octubre de 2001 y las huelgas generales posteriores, habían fomentado el surgimiento de dirigentes sindicales independientes que, en su mayoría, estaban dispuestos a romper definitivamente con la CTV" (S. Ellner, 2003b: 172).

Es así como en los primeros meses de 2003 ese gran bloque disidente decide dar nacimiento a una nueva central: la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), con una dirección colectiva de 21 miembros, en vez de la clásica estructura coronada por un presidente o un secretario general. Como apunta Ellner, la nueva organización atrajo a un número considerable de dirigentes de sindicatos nacionales de empleados públicos, maestros, de la industria pesada de la región de Guyana, del metro, la electricidad, las telecomunicaciones, etc. Lo más interesante de la UNT, a juicio de Ellner, es que "asumió posiciones que reflejaban los intereses de los trabajadores, aun cuando no necesariamente respondían a la línea del MVR" (S. Ellner, 2003b: 173). Una de las primeras acciones que tomó para diferenciarse claramente

de las posiciones *cetevistas* fue el reclamo de que fueran las empresas que habían parado en el 2002-2003 las que asumieran los costos laborales provocados por ellas mismas.

La UNT también tuvo que dar otra batalla en un frente internacional, para ser reconocida como organización legítimamente representante de los trabajadores ante la OIT, disputándole ese espacio a la CTV. El crecimiento numérico de la UNT, por un lado, y el desfondamiento de la CTV por el otro, son una muestra del cambio brusco en los procesos de representación: mientras la UNT pasó de 120 mil afiliados en sus comienzos a más de 1 millón y medio en 2006, la CTV se quedó con 200 mil afiliados. Sin embargo, es importante señalar que, al igual que muchas otras organizaciones de los grupos subalternos (y tal vez en donde es más evidente) la UNT está atravesada por fuertes divisiones internas debido a las diferentes "corrientes" en su interior, que van desde las moderadas posiciones socialdemócratas hasta las de clara orientación clasista. Actualmente, cinco corrientes se disputan la conducción de la UNT y por sus diferencias no ha podido siquiera llamar a elecciones internas, lo cual demuestra una muy débil (casi inexistente) organicidad.[66]

Otro de los espacios organizativos de la clase trabajadora comenzó a gestarse al interior de aquellas empresas que, una vez concluido el paro patronal, fueron abandonadas por sus dueños; grupos de trabajadores de esas empresas decidieron tomarlas: unos para garantizar que los patronos no las desmantelaran y les pagaran los salarios caídos, y otros con la perspectiva de comenzar a operarlas ellos mismos. La mayoría de esas empresas permanecieron tomadas por un par de años pero sin ser puestas en funcionamiento. Por otra parte, la UNT presionó al gobierno chavista con el propósito de que promulgara un decreto para facilitar el control obrero de las fábricas quebradas en manos del Fondo de Garantías de Depósitos (Fogades). Hacia comienzos de 2005, y en buena medida como respuesta a las demandas de los trabajadores, el presidente decidió expropiar algunas de esas empresas y ponerlas a trabajar bajo un esquema de copropiedad y cogestión entre el Estado y los

[66] Para un breve análisis de la correlación de fuerzas y los problemas para el desarrollo de institucionalidad de la UNT véase Stevem Mather "The Second UNT Labor Congress One Month Later: The Real Fracture in Venezuela's Labor Movement is Ideological", en www.venezuelanalysis.com/articles.php?artno=1775, 2006.

trabajadores.[67] Estas experiencias dieron paso a la conformación de una red de trabajadores involucrados en las recuperaciones: el Frente Revolucionario de Trabajadores de las Empresas en Cogestión y Ocupadas (FRETECO), que actualmente agrupa a los trabajadores de 15 empresas en alguna de esas dos situaciones.[68]

Si bien estas experiencias organizativas han sido las más divulgadas, durante el periodo que corrió entre el primer golpe (2002) y el presente, las clases subalternas han ido desarrollando un sinfín de organizaciones de todo tipo: barriales, campesinas, medios alternativos de comunicación (radios, periódicos y hasta televisoras comunitarias), etc. Muchas de ellas han nacido por iniciativa propia y defienden su carácter autónomo; otras tantas han sido promovidas por el propio Chávez, pero en el transcurso de su vida han ido adquiriendo dinámicas propias. Más allá de su gran diversidad y dispersión hay un elemento que las atraviesa a todas: su identificación con el discurso bolivariano y el apoyo político que le brindan al presidente Chávez. A contrapunto con algunas corrientes analíticas que sostienen que este proceso es *estatalista* (entendido como la colonización de la sociedad civil por parte del aparato de Estado), las evidencias muestras que lo que está experimentando Venezuela es un ensanchamiento de la sociedad civil, tal como la entendía Gramsci; es decir, de aquellas instituciones privadas que, organizadas por los diferentes grupos y clases –tanto las dominantes como las subalternas– se disputan la hegemonía. Si bien es cierto que el sector de la sociedad civil que más ha ganado tanto en número como en organicidad a partir de 2002 es el de las clases subalternas, no podemos desconocer el papel activo que han jugado viejos y nuevos organismos de las clases dominantes y sus aliadas clases medias de esa misma sociedad civil: desde los grandes medios de comunicación hasta la Iglesia, pasando por la creación de nuevos partidos políticos y demás organizaciones sociales creadas al calor de la lucha política.

[67] Las modalidades de recuperación de las empresas fueron diferentes: en unos casos se recurrió a la expropiación por causa de utilidad pública (Invepal, empresa papelera e Inveval, productora de válvulas); en otros, mediante el aporte de capital estatal con la condición de la participación obrera, junto a los empresarios, en la dirección de la misma; y hubo un tercer caso, el más conservador, en el que se estableció una cogestión *sui generis* entre Estado y los empresarios (caso Invetex). Para mayores detalles puede verse la página Web: http://www.controlobrero.org/content/view/148/30/

[68] FRETECO, "La Organización de los trabajadores cogestionarios y la construcción de la empresa socialista", en http://www.controlobrero.org/content/view/148/30/, 27.06.07.

En síntesis, partiendo del enfoque gramsciano que no opone Estado-sociedad civil, sino que ve a esta última como aquel espacio donde se juega parte importante del orden estatal (la hegemonía), se puede afirmar que a partir de la llegada de Chávez a la Presidencia se desplegó desarrolló una compleja relación entre la sociedad política *chavista* (funcionarios, burócratas, etc.) y las organizaciones *bolivarianas* de la sociedad civil, como muestra el siguiente caso.

2.2.4 Las Misiones sociales (I): su nacimiento

Como se señalaba con anterioridad, la Constitución dejaba sin resolver las tensiones entre la institucionalidad existente y la exigencia constitucional de promover la democracia participativa y protagónica de las y los ciudadanos. En realidad, esa tensión no tiene su origen al interior del propio texto constitucional, sino en la realidad concreta de la sociedad venezolana que enfrenta un aparato estatal, corrupto e ineficiente, heredado de la IV República, con las aspiraciones democratizadoras del bloque popular y de su líder. La profunda resistencia o incapacidad de buena parte de los funcionarios de todos niveles del aparato estatal para seguir los nuevos lineamientos de la administración pública generó una "paradójica situación de que el Gobierno no podía implementar sus propias políticas porque éstas eran boicoteadas por sus propios funcionarios" (A. De Cabo de la Vega, 2006: 41). Fue precisamente esa traba burocrática la que orilló a Chávez a apoyarse cada vez más directamente en las organizaciones populares y a intentar idear soluciones a los problemas sociales que pudieran sortear el laberinto burocrático del aparato estatal que él mismo dirigía, pero no controlaba. Este fue el contexto en que Chávez lanzó las llamadas Misiones.

Hacia mediados de 2003, el gobierno chavista decide lanzar las dos primeras Misiones: la Misión Róbinson,[69] contra el analfabetismo, y Barrio Adentro para dar ofrecer los servicios básicos de diagnóstico y atención primaria en los barrios marginales y comunidades de todo el país. Debido a la falta de experiencia, pero sobre todo de voluntad política de los gremios magisteriales y de salud venezolanos, el gobierno apeló a la solidaridad nacional e internacional para poner en marcha estas primeras Misiones. Así, se decidió firmar un

[69] En homenaje al seudónimo que adoptó el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, quien cambió su nombre por el de Samuel Róbinson. Se recomienda la lectura de la novela de Uslar Pietri sobre Rodríguez: *La isla de Róbinson*.

convenio con la República cubana para que maestros con experiencia en educación popular y médicos de esa nacionalidad fueran a Venezuela para atender directamente esas necesidades de las clases marginadas.

Cabe recordar que para la fecha del arranque de las Misiones ya la industria petrolera comenzaba a recuperarse del sabotaje del cual había sido objeto; además, los costos de producción de PDVSA se habían reducido significativamente gracias a la purga de buena parte de la burocracia parasitaria que había sido echada de la compañía. Con los recursos frescos que recuperaba PDVSA, y en un marco de aumento sostenido de los precios mundiales del petróleo, se financió en parte la logística de esas primeras Misiones. En el siguiente acápite se volverá al tema de las Misiones; por lo pronto, baste señalar que en ese momento las mismas representaron la posibilidad de ir avanzando en las metas más urgentes del proyecto bolivariano, además de fortalecer el vínculo orgánico (más allá de la simpatía y la coyuntura) que se iba tejiendo entre el presidente y las multitudes populares. Otro elemento que es importante tener en cuenta es que estas primeras misiones se apoyaron en las organizaciones populares de las que se habló con anterioridad, como los Comités de Tierras, Círculos Bolivarianos, etcétera. De esta manera, el nacimiento de las Misiones representaba un momento importante en el proceso de redefinición de las relaciones entre la dirección política del movimiento bolivariano (vuelta cabeza del aparato estatal) y las clases subalternas. Es decir, se estaba sembrando la semilla de un nuevo orden estatal apoyado fuertemente en la (re)socialización de la renta petrolera que había sido paulatinamente privatizada y extranjerizada por la apertura de los noventa. Frente a este proceso de reestructuración de las relaciones entre el aparato estatal, la apropiación de la renta y las clases sociales, los sectores dominantes no podían quedarse de brazos cruzados, como veremos a continuación.

2.2.5 Las clases dominantes. Acto tercero: de cacerolas, guarimbas y referendos

Una vez derrotado el paro-sabotaje, el bloque opositor no cesó su estrategia para debilitar al bloque popular encabezado por Chávez. Una de sus tácticas fue convocar a las clases altas y medias del Este de Caracas a “dar cacerolazos” a los chavistas que se presentaran en lugares

públicos de "su" territorio:[70] la idea era acosar en restaurantes y centros comerciales a algunos connotados diputados y funcionarios del bloque chavista haciendo escándalo con las cacerolas o lo que se tuviera a la mano. Hacia mediados de 2003 la intolerancia y provocación contra los chavistas en el Este de Caracas adquirió dimensiones alarmantes, tanto así que algunos de ellos tuvieron que cambiar de residencia para protegerse y proteger a sus familias. Los cacerolazos tenían al menos tres propósitos:

> intimidar al chavismo moderado en procura de inhibir sus actuaciones; alimentar la intolerancia política y, como consecuencia, agudizar las contradicciones de clase y promover disidencias en el seno del proceso revolucionario, tal como se expresara en la traición de un importante grupo de diputados de la Asamblea Nacional, Consejos Legislativos Regionales y Concejales (L. Bonilla y H. El Troudi, 2004: 228).

Estos mismos autores señalan que la campaña tuvo un éxito relativo cuando algunos chapistas, atemorizados, ante la posibilidad de ser *caceroleados*, decidieron bajar el perfil de su actuación pública. Sin embargo, las cacerolas eran sólo la punta del iceberg de la estrategia de los opositores. Amparados en el artículo 72 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a presentar firmas para solicitar referendos revocatorios para destituir a cualquier funcionario designado por elección popular (una vez cumplida la mitad del tiempo de su mandato), el bloque opositor comenzó a mediados del 2003 una campaña para iniciar el procedimiento que llevara al referendo sobre si Chávez debía continuar o no como presidente de la República. En septiembre, el CNE aprobó el reglamento que regularía los procesos del referendo; hacia finales de noviembre se inició la recolección de firmas por parte de la oposición.

Para la recolección de las firmas, los opositores se sirvieron de una organización recientemente constituida y financiada por la NED y la DAI[71] estadounidenses: *Súmate*.[72] En

[70] Es decir, las clases "Levantadas en los últimos 25 años en sus territorios urbanos incomunicados con los sectores populares, educados en colegios privados, buena parte de ellos católicos, graduados en universidades a las que hasta hace poco escasamente asistían, aún en las públicas, estudiantes de origen humilde. Rodeados por un entorno familiar y de trabajo afín, donde los pobres son cada vez más una especie remota, terminan por confundir 'su' realidad con 'la' realidad, 'su' país con 'el' país" (M. López Maya, 2005: 292).

[71] La Development Alternatives, Inc. es una "Compañía consultora privada de negocios para empresarios y gobiernos, con sede en los Estados Unidos. Fue fundada en Washington en los años setenta y en los últimos años se ha desempeñado fundamentalmente en Afganistán, Iraq y Liberia, con

poco más de un mes, y antes de que el CNE se pronunciara sobre la validez de las firmas, los medios declararon que *Súmate* había logrado recoger casi 3 millones y medio de firmas, las suficientes para convocar al revocatorio. Sin embargo, después de analizarlas, el CNE detectó múltiples irregularidades en las planillas, por lo que objetó más de un millón de firmas que tendrían que ser presentadas nuevamente. Una vez descubiertas las ilegalidades del procedimiento, los sectores más beligerantes de la oposición (incluida la alta jerarquía católica) desconocieron el veredicto de la Comisión, retornando a su estrategia subversiva mediante el llamado a un plan que denominaron "La Guarimba".

El ultraderechista *Bloque Democrático* encabezado por el venezolano-norteamericano Robert Alonso convocó a los opositores a Chávez a realizar actos de "desobediencia civil", que más bien eran llamados directos a la violencia callejera y creación de situaciones de caos. Como algunos analistas han señalado,

> La "Guarimba" es una estrategia insurreccional que se aplicó en Caracas y en algunos focos del interior del país entre el 27 de febrero y 4 de marzo de 2004, y cuya única finalidad era la de atentar de manera violenta y sistemática contra la paz y tranquilidad pública, provocar una intervención "represiva" de las fuerzas del Estado que incentivara una sublevación cívico-militar, deslegitimar al gobierno del presidente Chávez y forzar la intervención extranjera.[73]

Los principales actores de la estrategia subversiva fueron algunos grupos de ultraderecha, jóvenes de las clases altas residentes en el Este, y los medios de comunicación que se pusieron al servicio de los guarimberos, además de ciertos grupos empresariales que también colaboraron en labores logísticas;[74] todos ellos amparados y protegidos por el gobernador opositor del estado Miranda, así como por los también opositores Alcalde Mayor de Caracas y alcaldes de los municipios Baruta y Chacao, del Este de la ciudad, quienes pusieron a su

---

fondos de la USAID. Apoya acciones encubiertas del gobierno norteamericano" (E. Golinger, 2005: 289).

[72] Súmate había sido creada a principios del 2003 durante la fase final del golpe petrolero; su vicepresidenta y tesorera, María Corina Machado, había sido una de las personalidades que había apoyado al efímero gobierno golpista de Carmona. El financiamiento que recibió hacia mediados de año por parte de la NED tenía como propósito explícito "promover un referendo contra el presidente Chávez" (E. Golinger, 2005: 130 y ss.).

[73] Antonio Guillermo García Danglades, *Oposición a la carta. Análisis crítico de la Contrarrevolución*, MINCI, 2006, p.53.

[74] Como el Grupo Mendoza, mejor conocido como Grupo Polar, el conglomerado empresarial más importante de Venezuela (L. Britto, 2006: 180).

disposición, además de logística municipal para facilitar las guarimbas, algunos cuerpos de la policía bajo su mando para protegerlos.

No obstante todos los recursos materiales y comunicacionales con los que contaron los insurrectos, su estrategia tenía una gran debilidad: prácticamente toda la violencia y desorden que provocaron lo hicieron en su propio territorio: el Este de Caracas. Muchos de los opositores al chavismo que al inicio los habían respaldado moralmente (es decir, sin movilizarse),[75] pronto comenzaron a verse afectados en su vida cotidiana, por lo que después de una semana las guarimbas se ahogaron en su propio humo, al mismo tiempo que el gobierno de los Estados Unidos se veía obligado a reconocer la legitimidad del gobierno de Chávez. Por otro lado, la estrategia del bloque chavista había dado resultado de nuevo: no caer en la provocación autoritaria y apelar al desgaste de los opositores. Si bien se extinguió rápido, la subversión dejó una cuota de sangre y daños materiales: "nueve muertos, decenas de heridos, unos 40 revoltosos con autos de detención, que en los días siguientes fueron liberados, y millones en pérdidas materiales" (M. López Maya, 2005: 280).

Como señala esta misma autora, el efecto político inmediato del fracaso de las guarimbas fue el aumento de las tensiones al interior del bloque opositor; por otro lado, el gobierno de Chávez y el bloque popular salieron fortalecidos sin haber sufrido pérdida de legitimidad, como se proponían los opositores. A estos últimos no les quedó más remedio que proceder a reparar sus firmas inválidas, lo cual les tomó otros tres meses: el 15 de agosto se realizaría el referendo revocatorio.

Una vez que el CNE certificó que las nuevas firmas eran válidas y procedía el referendo, el presidente Chávez convocó al bloque popular a involucrarse a la campaña para promover el "No" ante la pregunta sobre si debería abandonar su cargo. Tal como recuerdan algunos autores como L. Britto (2006) y S. Neuhaus y H. Calello (2006), la campaña por el "No" permitió al bloque chavista movilizar a la población sin la intermediación de los partidos políticos afines al gobierno, apelando a la participación autónoma de quienes se quisieran

[75] "Los vecinos 'del este de la ciudad', la clase media profesional, golpeada por la devaluación y la demencial huelga empresarial que un año atrás había devastado la economía venezolana, apoyaban 'moralmente' las barricadas". Susana Neuhaus y Hugo Calello, *Hegemonía y emancipación*, Buenos Aires, Herramienta, 2006, p. 44.

sumar a la misma. Rescatando un hecho histórico de la Guerra Federal (La "Batalla de Santa Inés" comandada por Ezequiel Zamora), así como una leyenda/copla del folklore popular de mucha tradición entre los venezolanos ("Florentino y el Diablo"), el bloque chavista puso en marcha una campaña muy acorde con la memoria histórica y las tradiciones populares.[76] Dicha estrategia no sólo tuvo como logro inmediato la aplastante victoria y el incremento de la masa de votantes por el chavismo respecto a elecciones anteriores, sino que fue aprovechada para fortalecer la identidad del bloque popular y difundir los principales logros del gobierno bolivariano durante el último año, en especial los relativos a las misiones sociales. Además, el papel de la ciudadanía el 15 de agosto marcó un hito en la historia de la participación popular en procesos de este tipo: multitudes de personas madrugaron para acudir a las casillas de votación, las cuales no fueron cerradas sino hasta la media noche; la abstención también bajó a menos de 15%. Los resultados del referendo reafirmaron el carácter de clase de la confrontación política que se venía librando: 60% de los votantes se pronunciaron por la continuación del mandato del presidente. La mayoría de los habitantes de los municipios de clases medias y altas votaron contra Chávez, en comparación con la abrumadora mayoría que lo hizo a su favor en los sectores populares.

Como en anteriores ocasiones y ante la evidente derrota, buena parte del bloque opositor (en especial los medios) retomó la campaña de desconocimiento de la autoridad electoral: una vez dados a conocer los resultados, el núcleo duro oposicionista seguía sin reconocerlos, arguyendo fraude electoral; aseguraron que sólo los aceptarían si eran avalados por los observadores internacionales, entre quienes se encontraban el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos (OEA). A los pocos días del referéndum, éstos y otros organismos reafirmaron la transparencia del proceso. La mayoría de la oposición, salvo Fedecámaras, seguía sin reconocer su derrota; el único resultado aceptable para la oposición era su propia victoria. Como algunos investigadores sostienen, hasta ese momento "La oposición nunca pudo rebasar la condición de 'suma de sectores expulsados del poder'

[76] Sobre este punto es pertinente recordar dos anotaciones de Gramsci: "el folklore no debe ser concebido como una curiosidad, una rareza, una cosa ridícula, una cosa a lo sumo pintoresca: sino que debe ser conocido como una cosa muy seria y que hay que tomar en serio" (A. Gramsci,1999, vol. I: 152); "Se ha olvidado además otra proposición de la filosofía de la praxis: la de que las 'creencias populares' o las creencias del tipo de las creencias populares tienen la validez de las fuerzas materiales" (A. Gramsci,1999, vol. V: 46).

(derrotados electoralmente, o dejados en el camino por Chávez) e intenta aparecer homogeneizada en la Coordinadora Democrática" (S. Neuhaus y H. Calello, 2006: 45). Sin embargo, esa ilusión de homogeneidad desaparecería con la derrota del referendo; en adelante el bloque opositor comenzaría a resquebrajarse y desdoblarse en organizaciones con estrategias diferentes; la aceptación por parte de Fedecámaras del resultado electoral adelantaba el desmoronamiento de la Coordinadora Democrática. En suma, el desenlace de este episodio abría un nuevo momento en la lucha de clases y en los esfuerzos por consolidar un nuevo bloque histórico, como se verá en el tercer capítulo.

CAPÍTULO 3. Los perfiles de un nuevo orden estatal (2004-2006)

3.1 La reconstrucción de las bases materiales de la Nación

3.1.1 Reconstruyendo las bases materiales de la Nación (I): la "Nueva PDVSA"

Dado que la principal fuente de ingresos del Estado así como el eje en torno al cual giran las relaciones entre aquél y las clases sociales venezolanas sigue siendo la renta petrolera, uno de los principales retos que enfrentó el gobierno bolivariano para poner en marcha su proyecto fue cómo reorientar el modelo rentista para ir dando respuesta a los problemas más urgentes de las mayorías empobrecidas. En primer lugar, el cambio más importante tuvo que ver con la política fiscal de PDVSA: la nueva consigna era maximización en la recaudación por cada barril. Otra de las metas planteadas fue la necesidad de convertirla en una "industria industrializante"[77] que apuntara a la superación de la casi total dependencia de la exportación de crudo, mediante la inversión de la renta en otros sectores productivos. A esta propuesta se le llamó la *siembra petrolea.*[78] Además de financiar las Misiones, PDVSA debería canalizar los recursos para la generación de nuevos empleos en sectores no petroleros, apoyar la capacitación laboral y el desarrollo de cooperativas y otras formas de la *economía social*, facilitar el desarrollo de una agricultura sostenible, como se menciona en párrafos posteriores.

La reconquista de PDVSA se inscribe en un marco más amplio de política energética que el gobierno de Chávez denominó *Política de plena soberanía petrolera*, que tendría tres orientaciones básicas (nacional, popular y revolucionaria) y cinco ejes para desmantelar la estructura heredada de la época de la *apertura petrolera* anti-nacional.

---

[77] Juan Torres López, "Economía en tiempos de convulsión: luces y sombras", en Juan Torres López (coord.), Venezuela a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana, Barcelona, Icaria, 2006.

[78] La idea de "sembrar el petróleo" había sido formulada por primera vez en un artículo periodístico por el escritor y político Arturo Uslar Pietri el 16 de julio de 1936 en el diario caraqueño *Ahora.* Los gobiernos de Marcos Pérez Jiménez y de Carlos Andrés Pérez (en su primer periodo) habían puesto en práctica hasta cierto punto la idea de la *siembra*, mediante la inversión de parte de la renta en infraestructura, etc.

3.1.2 Reconstruyendo las bases materiales de la Nación (II): ¿Un nuevo patrón de reproducción de capital?

A mediados del 2003, el gobierno de Chávez enfrentó la urgente necesidad de echar a andar un plan de rescate de la base productiva nacional recientemente desmantelada por el paro petrolero-empresarial y agravada por una continua salida de capitales que había comenzado desde el 2002: "Se estima que el paro empresarial tuvo un costo de 3.500 millones de dólares, mientras el paro petrolero tuvo un costo directo que superó los 10 mil millones de dólares" (M. Lacabana, 2006: 346); por otro lado, el PIB bajó más de 27% en el primer trimestre del 2003, la tasa de desempleo superó el 20% y la inflación se ubicó en el orden de 31% y 27% en los años 2002 y 2003, respectivamente, "dejando atrás los logros del control inflacionario y la mejora de la ocupación y del salario real alcanzados durante el trienio 1999-2001" (M. Lacabana, 2006: 346). Por supuesto, los mayores costos del paro habían caído sobre los hombros de las clases trabajadoras y de buena parte del pequeño y mediano empresariado: "en unas pocas semanas se destruyeron más de setecientos mil puestos de trabajo" (J. Torres, 2006: 75).

Las respuestas del gobierno de Chávez a la crítica situación fueron de diversa índole. Las más inmediatas fueron la renegociación de la deuda externa y, por primera vez desde 1998, la adopción de un sistema de administración y control de cambios para evitar la salida de divisas y la depreciación del bolívar. También se introdujeron selectivamente controles de precios en bienes y servicios básicos que aliviaron en algo las presiones inflacionarias desatadas por el paro.

Debido a la huelga de inversiones de buena parte de la burguesía, el gobierno chavista tuvo que apelar a una doble estrategia para lograr la reactivación del aparato productivo; por una lado, aliarse con una fracción de la burguesía venezolana –que no se había sumado al paro– y con ciertos sectores de las burguesías foráneas (sobre todo de Colombia, Brasil, Argentina, China, España, Italia, Irán y Rusia); por el otro, poner en marcha un ambicioso plan para el fortalecimiento de la llamada *economía social.* Veamos brevemente en qué consistió cada una de estas estrategias.

a) La "economía social" y la Misión Vuelvan Caras. A medida que fue estabilizando la lucha política en el terreno de lo electoral, el gobierno de Chávez tuvo mayores oportunidades para poner en marcha algunas políticas públicas relacionadas una nueva "racionalidad productiva", activando la llamada *economía social*.[79] En un primer momento dicha estrategia se concentró en la promoción estatal de la formación de cooperativas (de producción, distribución, consumo y servicios); más adelante se incluirían otras formas como las empresas de producción social.

Si bien es cierto que anteriormente a 1998 ya existía un movimiento cooperativista, éste había venido perdiendo fuerza desde mediados de los ochenta. La nueva Ley Especial de Asociaciones Cooperativas de 2001 vino a inyectarle nuevos bríos al cooperativismo venezolano. Sin embargo, no fue sino hasta la creación de la Misión Vuelvan Caras, a mediados de 2004, cuando se vivió una ola expansiva del fenómeno. Bowman y Stone presentan algunos datos que ilustran este crecimiento:

> Cuando Chávez llegó al poder en 1998 había 762 cooperativas legalmente registradas, compuestas de unos 20.000 asociados. En 2001 había casi 1.000 cooperativas; en 2002, 2.000; y en 2003, 8000. A mediados de 2006, la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) informa que el número de cooperativas registradas es de 108.000 y el de miembros asociados, 1.500.000. Desde 2003, el MINEP ha facilitado formación empresarial y de autogestión gratuitamente, ha ayudado a los trabajadores a convertir empresas con problemas en cooperativas, y ha ampliado los créditos iniciales a las impresas y los destinados a la adquisición de éstas por los propios empleados.[80]

Como se decía, los años decisivos en la formación de cooperativas fueron el 2004 y el 2005, "como resultado de la promoción directa por instituciones estatales, y la implementación de programas de formación técnico-profesional como Vuelvan Caras (C. Piñeiro, 2007: 5). Dicha Misión se pensó como el programa que serviría de palanca para la promoción del modelo de

[79] Denis, Roland, "La nueva ratio productiva (propuestas de un modelo alternativo de desarrollo)", en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, UCV, año 9, no. 1, enero-abril, 2003.

[80] Betsy Bowman y Bob Stone, "La revolución cooperativa de Venezuela", en www.rebelion.org/noticia.php?id=36452, 2006, s.p. Según diversas estimaciones, el cooperativismo representa actualmente entre el 5 y 12% del total de la fuerza de trabajo venezolana; las cooperativas trabajan en cuatros sectores: 31% en el comercio y la hostelería; 29% en el transporte, el almacenaje y las comunicaciones; 18% en la agricultura, la caza y la pesca; y 8.3% en la industria manufacturera. Al respecto véanse Camila Piñeiro, "Democracia Laboral y Conciencia Colectiva: Un Estudio de Cooperativas en Venezuela", en www.rebelion.org/noticia.php?id=53984, 2007.

desarrollo endógeno,[81] a partir de la creación de los Núcleos de Desarrollo Endógeno (Nudes). Según información del Ministerio que coordina el programa, "Los núcleos articulan un conjunto de cooperativas de producción y servicios y a su vez, cada núcleo se relaciona con otros espacios definidos para generar redes de cooperación productiva a partir del trabajo de las cooperativas organizadas de acuerdo a las potencialidades de cada núcleo".[82]

Si bien es cierto que los egresados de los cursos de capacitación de la Misión Vuelvan Caras pueden intentar insertarse en el mercado de trabajo capitalista existente, los incentivos del programa están dirigidos a que tomen la iniciativa y formen sus propias cooperativas. El proyecto del desarrollo endógeno ha sido fortalecido con la creación de un nuevo marco legal e institucional, del cual el *Decreto de Desarrollo Endógeno y Empresas de Producción Social* así como la creación del Consejo Ejecutivo Nacional de Cooperativas (Cencoop) son un ejemplo. Algunas otras instituciones para el financiamiento y capacitación de este tipo de empresas sociales son las siguientes:

> Se crea el Banco del Pueblo para otorgar microcréditos para emprendimientos individuales y el Banco de la Mujer al reconocer el fenómeno de feminización de la pobreza y para compensar la discriminación de género. [Se] Impulsa simultáneamente la formación de los sectores excluidos de la educación formal y/o técnica (Misión Vuelvan Caras) y del mercado de trabajo, a la vez que financia una amplia red de emprendimientos de todos los sectores económicos, en general de tamaño pequeño, que contribuye significativamente a la disminución del desempleo (M. Lacabana, 2006: 347).

También firmaron el Acuerdo Marco de Corresponsabilidad para la Transformación Industrial diversas entidades del poder público, con la finalidad de enlazar pequeñas empresas autogestionadas, como las cooperativas, con medianas empresas cogestionadas entre los trabajadores y representantes estatales o dueños privados, y ambas con grandes empresas estatales a cargo de producción y servicios estratégicos, también administradas democráticamente (C. Piñeiro, 2007: 4).

---

[81] Para una breve historia de cómo fue evolucionando el concepto de *desarrollo endógeno*, así como sus alcances y límites en una economía como la venezolana, véase Enrique Vila Planes, "El Desarrollo Endógeno de Venezuela", en http://www.bacyam.com.ar/contribuciones3/PonenciaSobreDesarrolloEndogenoParte1.doc y http://www.bacyam.com.ar/contribuciones3/PonenciaSobreDesarrolloEndogenoParte2.doc, 2006.

[82] Minep, *Desarrollo Endógeno Bolivariano*, Caracas, Ministerio de Poder Popular para la Economía Popular, 2006, p. 25.

Finalmente, el propio aparato de Estado está sirviendo para dar salida a los bienes y servicios de ese nuevo sector de la economía mediante las Rondas de Negocios que, organizadas por la Comisión Presidencial de Compras del Estado, se proponen dar trato preferencial a dicho sector. A este cuadro emergente de nuevos micro-empresarios (individuales o colectivos) hay que agregarle otros personajes que no son ni tan nuevos, ni tan micros, como se documenta a continuación.

b) Alianzas con fracciones no dominantes de la burguesía. Respecto a este punto la clave política fue la conformación de un grupo empresarial que, fundado en el 2000, decidió no participar en el *lock-out* de Fedecámaras del 2002-2003. La bisagra de este grupo fue Alejandro José Uzcátegui, quien creó una asociación que "bajo el nombre de Empresarios por Venezuela [Empreven], se opuso a Fedecámaras, llamó a 'trabajar por la nación', y dejó bien sentado su apoyo a Hugo Chávez".[83]

Ese *pequeño pero creciente* grupo empresarial también es liderado por una nueva Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela (Confagan de José Agustín Campos y por Alberto Cudemus, presidente de la Federación Porcina y ex candidato a la presidencia de Fedecámaras; la nueva orientación de la política económica de Chávez también es apoyada por empresarios de muy diversas ramas: cerámica, seguros, medios de comunicación, constructoras, etc.[84] Desde el punto de vista del gobierno chavista, el acercamiento a estos grupos responde a "una política de reindustrialización con base en industrias tradicionales y encadenamientos productivos internos como parte de las alianzas con la fracción no dominante de la burguesía nacional" (M. Lacabana, 2006: 348). Como el propio Lacabana subraya, la primera fase del proyecto de reindustrialización se basa en la recuperación paulatina de industrias estratégicas desmanteladas durante la apertura económica

[83] América Económica, "Durmiendo con Chávez", en *Revista América Económica,* No. 316-317, enero-febrero, 2006. Para una lista de los integrantes de Empreven en cada una de las regiones venezolanas, consúltese su página web: http://www.empresariosporvenezuela.net.ve/.

[84] Otro ejemplo lo constituye la joven Cámara Bolivariana de la Construcción, gremio que "agrupa a los nacientes actores empresariales bolivarianos" (Arenas, 2005: 362).

neoliberal y, en segundo lugar, en la diversificación productiva promovida desde el Estado con los recursos de la renta petrolera.

En lo particular, se cree que más allá del pretendido nacionalismo que algunos chavistas imputan a dicho grupo empresarial, son sus intereses materiales más inmediatos conjugados con su audacia política los que los llevaron a tomar la decisión de aprovechar los espacios abiertos por el proyecto gubernamental para la acumulación de capital. Es más, algunos empresarios que habían participado activamente en los diferentes intentos golpistas, a partir del 2004-2005 comenzaron a suavizar posiciones y procuraron acercamientos con el gobierno. Tal como lo manifestó Luis Vicente León, presidente de la consultora Datanálisis y otrora antichavista "¿Cómo los empresarios pueden negarse a tender puentes con aquel que decide las políticas públicas y las políticas relacionadas con el derecho a la propiedad privada?" (Citado en América Económica, 2006: s.p.). Uno de los mejores indicadores de que cada vez es más amplio el abanico del empresariado que está dispuesto (y necesitado) a invertir con la ayuda gubernamental, es el hecho de que Empreven pasó de los 200 asociados durante su nacimiento a más de 180.000, en su mayoría microempresarios.

La revista *América Económica* también reportó que el viraje de estrategia de la burguesía también está alcanzando al sector financiero. Empreven logró convencer a algunos bancos como Banco Occidental de Descuento, Banorte, Banco Canarias, Banesco y Banco Nacional de Crédito para que desarrollaran proyectos como la asignación de créditos a microempresarios, aun cuando el gobierno logró imponerles una regulación de las tasas de interés y de las comisiones.[85] El negocio de los microcréditos no es, sin embargo, el que más le da frutos al sector bancario: "los excedentes financieros en manos del gobierno van a terminar de una u otra forma en los bancos privados, nacionales y trasnacionales, generando ganancias extraordinarias para los mismos" (M. Lacabana, 2006: 349-350). Hasta la Cámara Venezolana-Americana de Comercio e Industria, convocó a Uzcátegui para una reunión a finales de 2005: "La clave es que los empresarios no van directamente a negociar con el gobierno, sino que utilizan a Empreven como puente", dijo Uzcátegui a la multicitada revista.

[85] El sector privado aprobó, en 2006, 20,000 millones de bolívares —unos 10 millones de dólares— para créditos (América Económica, 2006).

Sin embargo, lo más relevante en términos de la constitución de un nuevo orden estatal es que esta burguesía emergente no sólo apuesta a hacer negocios, sino a ser parte orgánica del aparato estatal, tal como lo deja ver el propio Uzcátegui: "Empreven es una ONG y está solicitando al Alto Gobierno ser incluida en el nuevo Estado Social que incluirá (*sic*) al aparato estatal, a las grandes cooperativas y asociaciones civiles".[86] En este mismo sentido, Lacabana apunta que

> …durante 2005 se comienza a percibir un reacomodo de los sectores empresariales buscando negociar con el gobierno desde una posición gremial y dejando de lado la oposición política abierta. La institucionalización del conflicto sociopolítico y el crecimiento de la economía han permitido reconstituir algunas alianzas tácticas con fracciones del capital, sin que ello signifique que estas, al menos las fracciones más concentradas del capital, no continúen oponiéndose por diferentes vías a la implementación del nuevo modelo […]
>
> Ahora bien, este reacomodo de los sectores que en muchos casos son los productores y/o distribuidores de bienes salario se da en un contexto donde el nuevo Estado impulsa una política distributiva de amplio alcance que incrementa la demanda de estos bienes y que sin duda impulsa la acumulación de esos sectores de la burguesía, más allá de que los alimentos considerados esenciales tengan precio máximo (M. Lacabana, 2006: 349).

Finalmente, se encuentra un tercer grupo de empresas que participan en el nuevo modelo de reproducción, cuyos capitales pertenecen a burguesías extranjeras, algunas de las cuales están invirtiendo en las llamadas "empresas mixtas" de la Franja Petrolera del Orinoco.

La novedosa configuración de las fuerzas productivas arriba descrita es parte de la emergencia de un patrón de reproducción de capital y de reproducción social con las siguientes características:

Incremento de la recaudación fiscal y mayor captación nacional de la renta petrolera: entre 1998 y 2006 la administración encabezada por Chávez ha propiciado el incremento sostenido de sus ingresos. Si bien es cierto que el aumento constante de los precios del petróleo ha sido uno de los pilares de dicho incremento, también fueron importantes los cambios al régimen de rentas y de impuestos en el sector energético, producto de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, así como al mayor control de la industria por parte del Estado. Otra de las

[86] Citado en Nelly Arenas, "¿Languidece el corporativismo? De Fedecámaras a los nuevos actores empresariales en Venezuela", en AA.VV., *Venezuela Visión Plural. Una mirada desde el CENDES* Tomo I, Bid & Co. Editores-Cendes-UCV, 2005, p. 365.

claves ha sido la mayor captación de ingresos fiscales provenientes del sector no petrolero en expansión: la riqueza petrolera que representaba 20% del PIB en 1999, hacia fines del 2006 se había reducido a 14.3%; por su parte, el sector no petrolero giró en sentido inverso, pasando de 70% hacia fines de los noventa a casi 75% en la actualidad. Así, los ingresos por concepto de impuestos no petroleros ascendieron de 10% del PIB en 1999 a 12 por ciento en 2006.[87]

Fuerte inversión estatal en gasto social y en infraestructura. El gasto social se ha venido incrementando a lo largo de todo el periodo chavista, pasando de 8.2% del PIB en 1998 a 13.6% en 2006. Pero eso no incluye el gasto social realizado por PDVSA, que ascendió al 7.3% del PIB en 2006. Como se desprende del estudio de Weisbrot y Sandoval, si se incluye ese monto, el gasto social total representó 20.9% del PIB en 2006, lo que constituye al menos 314% más que en 1998, en términos de gasto social real por persona. Por otro lado, el gasto estatal en infraestructura ha reactivado importantes sectores de la economía como las comunicaciones, transportes y construcción civil, pues se ha invertido fuertemente en puentes, ferrocarriles, carreteras, metro, escuelas, universidades, refinerías, siderúrgicas, etc.

Diversificación del aparato productivo y de las exportaciones. El control de cambios al que se vio obligado a virar el gobierno de Chávez, después del paro petrolero para detener la fuga de divisas, dio paso a la alianza con algunos sectores de la burguesía nacional para desarrollar un plan de inversiones privadas en el sector productivo, en especial en el manufacturero. En el 2005 y 2006 éste creció a un promedio de 10%. Dicho esfuerzo de diversificación del aparato productivo se ha reflejado en la formación bruta de capital fijo (construcción, adquisición y puesta en funcionamiento de bienes de capital, orientados a la formación de activos fijos, nuevas construcciones, instalación de maquinarias, etc.), que si bien estuvo estancada entre 1998 y 2001 y cayó estrepitosamente a raíz del paro petrolero-empresarial de 2002-2003, a partir de 2004 ha experimentado un rápido de crecimiento que se ha mantenido hasta el

[87] Mark Weisbrot y Luis Sandoval, *La economía venezolana en tiempos de Chávez*, Washington, Center for Economic and Policy Researh, 2007; Luciano Wexell, "Desafíos de la Venezuela Saudita", en *Le Monde Diplomatique* (edición colombiana), Bogotá, Marzo, 2007.

presente, debiéndose, en primer lugar, a las inversiones del sector privado, y en segundo plano a las inversiones estatales.[88]

La modificación en la composición de las importaciones también refleja la tendencia hacia la reindustrialización del aparato productivo: las importaciones de bienes de capital han aumentado, en detrimento de las importaciones de bienes terminados o intermedios, lo que nos indica la existencia de un proceso de reindustrialización en marcha.

Empleo, salarios y crecimiento de la demanda interna. La nueva estructura productiva en gestación, así como la ampliación del aparato de Estado y el consecuente crecimiento de la burocracia pública se ha traducido en el crecimiento del empleo formal:

> en los últimos seis años, la participación del sector formal de la economía ha crecido el 8,1, representando actualmente más del 56,8 por ciento de los ocupados; a fines de 2002 sumaba el 48,7. Observando en detalle, se nota que la inmensa mayoría de los nuevos empleos, el 72,2 por ciento, fue creada en los sectores servicios, transportes, comercio y establecimientos financieros, el 13,7 en construcción civil y el 8,2 en la industria.[89]

O, como apuntan otros autores,

> …de 1998 en adelante el empleo se ha incrementado con cerca de 1,9 millones de puestos de trabajo en el sector privado y 478.000 en el sector público. El empleo como porcentaje de la población económicamente activa aumentó en 1,5 puntos porcentuales desde 1998. El empleo en el sector privado registró un porcentaje ligeramente mayor de la población económicamente activa (75,2 por ciento) en 2006 que en 1998 (74,9 por ciento) […] Como porcentaje de la población económicamente activa, el empleo formal ha aumentado de manera significativa desde 1998, pasando de 44,5 a 49,4 por ciento (M. Weisbrot y L. Sandoval, 2007: 14-15).

En otro sentido, de acuerdo a un informe de la OIT, el índice de salarios medios reales anuales de Venezuela (base 1995=100) creció de 98.5 en 1998 a 113.7 en 2006, siendo el segundo país latinoamericano con mejor desempeño en el periodo, y uno de los cinco que experimentó incremento en el salario real, en vez de deterioro. Como decíamos anteriormente, a esto se

[88] Mark Weisbrot y Luis Sandoval, *Actualización: La economía venezolana en tiempos de Chávez*, Washington, Center for Economic and Policy Research, 2008.

[89] Luciano Wexell, "Sembrando petróleo. La economía venezolana 1999-2008", suplemento especial *Desde Abajo,* Bogotá, 2009, p. 39.

debe agregar el incremento del salario social producto del conjunto de políticas de educación, salud, vivienda, etc. promovidas por el Estado.

Como resultado de la articulación de factores señalados, se ha experimentado un crecimiento acelerado de la demanda interna en casi 83% entre 2003 y 2008:

> Sin embargo, mucho más importante ha sido el esfuerzo para impulsar la oferta doméstica y disminuir la oferta externa. En el mismo período, el crecimiento de la oferta doméstica acumuló un alza del 57,9 por ciento, impacto directo de la reactivación del aparato industrial y del aumento de las inversiones en nuevas unidades productivas (L. Wexell, 2009: 34).

Sin embargo, la reactivación del aparato industrial y el aumento de inversiones en nuevas unidades productivas, así como el incremento del empleo a ellas asociado, está generando que la demanda interna esté creciendo más que la oferta doméstica, disparando las importaciones y presionando la inflación. Las primeras han crecido en una magnitud considerable: 330% desde 2003, en comparación con las exportaciones, que lo han hecho en 154% en el mismo periodo.

Una de las mejores muestras de que la expansión de la demanda no sólo ha estado asociada a los altos precios del petróleo y al aumento de las importaciones, sino también a la paulatina reindustrialización del país y a la reactivación del aparato productivo interno, es el descenso de la tasa de inflación a partir del 2003; a mediados de ese año y como consecuencia del paro, había alcanzado 40%, para de allí ir bajando a 14% en 2004, y a menos de 13% en 2005, volviendo a subir ligeramente durante el 2006 y lo que va del 2007, como consecuencia de la acelerada expansión económica.

En síntesis, lo que más resalta de la evolución económica venezolana, por lo menos desde que la lucha política se estabilizó hacia mediados del 2004, "es que se haya logrado recuperar el equilibrio macroeconómico al mismo tiempo que se han recuperado y fortalecido las propuestas y las políticas de transformación estructural" de la economía rentista (J. Torres López, 2006: 78). Por su parte, Weisbrot y Sandoval también auguran que este nuevo modelo de acumulación continuará su ciclo expansivo por un buen tiempo, incluso si los precios del petróleo llegasen a descender, porque

> …la reducción de la deuda pública (medida como porcentaje del PIB), el gran superávit en cuenta corriente, y la acumulación de reservas en moneda extranjera han provisto al gobierno con un blindaje bastante seguro contra una caída eventual en los precios del petróleo. La situación macroeconómica favorable también le permite contar con gran flexibilidad para

> abordar el problema de la inflación y los desequilibrios asociados al tipo de cambio. En la medida que el gobierno está comprometido a mantener un crecimiento sólido, no parece probable que recorte abruptamente el crecimiento económico para hacer retroceder la inflación, como suele suceder. Esto es particularmente cierto, ya que no ha agotado las otras alternativas a su disposición. Por lo expuesto, hoy no parece que la expansión económica actual del país esté por terminar en un futuro cercano (M. Weisbrot y L. Sandoval, 2007: 26).

Mientras estos reajustes en el ámbito económico-estructural de la sociedad están sirviendo como muro de contención a la beligerancia de las clases dominantes, e incluso como posibilidad para la eventual incorporación política de una parte de éstas en el bloque gobernante (como se verá hacia el final de la tesis), la dimensión superestructural también sufrió algunos reacomodos después del referendo del 2004.

3.1.3 Reconstruyendo las bases materiales de la Nación (III): la Reforma Agraria

Bajo el amparo de la nueva Ley de Tierras de la cual se habló anteriormente, durante los primeros tres años de operación (2002-2004) el Instituto Nacional de Tierras (INTI) distribuyó parcelas por más de dos millones de hectáreas (en su mayoría propiedad del Estado) a unas 100,000 familias, aunque, en algunos casos, sí afecto algunos terrenos reivindicados como propios por ganaderos. Algunas de estas afectaciones movilizaron a los propietarios quienes llegaron a emplear la violencia contra los campesinos que serían beneficiarios, provocando la muerte de decenas de dirigentes agrarios y campesinos. Sin embargo, no es sino a partir del 2005 que se pone efectivamente en marcha la Reforma Agraria venezolana mediante la firma, el 10 de enero, del *Decreto para la reorganización de la tenencia y uso de la tierra de vocación agrícola*, al que el Presidente Chávez denominó "Guerra contra el latifundio": "La norma indica que la distribución de la tierra permanece en manos del Estado y faculta al gobierno a promover la formación de cooperativas de campesinos y granjas colectivas. Grava con un impuesto a todo predio que esté sin cultivar en más de 80%. Otorga tierra a los campesinos que no la tienen y que se comprometan a sembrarla".[90]

Según diversas estimaciones, desde que arrancó la Reforma Agraria van más de 130 campesinos asesinados por estar involucrados en tomas o demandas de tierras: "Impulsada

[90] Luis Hernández Navarro, "Venezuela: paradojas de una reforma agraria" en *Masiosare* No. 388, suplemento del periódico *La Jornada*, México, 29.05.05., s.p.

desde arriba [la Reforma Agraria] se ha topado simultáneamente con la desidia o el sabotaje de parte de la burocracia estatal, las redes de poder de los grandes latifundistas, la violencia paramilitar, un sistema de procuración de justicia heredado del viejo régimen y la falta de organización autónoma campesina" (L. Hernández, 2005: s.p.). No obstante estas dificultades, se han dado algunos avances: a finales de de 2006 el INTI calculaba en 5 millones de hectáreas las tierras que han sido regularizadas en su tenencia y uso. Otro aspecto de la Reforma ha sido la titulación de tierras a nombre de mujeres campesinas. Finalmente, también es de destacar la apuesta de la Reforma por recatar el conuco[91] como fuente histórica de la biodiversidad agraria.

3.2 Redefinición de las relaciones Estado-clases sociales

3.2.1 Debilidad orgánica del bloque popular: las elecciones regionales de 2004

Hacia 2004 la estructural debilidad y falta de cohesión interna de las clases subalternas venezolanas para tomar las iniciativas políticas más allá de lo *económico-corporativo* inmediato, seguía siendo suplida por la conducción del presidente Chávez. Desde finales de 2003, los partidos políticos y movimientos sociales del bloque popular fueron convocados por Chávez para conformar el "Comando Electoral Ayacucho", que tendría como objetivo recabar las pruebas de las irregularidades que la oposición había cometido durante la recolección de las firmas para el referendo revocatorio, aunque sus tareas también se extendieron al proceso de selección interna de las candidaturas para gobernadores y alcaldes para las elecciones de octubre de 2004. Una de las manifestaciones que evidenciaban tanto la falta de cohesión del bloque popular como la reproducción de prácticas heredadas de la cultura política de la era de la *pactocracia puntofijista,* fue la nominación de candidatos "a dedo"; es decir, por la cúpulas partidistas del bloque chavista. Como resumen Bonilla y El Troudi:

> La decisión de imponer candidaturas por arriba generó un enorme descontento en los sectores de base, organizaciones populares, vecinales, profesionales, culturales y en la militancia que apoya el proceso de cambios revolucionarios. Por todas partes afloran demandas a fin de que se

[91] Pequeña parcela campesina muy rica en agrobiodiversidad; es el equivalente a la milpa mesoamericana o a la chacra andina.

revisaran y evaluaran las postulaciones oficiales presentadas por los partidos" (L. Bonilla y H. El Troudi, 2004: 248-249).

Esta práctica contrastaba notablemente con la pretensión democratizadora del presidente que había previsto que la organización de Unidades de Batalla Electorales (UBEs) aglutinaran a las diferentes fuerzas del bloque popular. No obstante la prácticas autoritarias imperantes en la selección de candidatos, el proceso electoral de 2004 también permitió que un grupo de los sectores populares lograra abrir espacios democráticos para el debate y la construcción participativa de planes de gobierno con base en sus propias necesidades; con ello, "se pretendía convertir la campaña electoral regional en un acto de pedagogía política de los candidatos y base social del proceso" (L. Bonilla y H. El Troudi, 2006: 288). La enorme movilización popular del bloque chavista, así como la pérdida acelerada de legitimidad de la oposición política por las actuaciones autoritarias de las cuales había sido protagonista (y muy probablemente la incipiente recuperación que la economía mostraba hacia finales de año), se tradujeron en un incremento de la proporción de chavistas en los cargos de elección popular: el chavismo ganaba casi trescientas alcaldías (80% del total), veinte de veintidós gobernaciones y la mayoría de diputados a los Consejos Legislativos Regionales. No obstante, esa apabullante victoria que pintaba el mapa electoral venezolano de rojo, escondía tras de sí la falta de organicidad del bloque chavista, cuyo componente electoral primordial, el MVR, seguía reproduciendo muchas de las formas de operar de los partidos de antaño.

3.2.2 Las Misiones Bolivarianas (II): su desarrollo

Como bien advertía Gramsci ya en la década de los treinta del siglo pasado, una "reforma intelectual y moral no puede dejar de estar ligada a un programa de reforma económica, incluso el programa de reforma económica es precisamente el modelo concreto en que se presenta toda reforma intelectual y moral" (A. Gramsci, 1999, vol. V: 17). Justamente, esta organicidad entre reforma económica y reforma moral es la que desarrolló con mayor fuerza el bloque bolivariano a través de las Misiones.

Ya se señaló con anterioridad que las primeras comenzaron a mediados de 2003 con la colaboración de Cuba. Como desde el inicio demostraron ser una estrategia exitosa para la atención de las necesidades más urgentes de los sectores populares, el gobierno bolivariano

decidió ampliar su cobertura tanto en las áreas iniciales como hacia otros ámbitos de la exclusión social. Poco a poco, a partir de 2004, las Misiones fueron creciendo tanto en cobertura numérica como en diversificación temática: hoy existen alrededor de 20 misiones que, además de la educación y la salud, se abocan a resolver los problemas tan diversos como el de abasto de alimentos y nutrición, vivienda, reforestación, indigencia, cooperativismo y economía popular, promoción del deporte, cedulación y promoción del desarrollo de los pueblos indígenas, etcétera.

Al igual que las primeras Misiones, la estructura de las nuevas se creó a partir de una comisión presidencial constituida por diversos organismos del sector público, junto con un presupuesto extraordinario dirigido a la administración de recursos provenientes, principalmente, de la renta captada por PDVSA; es decir, operaron como estructuras paralelas a las ya existentes para superar las trabas burocráticas de las que se habló con anterioridad. Otra de las claves de las Misiones fue la incorporación de numerosos grupos y organizaciones sociales a la gestión de las mismas, como los Círculos Bolivarianos o los Comités de Tierras Urbanas que ya operaban en las zonas marginadas. Finalmente, "la participación activa de cuerpos militares en las Misiones en el marco de la alianza cívico-militar se convirtió en otra fuerza motora que permitió expandir de manera rápida las coberturas y, sobre todo, apoyar la logística del esfuerzo a nivel nacional".[92]

Si bien es cierto que desde el punto de vista de los sectores a los que involucran y sus objetivos más inmediatos, las Misiones podrían considerarse como políticas de carácter "socialdemócrata", por sus características novedosas respecto al papel protagónico de las personas

> […] hacen que no sólo sirvan para que el pueblo venezolano cubra sus necesidades básicas, para eliminar en gran medida la desigualdad y para mejorar su situación material, sino también para crear una nueva estructura del Estado donde el poder protagónico del pueblo permita la transformación de los patrones de calidad de vida y salud social.[93]

---

[92] Yolanda D'Elia (coord.), Las Misiones Sociales en Venezuela: una aproximación para su comprensión y análisis, Caracas, ILIDS, 2006, p. 209.

[93] Jesús Barreiro Hurlé, "Las políticas sociales en Venezuela,", en Torres López, Juan (coord.), *Venezuela a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana*, Barcelona, Icaria, 2006, p. 100.

A casi cuatro años de su nacimiento, la única evaluación académica más o menos global de que se dispone sostiene que "Estas Misiones fueron progresivamente ganando mayor alcance en objetivos sociales, políticos, institucionales y culturales vinculados al proyecto de definición bolivariana a medida que se iba ampliando su ejecución en el tiempo" (Y. D'Elia, 2006: 9). Esta evaluación del ILDIS concluyó que las Misiones han sido bastante consecuentes con los objetivos más amplios del proyecto bolivariano comandado por Chávez. En este mismo sentido, cuando el gobierno chavista asegura que en estos últimos años las Misiones *han transformado de manera radical el mapa social del país*, creemos que hay suficientes evidencias al respecto: además de la alfabetización de más de un millón 500 mil venezolanos y venezolanas[94] y la cedulación de millones de personas que hasta antes de 1998 carecían de cédula de identidad y, por ende, de los más elementales derechos políticos, se pueden destacar los siguientes:

> En 1998 había 1.628 médicos ejerciendo la atención primaria de una población de 23,4 millones de personas. Hoy hay 19.571 para una población de 27 millones. En 1998 había 417 salas de emergencia, 74 centros de rehabilitación y 1.628 centros de atención primaria. Ahora, en cambio, hay 721 salas de emergencia, 445 centros de rehabilitación y 8.621 centros de atención primaria (incluidos 6.500 puntos de consulta ubicados generalmente en los barrios pobres, que están además en proceso de ampliarse para transformarse en centros de atención primaria general). Desde 2004 hasta la fecha, 399.662 personas fueron operadas de la vista y recuperaron la visión. En 1999 había 335 pacientes de VIH que recibían tratamiento anti-retroviral en los servicios de salud pública, comparados con los 18.538 que lo obtuvieron en 2006.
>
> El gobierno venezolano también ha ampliado enormemente el acceso a los alimentos subsidiados. En 2006, existían 15.726 establecimientos en todo el país que comercializaron alimentos a precios subsidiados (posibilitando un ahorro promedio de 27% y 39% en comparación con los precios de mercado de 2005 y 2006 respectivamente). Adicionalmente, se expandieron los programas especiales para las personas en condición de extrema pobreza (por ejemplo, las 'Casas de Alimentación' y el programa de distribución de alimentos gratuitos conocido como 'Suplemento Alimentario'), beneficiaron en promedio a un 67 por ciento y un 43 por ciento de la población en 2005 y 2006 respectivamente. Estos datos no incluyen a 1,8 millones de niños beneficiarios de un programa de alimentación escolar en 2006, que contrastan con los 252.000 beneficiarios de 1999 […] El acceso a la educación también ha mejorado sustancialmente. Por ejemplo, el número de alumnos de las escuelas bolivarianas de educación primaria aumentó, pasando de 271.593 en el año escolar 1999/2000 a 1.098.489 en el año escolar 2005/2006 (M. Weisbrot y L. Sandoval, 2007: 11-13).

[94] Gracias a la Misión Róbinson el 28 de octubre de 2005, Venezuela fue declarada por la UNESCO "Territorio Libre de Analfabetismo".

Más allá de los resultados cuantitativos, lo más destacado de las Misiones bolivarianas ha sido su capacidad para ir generando nuevas formas de organización al interior de los grupos subalternos y entre éstos y la clase política: "una suerte de confluencia a medio camino entre lo impulsado desde la cúspide del poder y lo gestionado por las propias comunidades" (A. De Cabo de la Vega, 2006: 43). Es decir, las Misiones están sirviendo para reconstituir los vínculos estatales que se habían deteriorado hacia el final de la IV República, pero ahora sobre la construcción paulatina de nuevas bases en la relación mando-obediencia, que están permitiendo a parte de las clases subalternas verse a sí mimas como ciudadanos sujetos de derechos. O, como concluye el equipo del ILDIS, las Misiones

> […] podían ofrecer la oportunidad al gobierno de prefigurar el funcionamiento de un nuevo Estado desburocratizado en cuanto a sus capacidades de respuesta, comprometido con sus funciones sociales, y abierto a incorporar las líneas estratégicas del gobierno en sus estructuras y acciones. La estrategia de las Misiones se convierte entonces en la posibilidad de acercar la estructura estatal y la acción pública hasta los más necesitados y excluidos, así como en una herramienta de lucha contra la corrupción y la ineficiencia de la gestión gubernamental (Y. D'Elia, 2006: 208).

Por supuesto que, en su desarrollo, las Misiones no han escapado del todo a los lastres del aparato de Estado heredado, tales como la corrupción, el burocratismo y las prácticas asistencialistas. Con todas las contradicciones que puedan tener, sin duda las Misiones han sido el pilar fundamental para el incremento significativo de la calidad de vida de los venezolanos y venezolanas, sobre todo de aquellos que se encontraban en condiciones de marginación más severas.

Finalmente, es pertinente hacer referencia a otro aspecto que se considera muy importante en el proceso de reconstitución del orden estatal: la dimensión de la identidad. Como señala una investigación sobre la Misión Barrio Adentro, ésta fortaleció "el sentido de pertenencia al espacio local, [además de] elevar la conciencia que se tiene sobre los problemas del barrio y las posibilidades que tienen las misma comunidades para superarlos con cooperación solidaria" (Alvarado citado en Y. D'Elia, 2006: 218-219). El proceso identitario está fermentándose no sólo a escala de comunidad o barrio, sino en un ámbito de mayor

amplitud: las Misiones han venido favoreciendo el desarrollo de una identidad y un sentimiento de pertenencia en tanto pueblo bolivariano.[95]

3.2.3 Reconstitución de las bases simbólicas del Estado-Nación: la ideología bolivariana

Los puntos fuertes o débiles del Estado se hallan en la manera en que éste se refleja en la conciencia de los hombres.

György Lukács

La dimensión simbólico-cultural de la vida estatal captada por Gramsci en los treinta, está siendo revalorada por un grupo de investigadores de la tradición del marxismo crítico.[96] Por ejemplo, Roux nos invita a pensar al Estado como "una forma de la vida social que no está dada de antemano, que se realiza en el conflicto, cuyos fundamentos inmateriales (en los mitos, creencias y representaciones colectivas) se tejen en los tiempos largos de la historia y en cuya configuración intervienen también activamente las clases subalternas" (R. Roux, 2005: 41). No obstante su naturaleza básicamente simbólica, la lucha por ganar la adhesión de las mentes y los corazones de los ciudadanos a un proyecto político también va dejando sus huellas en la materialidad del mundo, como el propio Gramsci advertía cuando reflexionaba sobre las ideologías *históricamente orgánicas*.[97] Para Gramsci esa batalla ideológica tiene la finalidad de afianzar el orden estatal (o de transformarlo, según sea el caso). Lo que acá importa es que ese combate no se libra exclusivamente en la esfera de la sociedad política y el

[95] Ya Thompson señalaba que los seres humanos "También viven su propia experiencia como *sentimiento*, y elaboran sus sentimientos en las coordenadas de su cultura, en tanto que normas, obligaciones y reciprocidades familiares y de parentesco, valores o –mediante formas más elaboradas– como experiencias artísticas o creencias religiosas. Esta mitad de la cultura […] puede denominarse conciencia afectiva y moral" (E.P. Thompson, 1981: 263).

[96] Como Adolfo Gilly, *Historia a contrapelo. Una constelación*, México, D.F., ERA, 2006; William Roseberry, "Hegemonía y lenguaje contencioso", en Joseph, Gilbert y Daniel Nugent (comp.), *Aspectos cotidianos de la formación del Estado*, México, D.F., ERA, 2002; Rhina Roux, *El príncipe mexicano. Subalternidad, historia y Estado*, México, D.F., ERA, 2005.

[97] Hay que distinguir –decía Gramsci– "entre ideologías históricamente orgánicas, que son necesarias para una cierta estructura, e ideologías arbitrarias […] En cuanto históricamente necesarias, tienen una validez que es 'psicológica': organizan masas humanas, forman el terreno en el cual los hombres se mueven, adquieren conciencia de su posición, luchan, etc." (A. Gramsci, 1970: 364).

aparato de Estado sino que se da en el conjunto de instituciones privadas a las que se da el nombre de sociedad civil: la Iglesia, las escuelas (públicas y privadas), los medios de comunicación (públicos y privados), etcétera.

Así, en la Venezuela contemporánea esos rastros materiales de la lucha por ganar el consenso requerido para estabilizar un orden estatal están por todas partes, y no son patrimonio exclusivo de alguno de los dos bloques que se disputan la conducción de la sociedad. Por un lado, están los grandes medios de comunicación en manos de la oligarquía que tenían un cuasi monopolio sobre el espectro radioeléctrico, así como múltiples estaciones de radio y periódicos (L. Britto, 2006). Pese a su enorme poder económico y su alcance social, una de las grandes debilidades de los medios privados es que no han desarrollado nada parecido a una *ideología orgánica* como el *bolivarianismo* que profesa Chávez. Por otro lado, está al bloque popular que comenzó a crear una infinidad de medios alternativos, muchos de los cuales hoy se encuentran4 articulados en la Asociación Nacional de Medios de Comunicación Libres y Alternativos (ANMCLA); de igual manera, el Ejecutivo hizo lo propio rescatando del olvido al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Pero no sólo en los medios venezolanos se disputa la hegemonía en su dimensión político-ideológica, también los púlpitos se vuelve trincheras de esta guerra; si bien la alta jerarquía de la Iglesia Católica militó al lado de la derecha golpista, un número importante de sacerdotes se han declarado *chavistas* y algunos de ellos hasta tienen programas en la televisión estatal; el propio Chávez ha puesto mucho empeño en arrebatarle la figura de Cristo a la derecha y ponerla a militar en el bloque popular. Algo similar sucede en las escuelas, en los liceos, en las universidades, en las calles, en las paredes… En todos estos espacios se disputa palmo a palmo la batalla ideológica. Sin esta dimensión simbólica de lo estatal el cuadro quedaría incompleto; mejor, descolorido.

Tampoco podemos obviar que, por su carisma personal, Chávez ha sabido expresar desde su actividad pública cotidiana esas dimensiones simbólicas de lo estatal: no se trata solamente de haber rescatado para el pueblo a Bolívar, a Miranda y a los símbolos patrios de las manos de las oligarquías sino, sobre todo, del hecho que los grupos subalternos lo identifican como parte de sí mismos (lo cual no carece de fundamento dado el origen popular del presidente).

Las diferentes formas en que Chávez se vincula con el pueblo tienen un significado *en términos estatales*. Ese estilo personal de gobernar del presidente es una de las principales manifestaciones de la lucha contra hegemónica que opone los principios de lo *nacional-popular en emergencia* a lo *nacional-estatal en descomposición*, como apuntábamos en la Introducción; o, para ponerlo en otros términos, del poder *constituyente* frente al poder *constituido*. Así, las múltiples manifestaciones de sus vínculos directos con las multitudes pueden ser entendidas como esfuerzos permanentes por reforzar el polo de lo nacional-popular (contra hegemónico) contra el orden estatal en descomposición, pero aún vivo en sus manifestaciones materiales (aparato de Estado, etc.) y simbólicas (cultura burocrática, de corrupción, rentista…). Por más contradictorio que pudiera parecer, el presidente Chávez se piensa a sí mismo como una fuerza contra el orden estatal existente, e intenta subvertir a éste por un nuevo orden en donde lo popular tenga el mayor peso dentro de la fórmula; en este sentido se puede interpretar su relación con *el pueblo*.[98] Sin embargo, esa fortaleza es, al mismo tiempo, una de las mayores debilidades del proceso bolivariano, pues esos impulsos contra hegemónicos siguen descansado en gran medida en la persona del presidente, por lo que existe una conciencia más o menos generalizada entre los propios grupos subalternos que el proceso revolucionario sería hoy día muy vulnerable sin la conducción política de Chávez. Es muy probable que esa conciencia de las fortalezas y debilidades haya sido la que empujó al propio Chávez a plantear la necesidad de transitar a una nueva etapa del proceso, a la que denominó *El Salto Adelante*.

3.2.4 Un salto adelante... ¿y dos atrás?: los años recientes del proceso bolivariano

En abril de 2006 se aprobó la Ley de los Consejos Comunales, mediante la cual éstos se separaban legalmente de los Consejos Locales de Planificación Pública; es decir, de aquellos consejos que habían sido copados paulatinamente por la burocracia chavista (alcaldes, diputados, etc.). Además, a la promulgación de dicha Ley se sumó la creación de un Consejo

[98] Para no dar lugar a confusiones, se entiende al *pueblo* en el mismo sentido que Portantiero: "…es la propia categoría de *pueblo* la que debe ser construida, en tanto voluntad colectiva. El pueblo no es un dato, sino un sujeto que debe ser producido, una unidad histórica de múltiples determinaciones, un concreto que sintetiza a 'las masas', su primera apariencia, y a 'las clases', su principal determinación analítica" (J. Portantiero,1986: 129).

Presidencial del Poder Popular (CPPP). No obstante el potencial organizativo de la figura de los Consejos, algunos autores como Margarita López Maya han señalado algunas de sus limitaciones derivadas de la propia Ley, como su dependencia directa de las decisiones del Ejecutivo: "Según la ley, los consejos dependen en todo del Ejecutivo Nacional. Allí se registran y a través del CPPP en sus distintos niveles administrativos se revisan y aprueban los recursos que se les otorgan".[99] Los Consejos Comunales tienen una vida corta: son figuras embrionarias del nuevo orden estatal; formas de organización popular que enfrentan las presiones no sólo de la oposición, sino de buena parte de la burocracia estatal que claramente ve en ellos una amenaza a sus cotos de poder, por lo cual hace todo lo posible por cooptarlos o controlarlos:

> Ha habido y continúa existiendo una tensión muy fuerte entre, por un lado, la concepción de los Consejos Comunales como la organización popular de base, expresión del conjunto plural de los sectores de la sociedad, participando y decidiendo a nivel local sobre sus propios asuntos y, por el otro, concebir al Consejo Comunal como "rojo, rojito", como el encuentro de base de los chavistas.[100]

Según Edgardo Lander dicha tensión se debió, al menos en parte, a que el nacimiento de los consejos se desarrolló en el mismo periodo en que otras dos iniciativas fueron lanzadas desde el aparato estatal: una propuesta reforma constitucional que fue a referendo a comienzos en diciembre de 2007 y el llamado a la construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Para Lander, la agenda de la reforma subordinó no sólo la lógica de creación de los consejos comunales, sino también a la del naciente PSUV.

La propuesta de reforma constitucional que fue elaborada desde la cúspide del aparato estatal aglutinó una serie de propuestas de cambios al marco institucional no del todo coherentes. Eso, en conjunción con una virulenta campaña de la oposición a la misma y un malestar creciente de la población respecto a la gestión de la burocracia estatal derivó en la primera derrota electoral del chavismo desde 1998. Como apunta Lander:

---

[99] Margarita López Maya, "Aprendamos de nosotros mismos y de la experiencia de otros. Consejos comunales", en http://www.aporrea.org/poderpopular/a30301.html, 4.02.07.

[100] Frank Gaudichaud, "El proceso bolivariano y las tensiones de un proyecto alternativo. Entrevista a Edgardo Lander", en http://www.tni.org//archives/act/19151, 2.02.09.

> las explicaciones a la abstención de cerca de tres millones de votantes chavistas podrían encontrarse tanto en dudas o desacuerdos con la propuesta de la reforma constitucional en sí misma (en sus contenidos y en sus modalidades de elaboración/discusión), como en el creciente malestar que han generado diversos aspectos de proceso venezolano así como por las deficiencias notorias de la gestión pública.[101]

Así, dicha derrota sería un síntoma de lo que algunos intelectuales del bloque popular han denominado "amesatamiento" del proceso,[102] que se alimenta de "un creciente descontento popular con la distancia entre el discurso o retórica de la revolución y el día a día de la atención a las necesidades de la gente" (Lander, 2008: 156).

Paradójicamente, durante estos últimos años la administración ha procedido con algunas nacionalizaciones en las áreas de telefonía, electricidad, producción de cemento y de supermercados; acciones que parecen apuntar en la profundización del sentido progresista del proceso. Sin embargo, tales acciones no han sido suficientes para contener el creciente descontento de algunas capas del bloque popular que han retirado parcialmente su apoyo electoral al chavismo: en las elecciones regionales de 2008 el joven PSUV ganó 17 gobernaciones, pero perdió la Alcaldía Metropolitana de Caracas y Maracaibo, así como cinco estados (tres de los cuales poseen la mayor población del país: Zulia, Carabobo y Miranda), con lo cual se dibuja un nuevo mapa político-electoral en el país.

Finalmente, es importante recordar que si bien la beligerancia de las clases dominantes ha disminuido relativamente durante los últimos años, el grueso de aquellas sigue esperando el momento oportuno para abortar el proceso de reformas en curso. Por lo pronto, no pierden la oportunidad de castigar a los sectores más combativos de las capas subalternas mediante la represión directa, como los múltiples casos de violencia ejercida contra dirigentes sindicales y campesinos por parte de grupos paramilitares y gatilleros financiados por empresarios y caciques regionales.[103] Por otro lado, aprovechan ciertas coyunturas favorables para debilitar

---

[101] Edgardo Lander, "El referéndum sobre la reforma constitucional: el proceso político en Venezuela entra en una encrucijada crítica", en *Revista. Venezolana de Economía y Ciencias Sociales,* vol. 14, nº 2 (may-ago), Caracas, 2008, p. 135.

[102] Modesto Emilio Guerrero, "Constitución, dinámica y desafíos de las 'vanguardias' en la revolución bolivariana", en *Revista Herramienta*, No. 33, Buenos Aires, octubre 2006.

[103] Manuel Sutherland, "Venezuela: Paramilitares, parapolítica, sicariato, casinos, formas de exterminio y lumpenización", en http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article554, 29.07.09.

el apoyo de la población al chavismo apelando a los expedientes de la especulación y el acaparamiento de bienes-salario.

A manera de conclusión

Una las consecuencias inmediatas del fracaso del ciclo de insurrección de las clases dominantes fue la apertura, desde mediados de 2004, de un periodo de relativa estabilidad política. Este paréntesis en la lucha abierta, así como la retoma del control sobre PDVSA y los altos precios del petróleo permitieron al gobierno de Chávez desplegar un ambicioso programa de gasto público concentrado en la reactivación del aparato productivo y en el gasto social. Es decir, por primera vez, después de 5 años de gobierno, podía concentrar sus energías en la reconstrucción de las precarias bases materiales de la Nación que habían sido desmanteladas no sólo por el periodo neoliberal sino por el reciente paro-sabotaje.

Las principales líneas a seguir fueron de muy diverso cuño: apoyo financiero y logístico a las pequeñas y medianas empresas; promoción del cooperativismo; inversión estatal en infraestructura; atracción de inversión extranjera para desarrollar sectores estratégicos de la economía; ampliación del empleo público, así como la promulgación de un conjunto de leyes y la creación de nuevas instituciones estatales encaminadas a reactivar la producción y a *sembrar el petróleo*. Estas medidas se tradujeron en un aumento súbito de la capacidad de consumo de las mayorías y permitieron una reactivación del proceso de acumulación, pero ahora centrado en el mercado interno en combinación con la exportación de petróleo. Con ello, se afianzaron algunos sectores de la burguesía y comenzaron a emerger nuevos grupos, hoy muy cercanos a Chávez.

Por otro lado, se profundizaron las Misiones sociales para garantizar los derechos sociales básicos de las mayorías, las cuales han elevado significativamente su calidad de vida. Este proceso también ha estado acompañado por la proliferación de organizaciones de las clases subalternas que están intentando ganar para sí las trincheras en los diferentes espacios de su reproducción. Dichas organizaciones han sido el producto de un doble movimiento: algunas, nacidas autónomamente, “desde abajo”; otras, por el impulso del liderazgo chavista, “desde arriba”. Ambos tipos de organizaciones coexisten, se compenetran, pero también expresan dos lógicas de resolución de la lucha por la hegemonía.

Estos desarrollos del proceso no se han dado sin contradicciones importantes. Por el contrario, actualmente existen fuertes tensiones que no sólo se expresan en la oposición entre *chavistas* y *antichavistas*, sino que cada vez más se viven al interior del propio bloque liderado por el presidente. Tal vez la mayor de ellas sea aquella que se desprende del hecho de la paulatina ampliación del bloque popular, al que durante los últimos dos años se han ido sumando sectores de la burguesía que aspiran no sólo al trato privilegiado por parte del Estado, sino a la incorporación directa a su aparato. Además, otro proceso que no puede pasar inadvertido son múltiples casos de corrupción existentes a lo ancho del aparato estatal, mismos que están permitiendo el enriquecimiento ilícito de funcionarios de todo nivel. La corrupción, junto al burocratismo y al proyecto de restauración burguesa del ala más conservadora del chavismo son algunos de los principales obstáculos que impiden que el proceso en marcha trascienda los límites del llamado nacionalismo burgués desarrollista, tan familiar a nuestra historia latinoamericana.[104]

Por lo pronto, pareciera que mientras las clases subalternas no logren superar la dispersión histórica a la cual han sido empujadas, así como la formulación de un proyecto propio: autónomo y con una perspectiva de clase, pareciera que los derroteros que seguirá el proceso venezolano estarán supeditados a la dirección política del chavismo "desde arriba", pues es el presidente quien continúa tomado las iniciativas políticas de más largo aliento, y marcando el rumbo del proceso, con lo cual tiende a consolidarse el carácter cesarista del actual régimen; en este nuevo orden de cosas que, como decía Gramsci y tanto le gusta repetir al presidente Chávez, lo viejo no termina de morir, y lo nuevo no termina de nacer.

[104] Para un sugerente acercamiento a los alcances y límites históricos del nacionalismo burgués, véase Vivek Chibber, "¿Reviviendo el estado desarrollista? El mito de la 'burguesía nacional'.", en Leo Panitch y Colin Layes (eds.), *El imperio recargado. Socialist Register 2005*, Buenos Aires, CLACSO-Socialist Register, 2005; Claudio Katz, "América Latina. Socialismo o Neodesarrollismo", en http://www.rebelion.org/noticia.php?id= 42281, 1.12.06.

Bibliografía

América Económica, "Durmiendo con Chávez", en *Revista América Económica,* No. 316-317, enero-febrero, 2006.

Andrade, Pablo (ed.), *Constitucionalismo autoritario: los regímenes contemporáneos en la Región Andina*, Quito, UASB-Corporación Editora Nacional, 2005.

Antillano, Andrés, "Lucha por el reconocimiento y la inclusión en los barrios populares: la experiencia de los Comités de Tierras Urbanas", en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales,* Caracas, Vol. 11, no. 3, sep-dic, 2005, pp. 205-218.

Arenas, Nelly, "¿Languidece el corporativismo? De Fedecámaras a los nuevos actores empresariales en Venezuela", en AA.VV., *Venezuela Visión Plural. Una mirada desde el CENDES* Tomo I, Bid & Co. Editores-Cendes-UCV, 2005.

Ávalos, Gerardo, *Leviatán y Behemoth: figuras de la idea del Estado*, México, D.F, UAM-X, 2001.

Baptista, Asdrúbal, "El capitalismo rentístico. Elementos cuantitativos de la economía venezolana", en *Cuadernos del CENDES*, Año 22, No. 60, Caracas, septiembre-diciembre, 2005.

----------y Mommer, Bernard, "Renta petrolera y distribución factorial del ingreso", en Nissen, Hans-Peter y Bernard Mommer (coord.) *¿Adiós a la bonanza? Crisis de la distribución del ingreso en Venezuela*, Caracas, ILDIS-Cendes-Nueva Sociedad, 1989.

Barreiro Hurlé, Jesús, "Las políticas sociales en Venezuela,", en Torres López, Juan (coord.), *Venezuela a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana*, Barcelona, Icaria, 2006.

Benjamin, Walter, "Sobre el concepto de historia", en http://www.bolivare.unam.mx/traducciones/concepto_historia1.html

Bergquist, Charles, *Los trabajadores en la historia latinoamericana*. *Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y Colombia*, Bogotá, Siglo XXI, 1988.

Bonilla, Luis y Haiman El Troudi, *Historia de la Revolución Bolivariana. Pequeña crónica 1948-2004*, Caracas, MINCI, 2004.

Borón, Atilio, "Crisis de las democracias y movimientos sociales en América Latina: notas para una discusión", en *Revista del OSAL,* año VII, no. 20, Buenos Aires, CLACSO, 2006.

Bowman, Betsy y Bob Stone, "La revolución cooperativa de Venezuela" en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=36452, 22.08.06.

Britto, Luis, *Venezuela: investigación de unos medios por encima de toda sospecha*, Caracas, MINCI, 2006.

Cariola, Cecilia y Miguel Lacabana, *Pobreza, nueva pobreza y exclusión social*, Caracas, BCV, 2005.

Carrera Damas, Germán, *Venezuela: proyecto nacional y poder social*, Barcelona, Crítica, 1986

Cockroft, James, *América Latina y Estados Unidos. Historia y política país por país*, México, D.F., Siglo XXI, 2001.

Combellas, Ricardo, *El poder ejecutivo en la Constitución de 1999*, Caracas, en www.ugma.edu.ve/Acerca%20de%20UGMA/Publicaciones/Documentos/UGMA%20juridica/RUGN1/ELPODEREJECUTIVO.doc, s/f.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, Imprenta Nacional, 2000.

Coronil, Fernando, *El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela*, Caracas, Nueva Sociedad. 2002.

Chávez, Hugo, *Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2001-2007*, Caracas, 2001.

Chibber, Vivek, "¿Reviviendo el estado desarrollista? El mito de la 'burguesía nacional'.", en Panitch, Leo y Colin Layes (eds.), *El imperio recargado. Socialist Register 2005*, Buenos Aires, CLACSO-Socialist Register, 2005.

D'Elia, Yolanda (coord.), *Las Misiones Sociales en Venezuela: una aproximación para su comprensión y análisis*, Caracas, ILIDS, 2006.

De Cabo de la Vega, Antonio, "Las transformaciones institucionales", en Torres López, Juan (coord.), *Venezuela a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana*, Barcelona, Icaria, 2006.

Denis, Roland, "La nueva ratio productiva (propuestas de un modelo alternativo de desarrollo)", en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, UCV, año 9, no. 1, (enero-abril), 2003.

---------"Movimientos sociales, gobierno y burocracia en el proceso bolivariano: La revolución desde la izquierda", en http://lahaine.org/index.php?blog=3&p=14978, 3.06.06.

Ellner, Steve, "El sindicalismo frente al desafío del chavismo", en Ellner, Steve y Daniel Hellinger (eds.), *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, Caracas, Consejo de Investigación de la UDO / Nueva Sociedad, 2003a.

---------"Tendencias recientes en el movimiento laboral venezolano: autonomía vs control político", en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 9, No. 3, septiembre-diciembre, 2003b

---------"La sendas revolucionarias y no revolucionarias del movimiento chavista", en Ellner, Steve, *Neoliberalismo y Antineoliberalismo en América Latina: el debate sobre las estrategias*, Caracas, Tropykos, 2005.

---------"Las estrategias 'desde arriba' y 'desde abajo' del movimiento de Hugo Chávez", en *Cuadernos del CENDES,* Año 23, No. 62, mayo-agosto, 2006.

Espinasa, Ramón, "Las contradicciones de Pdvsa: más petróleo a Estados Unidos y menos a América Latina" en *Revista Nueva Sociedad*, No. 204, Caracas, julio-agosto, 2006.

FRETECO, "La Organización de los trabajadores cogestionarios y la construcción de la empresa socialista", en http://www.controlobrero.org/content/view/148/30/, 27.06.07.

Gaceta Oficial de la Federación de la República Bolivariana de Venezuela (13-09-05).

García Danglades, Antonio Guillermo, *Oposición a la carta. Análisis crítico de la Contrarrevolución*, MINCI, 2006.

García-Guadilla, María Pilar, "Sociedad civil: institucionalización, fragmentación, autonomía", en Ellner, Steve y Daniel Hellinger (eds.), *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, Caracas, Consejo de Investigación de la UDO / Nueva Sociedad, 2003.

Gaudichaud, Frack, "El proceso bolivariano y las tensiones de un proyecto alternativo. Entrevista a Edgardo Lander", en http://www.tni.org//archives/act/19151, 2.02.09.

Gilly, Adolfo, *Historia a contrapelo. Una constelación*, México, D.F., ERA, 2006.

Guerrero, Modesto Emilio, "Constitución, dinámica y desafíos de las 'vanguardias' en la revolución bolivariana", en *Revista Herramienta*, No. 33, Buenos Aires, octubre 2006.

Golinger, Eva, *El Código Chávez. Descifrando la intervención de Estados Unidos en Venezuela*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2005.

Gramsci, Antonio, *Antología* (selección, traducción y notas de Manuel Sacristán), México, D.F., Siglo XXI, 1970.

---------*Cuadernos de la Cárcel* (Edición crítica del Instituto Gramsci, volúmenes 1 al 5), México, D.F., ERA-BUAP, 1999.

---------*Cuadernos de la Cárcel* (Edición crítica del Instituto Gramsci, volumen 6), México, D.F., ERA-BUAP, 2000.

Hernández Navarro, Luis, "Venezuela: paradojas de una reforma agraria" en *Masiosare* No. 388, suplemento del periódico *La Jornada*, México, 29/05/2005.

Katz, Claudio, "América Latina. Socialismo o Neodesarrollismo", en http://www.rebelion.org/noticia.php?id= 42281, 1.12.06.

Kornblith, Miriam, *Venezuela en los noventa. La crisis de la democracia*, Caracas, UCV-Ediciones IESA, 1998.

Lacabana, Miguel, "Petróleo y hegemonía en Venezuela. La construcción de un proyecto nacional democrático-popular en el siglo XXI", en Arceo, Enrique y Eduardo Basualdo (Comp.) *Neoliberalesmo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales*, Buenos Aires, CLACSO, 2006.

Lalander, Rickard y Francisco García Samaniego, "Chavismo y oposición en Venezuela: Exploraciones críticas sobre democracia, descentralización y populismo", en http://www.ciudadpolitica.com/modules/news/article.php?storyid=569, 1.08.05.

Lander, Edgardo, "Venezuela: la búsqueda de un proyecto contrahegemónico", en *Revista Question*, Caracas, Julio, 2004.

---------- "El referéndum sobre la reforma constitucional: el proceso político en Venezuela entra en una encrucijada crítica", en *Revista. Venezolana de Economía y Ciencias Sociales,* vol. 14, nº 2 (may.-ago), Caracas, 2008.

Ley de los Consejos Comunales, Caracas, 2006.

Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, Caracas, 2002.

Ley Orgánica de Hidrocarburos, Caracas, 2002.

Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Caracas, 2005.

López Maya, Margarita "La protesta popular venezolana entre 1989 y 1993 (en el umbral del neoliberalismo)", en Margarita López Maya (ed.) *Lucha popular, democracia, neoliberalismo. Protesta popular en América Latina en los años de ajuste*, Caracas, Nueva Sociedad, 1999.

------- *Protesta y cultura en Venezuela. Los marcos de acción colectiva en 1999*, Bs. As., CLACSO, 2002.

--------*Del viernes negro al referendo revocatorio*, Caracas, Alfadil Ediciones, 2005.

--------"Aprendamos de nosotros mismos y de la experiencia de otros. Consejos comunales", en http://www.aporrea.org/poderpopular/a30301.html, 4.02.07.

López Maya, Margarita y Luis Lander "Ajustes, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela: 1984-1998", en Sader, Emir (coord.) *El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas*, Bs. As., CLACSO, 2001.

Marx, Carlos, "La Guerra Civil en Francia", en Marx y Engels, *Obras escogidas*, vol. II, Moscú, Editorial Progreso, 1976 [1871].

Mather, Stevem "The Second UNT Labor Congress One Month Later: The Real Fracture in Venezuela's Labor Movement is Ideological", en http://www.venezuelanalysis.com/articles.php?artno=1775, 10.07.06.

Maza Zavala, Domingo, *Venezuela: economía, tiempo y nación*, Caracas, Vadell Hermanos Editores, 2007.

---------"Historia de medio siglo en Venezuela: 1926-1975", en AA.VV. *América Latina: historia de medio siglo*, Vol. 1-América del Sur, México, D.F., Siglo XXI-Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1977.

MeiksinsWood, Ellen, *Democracia contra capitalismo*, México, Siglo XXI-UNAM, 2000.

Mészáros, István, *Más allá del Capital*, Caracas, Vadell Hermanos Editores, 2001.

Minci, *Misiones Bolivarianas*, Caracas, 2007.

Minep, *Democracia participativa y protagónica*, Caracas, Minep-Ince, 2005.

--------*Desarrollo Endógeno Bolivariano*, Caracas, Ministerio de Poder Popular para la Economía Popular, 2006.

Mommer, Bernard "Petróleo Subversivo", en http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/article/524/1.PDF, 2003.

Mujica, Norbis y Sorayda Rincón, "Caracterización de la política social y la política económica del actual gobierno venezolano: 1999-2004", en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 12, no. 1 (enero-abril), Caracas, UCV, 2006.

Neuhaus, Susana y Hugo Calello, *Hegemonía y emancipación*, Buenos Aires, Herramienta, 2006.

Piñeiro, Camila, "Democracia Laboral y Conciencia Colectiva: Un Estudio de Cooperativas en Venezuela", en, www.rebelion.org/noticia.php?id=53984, 2007.

Portantiero, Juan Carlos, "Lo Nacional-popular y la alternativa democrática en América Latina", en *Los abogados y la democracia en América Latina*, Quito, ILSA, pp. 121-152, 1986.

---------"Notas sobre crisis y producción de acción hegemónica", en Labastida, Julio (coord.), *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina*, México, D.F., Siglo XXI, 1985.

Ramírez, Rafael, *Plena soberanía petrolera: una política popular, nacional y revolucionaria*, Caracas, MINEP (Serie Discursos), 2005.

Roberts, Kenneth, "La descomposición del sistema de partidos en Venezuela vista desde un análisis comparativo", en Revista *Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 7, No. 2 (mayo-agosto), 2001.

----------"Polarización social y resurgimiento del populismo en Venezuela", en Ellner, Steve y Daniel Hellinger (eds.), *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, Caracas, Consejo de Investigación de la UDO / Nueva Sociedad, 2003.

Rodríguez, Alí, "La Reforma petrolera venezolana de 2001", en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Caracas, Vol. 8, No. 2 (mayo-agosto), 2005.

Roseberry, William, "Hegemonía y lenguaje contencioso", en Joseph, Gilbert y Daniel Nugent (comp.) *Aspectos cotidianos de la formación del Estado*, México, D.F., ERA, 2002.

Roux, Rhina, *El príncipe mexicano. Subalternidad, historia y Estado*, México, D.F., ERA, 2005

Silva Calderón, Álvaro, "Trayectoria de la nacionalización petrolera", en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Caracas, Vol. 12, No. 1 (enero-abril), 2006.

Sonntag, Heinz, "La democracia en Venezuela: una visión prospectiva", en González Casanova (coord.) *La democracia en América Latina. Actualidades y perspectivas*, México, D.F., La Jornada-CIICH-UNAM, 1995.

---------"Venezuela: el desarrollo del Estado capitalista y de su concepción teórica", en González Casanova (coord.), *El Estado en América Latina. Teoría y práctica*, México, D.F., Siglo XXI-Universidad de las Naciones Unidas, 1998.

Sutherland, Manuel, "Venezuela: Paramilitares, Parapolítica, sicariato, casinos, formas de exterminio y lumpenización", en http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article554, 29.07.09.

Thompson, E.P., *Miseria de la Teoría*, Barcelona, Crítica, 1981.

Torres López, Juan, "Economía en tiempos de convulsión: luces y sombras", en Torres López, Juan (coord.), *Venezuela a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana*, Barcelona, Icaria, 2006.

Vera, Leonardo, *Liderazgo político, renta y política económica: La gestión económica en la era de Chávez*, UCV-Latin American Center, Oxford University, 2005.

Vila Planes, Enrique, "El Desarrollo Endógeno de Venezuela", en http://www.bacyam.com.ar/contribuciones3/PonenciaSobreDesarrolloEndogenoParte1.doc y http://www.bacyam.com.ar/contribuciones3/PonenciaSobreDesarrolloEndogenoParte2.doc, 2006.

Villalobos, Carlos Luis, "El petróleo como negocio", en Mato, Daniel (coord.), *Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización*, Caracas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, 2005.

Weisbrot, Mark y Luis Sandoval, *La economía venezolana en tiempos de Chávez*, en http://www.cepr.net/documents/publications/venezuela_2007_07_spanish.pdf, Washington, Center for Economic and Policy Research, 07.07.

Wexell, Luciano, "Desafíos de la Venezuela Saudita", en *Le Monde Diplomatique* (edición colombiana), Bogotá, Marzo, 2007.

---------"Sembrando petróleo. La economía venezolana 1999-2008", suplemento especial *Desde Abajo,* Bogotá, 2009.

Zavaleta, René, *Lo nacional-popular en Bolivia*, La Paz, Plural Editores, 2008.

Cuadernos de Trabajo, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales
Universidad Veracruzana, Diego Leño 8, C.P. 91000, Col. Centro.
Xalapa, Veracruz, México.
Telfax (012288) 12 47 19
E-mail: iihs@uv.mx